



mientrastanto.e

Número 220 de febrero de 2023

Notas del mes

Castigo sin venganza

Juan-Ramón Capella

Empleos, salarios, reformas y sindicatos

Albert Recio Andreu

Trabajadores y literas

Antonio Izquierdo Escribano

Ucrania: alto el fuego y negociaciones de paz

José Luis Gordillo

Guerra de emociones

Albert Recio Andreu

En el fallecimiento de Mariano Maresca

La Redacción de «mientras tanto»

Ensayo

Una estrategia transformadora

Antonio Antón

El extremista discreto

A pedradas

El Lobo Feroz

Kakademia, V

El Rombo

Especial sobre la guerra

La gran ceguera

Rafael Poch de Feliu

Una demencia europea

Rafael Poch de Feliu

¿Tanques para la paz?

Tica Font

«La Unión Europea ha errado el cálculo tanto o más que Putin»

Jayro Sánchez López

De otras fuentes

No habrá transición ecológica sin transición social y laboral

Vicente López

Eco-decálogo

Michael Löwy

Las políticas de gas fósil en tiempos de guerra en Europa

Elena Gerebizza

Coeducación para transformar

Carmen Heredero

Se intensifica la lucha por la liberación del Sáhara Occidental

Pavan Kulkarni

Sumar, Unidas Podemos y una propuesta de tregua

Agustín Moreno

Nuevas armas nucleares americanas en territorio europeo: una violación del Tratado de No Proliferación

Tica Font

Abortar es mejor que hacer trabajos forzados de reproducción

Nuria Alabao

Los cuerpos rotos de los empleos feminizados II: trabajadoras del hogar y los cuidados

Ernest Cañada y Nuria Alabao

La Biblioteca de Babel

Lucha de clases, franquismo y democracia

Foro de webs

El colosal aumento del presupuesto militar del Estado de 2023

Campañas

Llamamiento para la manifestación del 25 de febrero de 2023

...Y la lírica

Nicanor Parra

Notas del mes

Juan-Ramón Capella

Castigo sin venganza

María Moliner define ‘castigar’ como *infligir un daño a alguien que ha cometido un delito o falta o que ha ofendido o causado algún daño a quien le castiga*; y define ‘vengar’ como *causar daño a una persona como respuesta a otro [daño] o a un agravio recibido de ella*.

Como se puede ver, castigar y vengar están conceptual y lingüísticamente relacionados, y los filósofos políticos han desarrollado interesantes disquisiciones teoréticas acerca de su identidad o su distinción. Sin embargo, a efectos de lo que se pretende discutir aquí, se hablará de “castigo” en el sentido de pena o sanción *pública*, institucional, y de “venganza” en el de daño inferido o deseado por parte de personas *particulares*, no públicas, como réplica a otro daño infligido.

El Estado, los estados, se han arrogado un derecho exclusivo a *castigar* y al mismo tiempo excluyen que los particulares tengan el mismo derecho en relación con una serie de descripciones de hecho (delitos) públicas. Con ello, al parecer, se intenta evitar un burbujeo social de daños infligidos como respuesta a otros daños infligidos entre personas particulares. Y El Estado define con toda la precisión de que es capaz en el derecho moderno los daños que afectan al bien público, que sufre el orden público además de sufrirlos los particulares afectados.

Los poderes no representativos, tanto los que lo eran en el pasado cuanto los que han dejado de serlo, inventaron una sangrienta y retorcida panoplia de daños y tormentos a quienes eran tenidos por delincuentes o sacrílegos, algunos de los cuales subsisten todavía hoy en medio mundo. Incluida la pena de muerte (a veces por medios atroces). La penalidad se atenuó —se racionalizó, como suele decirse— a partir de la obra de Beccaria, en el siglo XVIII, ya orientada hacia el sistema representativo.

En cualquier caso, hay un catálogo de delitos, un catálogo de castigos públicos o *penas*. Todavía hoy, cuando en los países de la UE se ha eliminado la pena capital, cabe preguntarse y preguntar, sin embargo, acerca de los límites de las sociedades, y por tanto de los Estados, para imponer castigos (no otra cosa son las llamadas penas) a quienes lesionan bienes colectivos al producir daños a bienes públicos o privados.

En España no existe la cadena perpetua, pero su prohibición ha sido soslayada con la invención de la cadena perpetua revisable. Esto es: se ha producido una tendencia al agravamiento del sistema penal. Cabe preguntarse por qué.

Y la respuesta es fácil: España ha sufrido un largo período de terrorismo de matiz nacionalista y, por si esto no fuera poco, también ha sufrido ataques terroristas de cariz fundamentalista islamista. Y, sobre todo a propósito de los atentados de ETA, se fue creando una definición de “víctimas del terrorismo” que se extendía desde las víctimas directas a una indeterminada serie de parientes, amigos y amigos políticos de las víctimas, organizados en asociaciones reconocidas y a veces promovidas por el Estado o por partidos políticos.

En este clima antiterrorista legítimo han nacido —no dudo en emplear la palabra— excesos. Aunque aquel terrorismo ha finalizado, determinados episodios se conmemoran anualmente,

como replicando y manteniendo el victimismo. Las víctimas indirectas se han constituido en grupo de presión, en *lobby*, que no sólo ha logrado éxitos que causarían el sonrojo de Beccaria, como la llamada doctrina Parot sobre el cumplimiento de penas por terrorismo, que no solo desfiguran el derecho penal común, ya muy regresivo, sino que significan un endurecimiento de las penas en nuestro país.

Las víctimas del terrorismo, en su inmensa mayoría víctimas indirectas, no están del todo solas en eso. En ocasiones han surgido peticiones de incremento represivo por casos de violencia de género y por parte de la ultraderecha. Sin embargo, resulta ejemplar que desde el interior del movimiento feminista haya renacido el concepto y la petición de una *justicia no punitivista*, que es todo lo contrario de la sed de venganza.

Hay que preguntarse si tras las peticiones de agravación de las penas impuestas a los delincuentes por parte del Estado —muy frecuentes entre particulares agraviados— hay un impulso no ya al castigo, sino a la *venganza*. Al Estado se le reconoce un derecho a *castigar*, en nombre de las necesidades colectivas de seguridad; pero no se le reconoce un derecho a la venganza —por mucho que a veces algunos estados hayan transgredido esta norma con el pretexto de la guerra, cometiendo impunes crímenes contra la humanidad, como ocurrió con el lanzamiento de las bombas atómicas sobre el Japón y los bombardeos de saturación británicos sobre decenas y decenas de ciudades alemanas—. La venganza es extraña al derecho penal, que ya impone, adicionalmente a los castigos principales, obligaciones de reparación o indemnizaciones a las víctimas.

Creo que el feminismo debe reflexionar sobre la categoría social central en que se integra, que no es otra que la estructura del patriarcado. Es preciso entender que los pasos adelante justos de las mujeres en el camino hacia la no discriminación por géneros y tendencias ha de ser recorrido también por los hombres, y que para ello es necesario luchar igualmente contra los mecanismos e instituciones sociales que crean en ellos (y en ellas) los papeles de género patriarcalistas. La Iglesia católica es una de esas instituciones con su ejemplo de preterición de las mujeres o con sus fórmulas matrimoniales tradicionales, que en estos pagos educan por ósmosis social a los no católicos y a los no creyentes. La escuela es otra de ellas (como decía Marx, el educador ha de ser educado a su vez), y los poderes públicos deben ser estimulados a cortar por lo sano las manifestaciones escolares de sexismo no solo del alumnado sino el profesoral. La industria juguetera también reproduce la desigualdad de género. E igualmente las familias, principales reproductoras de ideología. Un verdadero *movimiento antipatriarcalista* tiene que estar basado en alianzas inteligentes. El demonio de los celos, muy potente causa principal de las agresiones a mujeres, no puede ser combatido solo con el derecho penal, y menos aún con un derecho penal sensible a las pretensiones de venganza. El ideal de una justicia no punitivista ha surgido en los medios del movimiento feminista, y la sociedad en su conjunto reconocerá algún día que eso es uno de sus méritos.

Volvemos así a la cuestión de los castigos. La punición pública se ha incrementado en algunos casos y se ha modificado en el período constitucional. Merece la pena detenerse a reflexionar sobre el carácter de las penas de prisión. Pues son claramente desmesuradas. Una condena a diez años de cárcel, por ejemplo, impone la pérdida no solo de la libertad sino de las experiencias vitales individuales que pueden conducir al fortalecimiento del lado social de la personalidad. Ese tipo de penas, superiores a diez años, le cambian la vida a cualquier persona. Deberían estar

reservadas a delitos gravísimos reiterados contra las personas, con un tope inferior a los quince años, y me paso de largo. Los delitos cometidos en estados de obnubilación —concepto más débil que el de trastorno mental transitorio— deberían ser tratados psiquiátrica o psicológicamente y las penas reducidas y orientadas a la educación en las creencias sociales compartidas y en el dominio de las pasiones. Para los delitos económicos graves las penas deberían estar proporcionadas a las dimensiones del delito y a la ubicación social del delincuente, siendo más altas las penas impuestas a quienes gozan de elevadas posiciones en la pirámide social.

Por último, para los delitos menores se debería recurrir a castigos que no impliquen un encarcelamiento penitenciario, sino a medios como el arresto domiciliario, el confinamiento, el destierro y sobre todo a los servicios comunitarios, cuyo catálogo debería ser público y no indeterminado. Todavía no tenemos una administración de justicia en la que esto último deba quedar a criterio de los jueces.

Además, se debería acabar con dos lacras del sistema penal: las penas “que no se cumplen” y las penas acordadas con la acusación pública (de influencia norteamericana, esto es, del peor derecho penal de un sistema representativo). Se trata de volver a limpiar el sistema penitenciario, de librarlo de lo vindicativo y sobre todo, en la medida de lo posible, de humanizarlo.

Albert Recio Andreu

Empleos, salarios, reformas y sindicatos

Cuaderno pandémico: 17

I. El empleo tras la reforma laboral

La evolución del empleo en los últimos dos años es, sin duda, uno de los mejores balances que puede exponer el Gobierno. Y en particular el área de Trabajo, con su impulso a la reforma laboral. Una mejora tanto en términos cuantitativos (creación de absoluta de empleo) como cualitativos (reducción substancial del empleo temporal). Entre el cuarto trimestre de 2020 y el cuarto de 2022 se han creado 1,11 millones de empleos netos. El crecimiento de empleos estables ha superado los 2 millones y, en contrapartida, se han reducido 886.000 empleos temporales. La tasa de temporalidad se ha reducido en un 6,7% (del 24% al 17,9%). Por tanto, el impacto de la reforma laboral no ha destruido empleo y se ha mostrado eficaz en la reducción de la temporalidad. Los aterradores presagios de la derecha se han manifestado falsos, meras retóricas de la reacción, argumentarios para tratar de impedir la reforma. Aunque, dado la complejidad de los análisis económicos, siempre pueden sugerir que sin la reforma las cosas hubieran ido mejor. Si uno se empeña en negar los hechos, siempre hay economistas dispuestos a modelar los argumentos para que casen con lo que su cliente quiere.

Este va a ser el punto más fuerte sobre el que se va a apoyar Yolanda Díaz para promover su candidatura electoral. Es un dato que tiene un enorme valor para su propia base social, para los sindicatos. No quiero ser aguafiestas, yo también celebro la mejora del empleo y sus condiciones. Pero, analizando los datos disponibles con más detalle, hay algunos puntos negros que merece la pena subrayar.

La primera cuestión es la de la propia calidad de los empleos fijos. En la reforma se establece que estos pueden tomar la forma de empleos “normales” y la de fijos discontinuos. Personas cuyo empleo efectivo sólo se produce cuando aumentan las necesidades de la empresa y quedan a la espera cuando baja la actividad. No equivalen a empleos temporales, aunque se les parezca. Un contrato de fijo discontinuo, por ejemplo en hostelería, donde la actividad es estacional, supone que la persona implicada tendrá derecho a volver a la empresa cuando vuelva la actividad, que su empleo sea estable cada temporada y no esté al albur de la voluntad del empresario de contratarla o no, que puede acumular derechos de antigüedad en el caso de que existan, que tiene posibilidades de promoción. Contratada como temporal, todos estos derechos desaparecen y cada temporada se está pendiente de la voluntad de la empresa a la hora de recuperar el empleo. La diferencia de grado es importante.

Pero hay también importantes diferencias entre las condiciones de los empleados fijos y las de los fijos discontinuos. Los primeros gozan de una estabilidad de ingresos que no tienen los discontinuos. Los ingresos de estos últimos dependen crucialmente de la duración de su contratación efectiva. No es lo mismo ser un empleado discontinuo de diez meses (que es el tipo de duración que se observa por ejemplo en las empresas de catering escolar) que serlo por tres meses (lo que puede ocurrir en un restaurante de temporada). La cuestión no es baladí. Según los datos de rentas a partir de la información fiscal, casi un 25% de personas asalariadas (sin

tener en cuenta las que se han jubilado) no alcanza a ganar el monto del salario mínimo anual. Ello es así porque una parte de la población está atrapada en empleos de temporada (que habitualmente coinciden con empleos de bajos salarios). No es casualidad que en los estudios de rentas locales sean las poblaciones turísticas, donde proliferan estos empleos, las que presenten índices más elevados de pobreza. En resumen, los empleos fijos discontinuos mejoran los derechos y las condiciones de empleo de los trabajadores temporales, pero no eliminan parte de la precariedad. No son equivalentes a los empleos temporales, como ahora argumenta la derecha, pero tampoco equivalen a empleos estables normales. Y el problema es que, tal como el INE ofrece actualmente los datos, no es posible ver cuál es su peso. Mejorar la información constituye una exigencia fundamental para hacer una diagnosis buena.

La segunda cuestión que debería preocupar es analizar qué hay detrás de la creación de empleo, cuáles han sido las dinámicas que han generado la actual recuperación. No todos los empleos son iguales en salarios, condiciones, etc. Ni la sociedad y la economía evolucionan igual según sean las actividades que crecen. Y, cuando analizamos la estructura sectorial del empleo, aparece otra cuestión preocupante.

Casi la mitad del empleo nuevo se concentra en el sector de hostelería y restauración, en parte como un efecto-rebote del parón experimentado en la pandemia. Un sector donde proliferan los empleos de duración limitada, los bajos salarios y las malas condiciones de empleo (especialmente en jornada). Le siguen en importancia el transporte, la información y comunicaciones y el sector de actividades artísticas y recreativas (muy asociado a la evolución del turismo). En términos relativos, son estos cuatro sectores y las inmobiliarias los que han experimentado crecimientos del empleo por encima de la media. El crecimiento del sector "otros servicios" es idéntico al crecimiento medio del empleo (6,1%). El resto de los sectores muestra crecimientos más modestos, entre el 4,8% de la Administración Pública y el 1% de la construcción (y en medio se sitúan, por este orden, educación, sanidad y servicios sociales, industria manufacturera, servicios auxiliares, comercio, actividades profesionales, científicas y técnicas) y se destruyen empleos en agricultura, ganadería, silvicultura y pesca, industrias extractivas, energía, agua y saneamiento, actividades financieras y empleo en hogares.

Lo que sugiere este cuadro es que estamos lejos de experimentar un cambio estructural profundo: el auge del empleo está asociado fundamentalmente a la recuperación del turismo, el sector que ya era el gran motor de la expansión prepandemia. Incluso se ralentiza el crecimiento del empleo en actividades como educación, sanidad y servicios sociales, que antes de la pandemia experimentaban una fuerte expansión y que durante la pandemia mostraron su importancia estratégica.

La persistencia del motor turístico es preocupante en muchos aspectos: su elevada vulnerabilidad, sus impactos ambientales y sociales, su asociación con el capitalismo más rentista, sus condiciones laborales... La recuperación del turismo era esperable por las propias características de la crisis de la COVID, pero no tanto la insistencia con que las clases dirigentes presionan ahora por su continuidad y sobre todo su aceptación acrítica por parte de las élites políticas (en mi ciudad, el PSC es el "partido del turismo", y viendo lo que hacen alcaldes como el de Vigo tiendo a pensar que no se trata sólo de una cuestión local). Sin cambio de modelo, sin diversificación de actividades y una orientación clara de reconversión en clave ecológica, no es posible pensar que el país vaya a ser capaz de hacer frente a la variedad de tensiones que

pueden desencadenarse los próximos años. Los éxitos de hoy, sobre todo si se leen sin capacidad autocrítica, pueden sentar las bases de los desastres del mañana.

En resumen, hay dos cuestiones a destacar:

En primer lugar, la reforma laboral sí ha tenido éxito en aquello que podía influir: en reducir la discrecionalidad empresarial en la contratación y en fomentar condiciones más dignas de empleo. Pero no puede esperarse que, por sí misma, sea capaz de transformar todas las condiciones que influyen en el modelo laboral. Hay sin duda otros campos en los que el cambio de las regulaciones laborales puede añadir mejoras. Especialmente aquellos que la reforma esquivó en aras del pacto con las patronales: ampliar la vigencia de los convenios sectoriales, eliminar la posibilidad de crear representaciones laborales *ad hoc* y reforzar la necesidad de negociación de cambios en las condiciones laborales. Así como avances en términos de democracia económica. Pero hay otros aspectos que deben abordarse por otras vías. La enorme variabilidad y flexibilidad del empleo (que mantiene altos niveles de temporalidad en forma de eventuales y fijos discontinuos) es el producto de modelos de gestión de la economía y de especialización productiva que exigen cambiar otras muchas cosas: regulaciones del mercado de productos y servicios, de los derechos de propiedad y de las políticas económicas. Porque muchos de los graves problemas de desigualdades y devastación ambiental a los que nos enfrentamos tienen que ver con esto. Y la izquierda no puede encastillarse en defender el éxito de sus propuestas y olvidar sus límites y la necesidad de discutir otras áreas.

Y, en segundo lugar, el modelo económico español está lejos de una transformación radical. Los programas *next generation* más bien parecen diseñados para mantener las rentas de los sectores que han liderado el actual modelo de desarrollo que en propiciar una transformación real capaz de reducir drásticamente las desigualdades y de hacer frente a los problemas que plantean las tensiones en el campo del clima, la energía, el cambio demográfico, los problemas hídricos, la crisis de biodiversidad y la vulnerabilidad exterior. Son muchos problemas y ninguno tiene soluciones inmediatas. Para muestra, la nueva batalla en torno al agua en el sudeste español. Hay que tener una visión global, una modestia en la capacidad de cambio a corto plazo y tenacidad para ir aplicando medidas que cambien la situación. Porque lo que realmente se necesita es una movilización social capaz de entender y hacer frente a la situación. Y lo que sobra es presentar los éxitos, por meritorios que sean, e ignorar las carencias.

II. Precios, salarios y respuestas sindicales

La inflación de los últimos meses vuelve a poner la cuestión salarial y la distribución de la renta en primera línea del debate social. Aunque la información estadística sobre salarios siempre es bastante deficiente, con los datos existentes existen pocas dudas de que en los últimos meses el alza de los precios ha sido claramente superior a la de los salarios. Algo que también se constata cuando se analiza el peso de los salarios en el PIB (que han descendido en menos de 2 años del 49,9% al 46,6%) y los indicadores del índice Gini que ofrece el detallado trabajo de Oxfam en el que me baso (se puede consultar en <https://www.oxfamintermon.org/es/publicacion/davos-2023-sobra-mes-final-sueldo>) y que muestra un nuevo repunte de la desigualdad. El análisis de Oxfam muestra como la inflación actual está provocada por el aumento de los márgenes empresariales. Básicamente por un conflicto distributivo originado por el capital (aunque en sus inicios tuviera influencia el aumento de los precios energéticos y los cuellos de botella generados en la

economía global). La ventaja, para las empresas, de un proceso inflacionario generalizado es que pueden justificar sus ajustes particulares de precios por el “alza de los costes” sin necesidad de probarlo. A menos que tuviéramos estudios detallados de la fijación de precios en sectores clave, no hay manera de especificar la responsabilidad de cada cual. Y por ello creo que crear algún tipo de organismo, comisión, centro de estudios orientado a esta actividad sería de extrema utilidad. El estudio de Oxfam también indica que el impacto negativo de las alzas de precios ha sido mayor para las rentas bajas en la medida que los mayores aumentos se detectan en alimentación, vivienda y gastos de casa y bebidas. Solo las alzas de hostelería y restauración afectan más a las rentas altas. Hay buenas experiencias que han moderado las alzas de la energía (con la aplicación de un tope al gas eléctrico) y los transportes (con la bonificación de parte de su coste, especialmente para los usuarios que más utilizan el transporte público). Pero en conjunto la inflación sigue siendo una variante de la lucha de clases distributiva en la que los sectores empresariales y los rentistas siguen ganando la batalla.

Frente a esta situación se echa en falta alguna propuesta de movilización y claridad en los objetivos. Los sindicatos tienen en ello un papel fundamental. Y hasta ahora no se percibe esta contundencia ni esta claridad. Antes del verano, los líderes sindicales anunciaban un otoño caliente que no hemos podido percibir. Quizás porque lo que la ocasión demandaba era una propuesta de acción general que nunca se planteó, posiblemente por el miedo a que se viera como un ataque al Gobierno de coalición y un apoyo a las aspiraciones electorales de la derecha. Se anunció una lucha de guerrillas en los convenios colectivos, que tampoco ha tenido lugar, posiblemente porque el miedo de la gente, sus necesidades monetarias, no ayuda a promover un *espíritu de combate*. Todo ello es preocupante, sobre todo porque difumina la imagen, ya deteriorada, de los sindicatos como escudos frente al capital. Y esta preocupación se viene incrementando con la propuesta de CC.OO. (que es mi sindicato) de vincular las alzas salariales a “los excesos de márgenes de beneficio” (Unai Sordo, [“Propuesta para alcanzar un acuerdo salarial”](#), *El País*, 18 de enero de 2023).

Explico por qué esto me parece preocupante, aunque en otras cuestiones coincida con su análisis y aunque se pueda sospechar que esta propuesta tenga un cierto componente de *boutade* (puesto que los empresarios dicen que no pueden subir salarios, analicemos la situación de cada uno y forcemos a pagar a los que han aumentado beneficios). Como provocación puede valer, pero como propuesta salarial es peligrosa. En primer lugar, porque sabemos que las mayores devaluaciones del poder adquisitivo se producen en los sectores de ingresos más bajos, los que están empleados en los sectores más irregulares y con salarios más bajos. Posiblemente, en las empresas que lucen márgenes más pequeños. En segundo lugar, porque las estructuras empresariales son enormemente complejas y jerarquizadas: las empresas grandes utilizan su red de subcontratas para abaratar costes y, por tanto, la productividad “aparente” (el valor monetario de cada empresa dividida por su volumen de plantilla) depende en gran medida del lugar que ocupa en la jerarquía empresarial. Y, en tercer lugar, porque los precios incluyen el “poder de mercado” de cada empresa dentro de un mundo dominado por mecanismos oligopólicos y por competencia imperfecta). Fijar los salarios en función de cada empresa es reforzar las desigualdades salariales y empeorar la situación, absoluta y relativa, de los que ya están peor. Es romper cualquier propuesta de solidaridad de clase y, en el peor de los casos, reforzar el vínculo que a veces une a los trabajadores de empresas monopolísticas con su propia empresa.

Un planteamiento alternativo debe orientarse tanto a reducir las desigualdades como a generar

una nueva visión social sobre la distribución de la renta.

A corto plazo es preciso minimizar el impacto negativo de la inflación sobre las rentas más bajas, para las que la inflación provoca un deterioro insoportable en sus condiciones de vida. Pero para ello hace falta un planteamiento general que contemple aumentos de renta en los sectores más deteriorados (aumento del salario mínimo y mecanismos de transferencia de rentas), que proponga una escala salarial que tanto garantice mínimos salariales decentes como castigue los obscenos salarios que se conceden los altos directivos, orientado a promover un modelo social y laboral más igualitario y cooperativo, y que incluya mecanismos de limitación de las rentas abusivas y parasitarias. Es un objetivo ambicioso y difícil de desarrollar, pero absolutamente básico si se quiere salir del marasmo social a que nos ha conducido décadas de políticas neoliberales. Y también necesario para ayudar a que la población pueda identificar la naturaleza de sus problemas económicos y para impulsar una dinámica social transformadora. Ello exige transformar inercias y modular resistencias. Los sindicatos son, en sí mismos, organizaciones complejas, con afiliados y organizaciones de base (especialmente en las grandes empresas) con intereses particulares, con gabinetes técnicos demasiadas veces imbuidos por las mismas ideologías que pretenden combatir y por luchas internas por el poder. Y por ello, más que la crítica descalificativa, lo que es más necesario es promover un debate que nos saque de este nuevo atolladero.

III. Un matiz

Esta nota contiene dos críticas directas a gente con la que comparto muchas cosas: al excesivo triunfalismo respecto a la reforma laboral por conducir al olvido de cuestiones clave; y al despiste y falta de claridad sindical al abordar la lucha contra la inflación. Criticar sólo tiene sentido si se hace con ánimo de mejorar, de encontrar salidas y compartirlas. Y por ello sugiero, más allá de las críticas concretas, que lo que hace falta son estructuras organizativas menos cerradas en sí mismas y más debate e investigación para hallar salidas. Porque lo que sigue importando es la continuidad de problemas estructurales en el empleo, la estructura económica (incluyendo las cuestiones ecológicas) y la distribución de la renta.

Antonio Izquierdo Escribano

Trabajadores y literas

Una de las regularidades estadísticas mejor aquilatadas en el estudio de las migraciones internacionales establece que los progresos en la integración son lentos, mientras que el retroceso se da con rapidez. Se construye con paciencia, pero se destruye de un solo golpe. En las crisis económicas se desandan velozmente los avances en las condiciones de vida que se alcanzan en los cada vez más breves períodos de bonanza. Por eso, en “cada salida de la crisis” la población foránea está un punto más atrás de lo que lo estaba antes. Los deterioros se miden en leguas, las mejoras en metros.

De modo que abrí los ojos como platos cuando el domingo 8 de enero leí en el diario *El País*, en primera página y a cuatro columnas, el siguiente reclamo: “Se buscan trabajadores extranjeros”. Ese mismo día, pero en una página interior, me tropecé con otro titular que clamaba, “hartos de que su mundo sea una litera”. Esta segunda noticia aludía a la situación de dos familias afganas que había solicitado refugio en España. Dos conceptos (inmigración y asilo) unidos por el principio de la integración. Mejor aún, dos realidades (trabajo y vidas en riesgo) que demandan su inclusión en la sociedad de acogida.

La noticia que ocupaba la primera plana estaba respaldada por tres páginas completas en la sección de economía y trabajo. En ellas se ofrecían gráficos que daban cuenta de las tasas vacantes y de desempleo en la UE y en España. El texto enmarcaba dos potentes fotografías, una de trabajadores en un invernadero de fresas en Alemania, y otra, de obreros sobre andamios en un edificio de la calle Bravo Murillo en Madrid. Por otra parte, la noticia que versaba sobre la situación de los refugiados afganos ocupaba la página 28 y se ilustraba con dos expresivos retratos, uno por familia, que capturaban la atmósfera que envuelve a estos huidos. ¿Quieren que les describa esa atmósfera? Lo haré, “han pedido, formalmente, regresar a su país”. Sin más literatura.

Desgranando los contenidos

Los dos reportajes ensamblan la tensión que siempre se produce entre datos de naturaleza estructural, es decir, aquellos que condicionan las opciones personales, y otros en los que lo que predomina es la “agencia”, a saber, las reacciones y conductas de los grupos e individuos implicados en esa trama de instituciones. En otras palabras, el pulso que siempre se libra entre los factores objetivos y las respuestas de los individuos.

Los factores de fondo que se subrayan se compendian en dos: el envejecimiento como causa principal de la falta de mano de obra, y las transformaciones que se suceden en la esfera laboral. Algunos de esos cambios en el mercado de trabajo han resultado acelerados por la pandemia. Así sucede con el impulso que ha recibido la digitalización laboral y, en el otro extremo, el abandono de los empleos en los servicios personales más penosos de realizar y peor pagados.

Los datos de estructura detallan que varios países europeos tienen tasas significativas de empleos sin cubrir (5% Bélgica y Países Bajos, un 4,5% Alemania y el 2,5% Francia) y que sus gobiernos han emprendido distintas acciones para cubrir esos huecos. El marco general en la

UE, según Eurostat, es el de una tasa de paro baja (6%) y un 3% de ofertas de empleo sin cubrir. Esas vacantes se evidencian en una treintena de profesiones que van desde medicina y enfermería hasta soldadores y transportistas, desde ingenieros y analistas de sistemas hasta fontaneros y repartidores o trabajadores para cuidar de los mayores y para las actividades en la hostelería y restauración.

Las políticas que condicionan y limitan a los refugiados se resumen en ser cada vez más restrictivas (reducción de ayudas y de derechos); y más represivas, es decir, con más detenciones y deportaciones. Un sistema de acogida que discrimina según el país de nacimiento y los valores culturales del demandante y que somete al solicitante a una cadena de limitaciones y vejaciones para hacerse acreedor al título de ser un auténtico refugiado. Un sistema, en fin, que rebasa los períodos y fases que se estipulan en la normativa. Sirva como ejemplo el caso español en el que la fase de emergencia debe durar un mes y se prolonga más allá del medio año, saltando de hostales a albergues que ejercen como centros de acogida. Sin permiso de trabajo y sin dinero, la vida se gasta, como se describe en el reportaje, viviendo en una habitación con tres literas y un pasillo entre ellas.

Un apunte sobre el abuso de las proyecciones demográficas

La mejor manera de encarar el futuro es conocer el presente con el mayor detalle y profundidad. Las proyecciones demográficas a 50 años vista no pasan de ser un ejercicio técnico cargado de ideología. Castillos de naipes, fáciles de construir, pero frágiles de toda evidencia. Nadie en su sano juicio se atreve a asegurar cuál va a ser la hipótesis más probable en el curso de la mortalidad, la fecundidad o las migraciones a lo largo del próximo medio siglo. ¿Acaso las repercusiones en las tasas de reproducción y en las probabilidades de muerte, y por tanto en el cálculo de la esperanza de vida, que se están derivando de la pandemia del COVID-19 —o de la guerra en Europa y la violencia en Oriente Medio—, entraron en los cálculos de las proyecciones que se hicieron con el cambio de siglo? ¿Quién anticipó que tres millones de refugiados llegarían a la UE entre 2015 y 2016?

Nadie había previsto, en 2019, el exceso de mortalidad directa o indirectamente causado por el coronavirus, el nivel de la caída en la fecundidad o el grado de hundimiento de los flujos migratorios provocado por el cierre fronterizo y el confinamiento. Incluso en lo que se refiere a la rebaja de los flujos migratorios hubo grandes diferencias, pues aquellos compuestos por trabajadores cayeron con más intensidad que los flujos de familiares o de estudiantes. Y dentro de los flujos de mano de obra, disminuyeron menos los de trabajadores fronterizos, los de temporeros que recogían las cosechas o los integrados por profesionales de la salud que los de otras profesiones o los traslados de personal cualificado dentro de las grandes empresas. Queda claro que la migración es la menos previsible de las tres variables demográficas.

Argumentar que harán falta trabajadores en Europa porque la población que se halla en edad de trabajar es ahora del 70% y en 2070 ese porcentaje será del 54%, encierra demasiadas incógnitas. Y deducir de esas cifras relativas que las empresas necesitarán millones de trabajadores extranjeros es aún más incierto. Simplemente, no sabemos cuál será la tasa de dependencia ni la de actividad en fecha tan lejana. El cómputo actual se hace sobre una edad de jubilación que se está retrasando, un aumento en la esperanza de vida que se ha desacelerado con la pandemia, y un volumen de personas jubiladas que se está viendo mermado. Los

argumentos, en fin, carecen de profundidad, porque nada se aventura sobre cuántas y qué empresas, hoy existentes, van a sobrevivir el próximo medio siglo, ni cuántas nacerán o se mudarán de país. *Debemos distinguir entre los datos del presente y las proyecciones, así como entre la calidad de los argumentos y su profundidad.*

Todo gobierno democrático está obligado a realizar dos cuentas. Una es la de las urgencias presentes de trabajadores para cubrir vacantes en el mercado de trabajo; y otra la de los medios objetivos y subjetivos disponibles para su acogida como el paso inicial para la integración. Más aún cuando se abusa de las proyecciones hasta convertirlas en oráculos de “necesidades” de trabajadores. Porque si hablamos de proyecciones demográficas a cincuenta años vista, la regularidad estadística mejor registrada es la de que no se acierta. Esa fue la conclusión de Nathan Keyfitz, un demógrafo canadiense, después de comparar un millar de proyecciones con las realidades que se propusieron anticipar.

Dos caras de la mudanza global: inmigrantes y refugiados

En realidad, se trata de dos caras del mismo fenómeno social, aunque los medios que forman la opinión pública las separen. Estamos hablando de los desplazamientos más o menos forzosos de las personas de un país a otro. En la migración por trabajo, la agencia (el hacer voluntario de los protagonistas) tiene un papel más relevante, mientras que en caso de huida precipitada lo más evidente para el actor es que no le queda otro remedio. En el movimiento laboral el calendario de la salida se puede planear, si bien el momento económico que atraviesa el país receptor condiciona el plazo para decidirse a emigrar. En cambio, en el caso de la fuga desesperada no hay margen de tiempo, ni se presenta una opción alternativa para los sujetos. Las personas que piden refugio son los migrantes más urgidos, pero migrantes, al fin y al cabo.

Otra de las tendencias, vale decir regularidades estadísticas, mejor establecidas en el ámbito de las migraciones internacionales es la de que tras el “adelantado” llega la familia. Es decir, que la pionera o el forastero viene acompañado de sus seres queridos, o tarda pocos años en reunir al grupo primario. Por tanto, trátense de refugiados, o de trabajadores más o menos cualificados, las distintas vías de entrada conducen a una misma sociedad. Dicho con toda claridad, el flujo de trabajo y el que pide protección para la vida se rigen por un mismo principio que es la integración en esa sociedad. Podemos imaginar vigas donde sólo hay virutas, pero las reyertas nominalistas (integración, acomodación, inserción, inclusión) no sirven para reducir las leguas a metros.

Conviene, pues, decirles a los gobiernos que, si no disponen de viviendas, plazas escolares y servicios de atención sanitaria, no busquen o atraigan trabajadores extranjeros. Porque, más bien antes que después, la forastera o el foráneo harán uso de ello. Lo mismo sucede con los perseguidos que, una vez llegados, necesitan cuanto antes trabajar, salir de los centros de acogida y empezar a vivir por su cuenta. Ni unos ni otros quieren ser una carga para el erario público, quieren poder decidir. Claro está que tanto unos como los otros requieren cierta ayuda inicial para aprender el idioma y poder comunicarse, pero esa fase es temporal, y breve, atendiendo a las circunstancias y habilidades de cada cual.

Toda política migratoria que no esté presidida por la integración social está coja y peca de ceguera institucional. No hay separación, salvo analítica, entre *política de inmigración* (regulación de flujos) y *política para inmigrados* (inserción social). Cabe añadir que esa idea rectora reza también para las demandas de trabajo. Pues con un empleo no se mantiene una familia

inmigrante con hijos. El trabajo, por sí sólo, no evita la exclusión que tiene, como es sabido, variadas dimensiones. Los que están ocupados en uno de los varios nichos laborales donde se concentran, viven con un mayor o menor grado de privaciones residenciales, sanitarias o educativas, pero no les es dado alcanzar un nivel aceptable de integración y arraigo en la sociedad.

La discriminación, en el caso de los refugiados, arranca de su origen ambiguo. El sistema internacional se pensó para aquellos que “votaban con los pies” y que huían de los países socialistas y del comunismo, pero también para los que luchaban contra las dictaduras en otras partes del mundo. Ha acabado siendo un “escudo temporal” para proteger a los que defienden los valores occidentales frente a otras culturas. No hay más que ver las preferencias y cupos ofrecidos a los huidos de Ucrania, respecto de los perseguidos en Afganistán. La mayoría de los refugiados del Sur que piden protección acaban por dispersarse en las ciudades como refugiados urbanos e informales que se suman a los inmigrantes sin derechos, sin permiso laboral y dependientes del empleo sumergido. Esa desintegración personal incrementa la vulnerabilidad material y mental, pudiendo conducir al suicidio.

Para terminar...

La separación de estas dos noticias merece un análisis y una crítica. La búsqueda de trabajadores da la espalda a la gestión del acomodo de los refugiados. Es así como, a tenor de estas informaciones, gobiernos de distintos países acuden solícitos a la demanda de empresas, mientras que la Comisión Europea da su visto bueno sin desarrollar directivas o reglamentos para “no chocar con las sensibilidades nacionales y los períodos electorales”. No es este el modo más aconsejable de enfrentarse al auge del racismo en la mayoría de las sociedades de la UE.

Sin duda, la exclusión más severa que se les impone a los inmigrantes y refugiados es la privación de los plenos derechos democráticos. Un ejemplo lo constituye la democracia española que, desde su origen en 1977, es una democracia muy institucional y socialmente poco inclusiva. No se ha visto, por ejemplo, una foto en las escaleras de la Moncloa de ningún presidente del gobierno recibiendo a los representantes de los inmigrantes. La *exclusión política* es mayor que la que se experimenta en la vivienda o en el empleo. En España esa marginación política atañe a 5,5 millones de extranjeros, es decir, el 12% de los habitantes.

La integración empieza con la primera acogida y, cuando no se hace así, el proceso descarrila y —en cualquier caso— se resiente. Las políticas de mano de obra y las de refugiados son dos caras de la migración. Empiezan, continúan y terminan en la integración como ciudadanos. Todos necesitan trabajo y vivienda, y por ello a los solicitantes de asilo se les debe dar un permiso de trabajo mientras se resuelve su expediente de reconocimiento como refugiado. Todos necesitan formación para los mayores y para los descendientes. Todos pueden enfermar y requieren acceso formal a la sanidad pública. En fin, todos demandan consumir pero, por encima de todo, lo que más necesitan es poder decidir.

Claro que no es esto lo que se viene haciendo en la mayoría de las sociedades de la UE. Y, precisamente por eso, las integraciones son multiculturales. La última de las regularidades estadísticas, que nos dejan como enseñanza tanto la crisis de 2008 como la de 2020, es que las comunidades inmigrantes han salido de estas catástrofes globales más excluidas de la sociedad de acogida, pero más replegadas sobre sí mismas.

José Luis Gordillo

Ucrania: alto el fuego y negociaciones de paz

El próximo 24 de febrero se cumplirá un año de la injustificable invasión rusa de Ucrania, acontecimiento cuyas consecuencias letales hay que sumar a la muerte y la destrucción provocados por los ocho años anteriores de la guerra civil que comenzó en 2014. En ella, desde el principio, intervinieron los mismos actores internacionales (Rusia, Estados Unidos, Gran Bretaña, Polonia y otros estados de la UE) que ahora están profundizando su implicación en la misma.

En esa guerra vicaria o por delegación entre potencias nucleares, la población de Ucrania y los soldados rusos son, en el sentido más estricto de la expresión, la carne de cañón de los juegos geoestratégicos de EE. UU./OTAN y Rusia. A medida que la guerra se alarga, se incrementa el riesgo de extensión de la misma, en especial cuando varios estados europeos, como el Estado español, van incrementando su participación en el conflicto enviando cada vez más armas a Kiev. Entre unos y otros, nos están llevando hacia una guerra que, como reconoció el pasado noviembre el general estadounidense Mark Milley, presidente de la Junta de Jefes del Estado Mayor del Ejército estadounidense, ninguno de los bandos enfrentados puede ganar. El general Milley, por ello, recomendaba que se fuera pensando en iniciar unas negociaciones de paz. Conviene atender a la opinión de este «experto», pues Milley es uno de los que codirigen la guerra desde el lado de Kiev. Sería una buena cosa que en el gobierno de España (por ejemplo, por parte de Yolanda Díaz, vicepresidenta del mismo) se tomase buena nota de dicha opinión y se actuase en consecuencia.

El próximo sábado 25 de febrero diversas organizaciones convocarán manifestaciones y concentraciones para pedir, sobre todo, un alto el fuego y el inicio de conversaciones de paz en Ucrania. En Londres se ha convocado una manifestación para ese día y con ese objetivo, y es bastante probable que también haya manifestaciones similares en Bruselas y París, cuando menos. En España, diversos colectivos pacifistas, antimilitaristas, ecologistas y de la CGT han convocado actos en Madrid, Valencia, Sevilla, Cádiz, Córdoba, Pamplona, Bilbao, Valladolid, Ferrol, La Coruña, Burgos, Alicante y Salamanca (que nosotros sepamos). En Cataluña también se llevarán a cabo diversos actos. En Barcelona está convocada una manifestación para el mismo día cuyos detalles se especifican en un llamamiento que también se publica en este boletín.

Ya se verá el éxito que tienen, pero la petición de un alto el fuego y conversaciones de paz para detener la devastación de Ucrania está destinada a tener cada vez más apoyo social, en especial si los gobernantes rusos, estadounidenses y europeos siguen echando gasolina al fuego y la guerra se va alargando sin que se vea cuál puede ser su final. En este momento, según algunas encuestas, en torno a un 50% de la población de España apoya el final negociado de la guerra, al igual que un 64% de austriacos, un 60% de alemanes, 54% de griegos y un 50% de italianos. A los dirigentes de Unidas Podemos y de otras fuerzas de izquierdas, por cierto, hay que recordarles que 2023 va a ser un año en el que se van a celebrar varias elecciones, incluidas unas elecciones generales, y que no pueden permanecer callados ante el acontecimiento político y militar más importante y peligroso que está ocurriendo en Europa.

Albert Recio Andreu

Guerra de emociones

I

Que las emociones tienen un importante papel político es una obviedad. Maquiavelo lo describió con suma precisión. Las guerras constituyen quizás el momento donde la presión emocional es mayor. Lo explican de forma clara Stefan Zweig o Erich Maria Remarque para el caso de la movilización alemana al inicio de la Primera Guerra Mundial. Se trata de llevar a la gente al matadero combinando sentimientos de haber sido agredidos, de superioridad moral y material (pensar que vas a ganar) y de solidaridad grupal. Una combinación que aparece en casi todos los conflictos de alta intensidad. Se genera una situación donde desaparece la posibilidad de debate racional, donde se criminaliza la disidencia y donde la propaganda lo llena todo. El coste de todo ello acaba siendo brutal.

Volvemos a estar en tiempos de guerra. Aunque sea una guerra subcontratada y que, aparentemente, sólo nos afecta en términos monetarios. Pero es una guerra tan sucia e inmoral como lo fueron las otras grandes guerras que asolaron Europa. Un conflicto en el que ambos bandos han puesto en marcha su arma de fabricar emociones para bloquear voces disidentes. En nuestro lado de la Guerra, esta política viene facilitada por el hecho que fue Rusia la que inició las hostilidades, y Putin emite un discurso que a ojos de la ciudadanía occidental suena entre paranoica y agresiva. Ciertamente, cualquier persona bien informada puede explicar que este es un conflicto de larga gestación, donde Estados Unidos y sus aliados humillaron a Rusia y desarrollaron una persistente provocación, y donde el gobierno de Ucrania tiene una enorme responsabilidad en los conflictos internos del propio país y en boicotear las propuestas que podían haber estabilizado la situación. Pero todo ello queda eclipsado por la invasión rusa. Lo de invadir un territorio tiene una justificada mala imagen. Tampoco ayuda que entre los que se oponen a la guerra se sitúe gente nostálgica de la URSS, que siguen viendo a Rusia como el paladín de la igualdad. Y que no hayan comprendido que la experiencia soviética fue en gran parte un fracaso (sobre todo, por su autoritarismo extremo), y que la Rusia actual es un régimen oligárquico corrupto y extractivo.

Apelar al fin de la guerra por el sufrimiento y la destrucción que genera tampoco resulta demasiado efectivo. En parte, esto es así porque se trata de un conflicto lejano, que no nos implica directamente. La contestación de Vietnam creció en Estados Unidos a medida que llegaban ataúdes y jóvenes lisiados. Aquí la respuesta social a la guerra del Golfo tuvo su componente emocional cuando se planteó el envío de tropas de reemplazo, o cuando fue patente que la guerra de Irak era un montaje de los “tres tenores mentirosos”. Pero la profesionalización de los ejércitos ha servido, entre otras cosas, para que la población se sienta menos afectada por conflictos que además ocurren en territorios lejanos. Es lo que tienen las subcontratas, permiten diluir el trazado de las decisiones, externalizan los costes. Además, todo este sufrimiento se contrapone con el falso dilema de que una salida negociada significa reforzar a Putin, dar razón al agresor. O sea, convencer a la gente de que la única opción sería es la de aniquilar al enemigo, presentado como el mal total.

Y, en este clima, la guerra tiene su propia dinámica, que parece cada vez más peligrosa. Básicamente porque parece que ha saltado una de las fronteras de seguridad de la Guerra Fría: el temor a un conflicto nuclear. Y no se tiene en cuenta que esta es sólo una guerra lejana para uno de los bandos. La decisión de enviar tanques a Ucrania constituye sin duda una escalada. Aunque —como apuntaba José Enrique de Ayala en *elDiario.es*— es posible que se trate más de una acción propagandística que efectiva, no deja de ser un paso más en la participación directa y una nueva provocación. Pueden venir más, como el envío de aviones o el cierre del espacio aéreo. Si, como dice la prensa occidental, Putin es tan irresponsable y paranoico, no podemos esperar otro escenario que la guerra nuclear. Hace tiempo que nos han embarcado en un juego de la gallina en el que estamos invitados a formar parte del coro que jalea a uno de los contendientes.

II

Estas dinámicas emocionales, y este predominio de la propaganda orientada a generar una respuesta lineal a los conflictos, ha existido siempre. Aunque, también es cierto, en las últimas décadas las técnicas de manipulación social se han sofisticado en conocimientos y medios. La guerra ruso-ucraniana es particularmente grave por las consecuencias globales que puede generar, pero los mecanismos y los procesos son visibles en cualquier otro conflicto de muy alta intensidad —como el palestino-israelí— o de intensidad media. Aquí lo vivimos con el *procés*, donde cada bando tuvo la capacidad de generar su propia campaña de persuasión a su clientela y donde, a pesar de que la situación se ha serenado, ha quedado un poso de agresividad, incapacidad de diálogo, desprecio, y criminalización del bando ajeno que puede volver a activarse en otro momento. Y hay políticos sin escrúpulos que lo explotan constantemente.

En estas situaciones, las posiciones pacifistas tienen un espacio muy limitado. Son fácilmente tildadas de quinta columna del bando enemigo, o de ilusos, o de inmorales (pues proponen soluciones que refuerzan al agresor). Pero no queda otra opción que propugnar salidas a los conflictos que reduzcan los peligros de escalada y representen las soluciones menos dolorosas. Salidas que siempre se resuelven en apañes temporales, sobre las que seguir trabajando. Existe, en esta tarea necesaria e ingrata, una cuestión esencial: tratar de eludir el peso de los falsos aliados. En concreto, propugnar una salida negociada en Ucrania implica también cuestionar tanto el régimen ruso como desvelar el imperialismo occidental. Y, en este sentido, es esencial que en las organizaciones de izquierda la manipulación emocional sea combatida con unas prácticas que priman lo racional. Demasiadas veces he sentido que una parte de los argumentos de mi bando tendían tanto al *forofismo* como los de mis contrincantes. Racionalizar la sociedad es una larga tarea, y ello incluye tanto acciones generales como trabajo organizativo adecuado.

Lo emocional es el terreno preferido de la manipulación. Estamos en medio de un conflicto grave donde es difícil encontrar salidas. Podemos perder mucho. Pero lo que no podemos hacer es dejar arrastrarnos. Saber que hay pocos espacios y jugar en ellos lo mejor que podamos.

La Redacción de «mientras tanto»

En el fallecimiento de Mariano Maresca

El pasado 9 de enero falleció en Granada Mariano Maresca, profesor de filosofía del derecho e importante referente cultural sobre todo de la ciudad de Granada y en general en Andalucía. Mariano ha sido un compañero y un amigo de varios de los miembros de la redacción de *mientras tanto*, a los que ha conmovido profundamente su desaparición.

Mariano Maresca había nacido en Almería en 1945, aunque su actividad principal tuvo por escenario la ciudad de Granada —con intervenciones también en Madrid, Barcelona y Sevilla—. Como profesor ejerció una notable influencia al ser capaz de orientar efectivamente el trabajo intelectual: son muchas las personas que le han recordado estos días pasados en la prensa granadina. La calidad de su actividad como dinamizador cultural tiene escasos equivalentes en toda la península. Había sido un muy notable militante contra la dictadura.

Hipótesis sobre Clarín (Granada 1985) recoge su significativa tesis doctoral. Otra publicación importante suya es, en colaboración con J. I. Mendiguchia, *Saló. El infierno según Pasolini* (Córdoba, 1993). *Las cosas que hemos visto* recopila algunos artículos publicados en la edición andaluza de *El País*, del que fue columnista de 2004 a 2008.

Dos revistas importantes deben su vida a Mariano Maresca, que fue su alma y su editor: *La Fábrica del Sur*, aparecida en los años ochenta, una revista cultural de sobresaliente calidad, y, más tarde, en formato digital, en los noventa, la revista *Olvidos de Granada*. También hay que mencionar actividades culturales, tanto en su Facultad de Derecho, por ejemplo un importante ciclo de conferencias dedicadas al bicentenario de la Revolución francesa, entre otras muchas, cuanto en sesiones de Seminario en el grupo de Filosofía del Derecho de la Universidad de Barcelona. Participó en acciones contra la entrada en la OTAN, o el Tratado de Maastricht —cuando se perdió la soberanía económica—, o a favor del “no” en el referéndum sobre la Constitución europea. Mantuvo vivo su activismo mientras la salud se lo permitió.

Mariano Maresca era un referente y en algunos casos un maestro para numerosos intelectuales. Fue amigo de Alberti, Luis García Montero, Juan Vida, Almudena Grandes y Laura García Lorca, entre tantos otros, como su querido discípulo Pedro Mercado o J. I. Mendiguchia.

Mariano era una persona cariñosa, cordial, de conversación inteligente, irónico, muy preciso en el calificativo. Llenaba a sus amigos de silenciosos detalles de afecto; era alguien que además ponía toda su pulcritud y su esmero en su actividad profesional. Su salud se vio perjudicada primero por la debilidad de su músculo cardíaco, teniendo que soportar varias cirugías a corazón abierto, y después por un desgraciado ictus que inicialmente le privó del habla y de la capacidad lectora, de lo que trató de recuperarse, consiguiéndolo parcialmente con mucho esfuerzo. En este como en otros casos, la enfermedad daña o se lleva pronto a los mejores.

No podremos olvidarle.

Ensayo

Antonio Antón

Una estrategia transformadora

El Gobierno de coalición progresista está empeñado en un proceso de reformas sociales y económicas positivas para las mayorías sociales y, en particular, para los sectores más vulnerables, a diferencia de las estrategias regresivas aplicadas en la anterior crisis socioeconómica. No hace falta detallarlas. Junto con una política presupuestaria más expansiva, reforzada por los fondos europeos, y la mejora del empleo, con más de veinte millones de personas ocupadas y una cifra récord de la afiliación a la Seguridad Social, se pueden citar tres grandes iniciativas: la protección pública a través de los ertes frente a la reducción de la actividad económica y el empleo derivada de la crisis económico-sanitaria; la reforma laboral para rebajar la extensa, prolongada y grave temporalidad, y los paquetes de medidas fiscales y regulatorias para disminuir el incremento de precios y las dificultades empresariales.

Desde el verano han ido acompañadas de una retórica gubernamental de izquierdas, de confrontación abierta con el modelo regresivo de las derechas basado en la rebaja de impuestos y la correspondiente disminución de la inversión pública y la protección social, así como de algunas medidas significativas como la mayor carga impositiva a las grandes empresas financieras y energéticas o la intervención reguladora, con el permiso europeo, en el mercado del gas para contener la inflación.

Esta gestión socioeconómica gubernamental se presenta como el principal balance positivo con el que se pretende activar y ampliar la base social progresista y garantizar la victoria electoral, especialmente, en las elecciones generales de fin de año. El conjunto de esas medidas, según los estudios demoscópicos, son apoyadas por la mayoría de la población; no obstante, sus resultados en términos de credibilidad política y confianza popular y, por tanto, de garantía de avance electoral y continuidad de la gobernabilidad de progreso está por ventilar.

La pugna por el relato sobre la situación socioeconómica y laboral de la sociedad es fundamental. La preocupación social principal afecta a este campo. La cuestión no es solo analítica sino, sobre todo, de legitimación de la gestión política, fundamentalmente entre el Gobierno de coalición progresista, con sus socios parlamentarios, y la oposición de derechas. A ella se añade la segunda preocupación ciudadana, que es, precisamente, la desconfianza en las instituciones, el Gobierno y la clase política, vistas por una parte significativa de la población como problema y no como solución.

Por tanto, la disputa política y mediática tiene que ver con la legitimidad de esos dos bloques y sus estrategias para encarar esos problemas socioeconómicos y democráticos, y, en este año electoral, reforzar sus apoyos sociales y electorales para consolidar su estatus de poder y de gestión. Más allá del rechazo a la estrategia neoliberal y reaccionaria de las derechas, conviene explicar los límites e insuficiencias de esa política reformadora y la necesidad de afianzar una estrategia transformadora de mayor alcance, un reformismo fuerte con mayor apoyo popular que permita revalidar una senda de progreso.

Doble problemática: socioeconómica y político-institucional

Interesa partir del máximo realismo en el diagnóstico de las percepciones de la población para evaluar las prioridades político-institucionales. Entre diferentes estudios demoscópicos cuento con las recientes encuestas de la consultora 40dB o el propio CIS. En la primera, de diciembre, aparecen en primer plano los seis grandes problemas que le ‘preocupan mucho o bastante’ a la población: *la inflación y el coste de la vida* (95,5%); *la dependencia energética* (88,3%); *la desigualdad social y la pobreza* (87,3%); *el paro* (82,3%); *el cambio climático* (81,7%), y *la guerra en Ucrania* (80,7%), y, a más distancia, *la inmigración* (58,4%).

Respecto de los datos del último Barómetro del CIS, de diciembre, he acumulado las ocho respuestas más relevantes sobre los tres principales problemas existentes en España —expresados en porcentaje— en dos campos principales: en primer lugar, los **problemas socioeconómicos y laborales** (32,8%): *problemas económicos, paro, precariedad del empleo, sanidad y desigualdades sociales* (incluida la de clase y la de género); en segundo lugar, prácticamente la mitad, los **problemas político-institucionales** (16,8%): *Los problemas políticos en general, El mal comportamiento de los/as políticos/as, El Gobierno y partidos o políticos/as concretos/as*. En este caso, evidentemente, los objetos del descontento y la exigencia de responsabilidades se confrontan entre ambos bloques político-ideológicos: izquierda y derecha.

Después de esos problemas más significativos figuran más de otras cincuenta cuestiones específicas priorizadas por menos del 3% de la población cada una de ellas como la educación, la crisis de valores, el racismo, la inmigración, la guerra de Ucrania y Rusia, los nacionalismos, la Monarquía, la violencia de género, el cambio climático o la España vaciada. Ello, por supuesto, no significa que en determinadas coyunturas y situaciones no pasen a un superior plano de la preocupación social. Salvando algunos temas culturales y otros como los nacionalismos (españolista y periféricos) que afecta a varios ámbitos a la vez, casi todas ellos se pueden englobar en los dos campos antedichos, convertidos en mayoritarios, y que son claves para las relaciones sociales igualitarias y el bienestar social, así como para la calidad democrática y una gobernabilidad progresista.

Comienza un año eminentemente electoral donde se van a confrontar la gestión político-institucional, las alternativas programáticas y, sobre todo, la credibilidad transformadora de los grupos y bloques políticos para garantizar a la mayoría social el correspondiente contrato social y electoral que permita superar esas problemáticas y consolidar una dinámica de seguridad y avance social y democrático. Dejo aparte los tres importantes temas políticos de la articulación territorial y el modelo de Estado, con el conflicto en Catalunya, la democratización institucional, empezando por el poder judicial, y las relaciones europeas e internacionales en el actual contexto geopolítico.

Me centro en el tema socioeconómico y su gestión institucional, con su correspondencia para la legitimación pública de los actores políticos y sociales. Lejos del catastrofismo de la oposición de las derechas, el Gobierno de coalición progresista ha implementado unas políticas socioeconómicas protectoras y reguladoras positivas. Ha habido un crecimiento del empleo, especialmente el indefinido, con reducción de la temporalidad. A pesar de las grandes dificultades (pandemia, guerra en Ucrania, desglobalización...) no se han cumplido los malos augurios recesivos o regresivos y la política económica dominante hasta ahora, también en Europa, ha sido relativamente expansiva y paliativa.

Sin ese anunciado empeoramiento económico derivado de la supuesta desastrosa gestión gubernamental, el Partido Popular se ha quedado sin credibilidad crítica y alternativa. Le queda echar mano del nacionalismo españolista más centralista, la manipulación mediática y los resortes judiciales, con su giro derechista y su dependencia de la ultraderecha. Pero sigue el incierto empate electoral de bloques.

El Gobierno progresista se apresta a poner en primer plano sus logros en esta materia. La pugna por el relato de la gestión económica —con las cosas del comer— se convertiría en el centro de la legitimidad del Gobierno para revalidar una nueva legislatura de progreso. Craso error. Esa estrategia, principalmente de la parte socialista, si no gana contundencia aplicativa y credibilidad ciudadana, es insuficiente. Corre el riesgo de no conseguir incrementar la confianza popular, que se resiste a sacar ventaja en las encuestas electorales y garantizar la victoria electoral progresista, y dejando al margen el factor decisivo tratado recientemente en un ensayo: [“La unidad del espacio del cambio”](#).

Apoyo masivo a la sanidad pública

Trato aparte el tema fundamental de la devaluación salarial. Aquí, como complemento sobre los claroscuros sociales hay que destacar la preocupación social por la sanidad pública, auténtica joya de la corona del Estado de bienestar, gestionado por las Comunidades Autónomas (el mayor gasto social es el de las pensiones públicas y la Seguridad Social, gestionado por el Estado). El último barómetro de 40dB, de enero de 2023, indica que el 65,4% piensa que su Comunidad destina ‘demasiados pocos recursos’ para la sanidad pública, y el 39,1% ve ‘regular’ su funcionamiento, con un 32,7% ‘bueno o muy bueno’ y un 26,8% de ‘malo o muy malo’. Además, el 61% es favorable a pagar más impuestos para mejorar la sanidad pública, y solo el 10,5% desearía pagar menos (aunque sólo el 2,6% si ello significa reducir su calidad).

Aunque la crítica sobre la falta de recursos es mayoritaria en todas las Comunidades Autónomas, en las gobernadas por las izquierdas hay menos insatisfacción y en las gobernadas por las derechas más descontento, sobre todo en la de Madrid, con su prolongado proceso privatizador y de recortes sanitarios que la hace acreedora de la más amplia movilización ciudadana (varios centenares de miles de personas el pasado 13 de noviembre, la mayor manifestación cívica de los últimos tiempos), continuada ahora y extendida a otros territorios.

Dos comentarios se pueden añadir. Por un lado, aunque la sanidad es una competencia transferida a las Comunidades Autónomas, de distinto color político, la responsabilidad de sus deficiencias es compartida por la clase gobernante cuya gestión institucional, siendo el gasto más relevante, está condicionada por la infrutilización de la financiación autonómica y la ausencia de

una profunda reforma fiscal que garantice la calidad de los servicios públicos. Tema importante que la parte socialista del Gobierno no ha querido abordar en esta legislatura y que subyace en el malestar social por el creciente deterioro de este servicio público esencial.

Por otro lado, conviene recordar y comparar la posición ciudadana sobre el gasto público social, según el estudio 2930 publicado por el CIS en enero de 2012, por el nuevo Gobierno de Mariano Rajoy que lo ignoró por su apuesta de profundos recortes sociales. Fue elaborado en el último momento del Gobierno del socialista Rodríguez Zapatero bajo la dirección de Belén Barreiro, precisamente la actual directora de 40dB que ha elaborado el reciente estudio. Pues bien, en lo referido a la sanidad y a la pregunta de *¿Cuánto le gustaría que se gastara, aunque hubiera que subir impuestos?*, las respuestas fueron las siguientes: 'Mucho más y más', 71,8%; 'lo mismo', 22,2%; 'menos y mucho menos', 3%.

Como se puede comprobar, con más de una década de diferencia y con lo que ha llovido en materia de política económica regresiva y defensa cívica de los derechos sociales, persisten esos dos tercios de personas partidarias de garantizar una sanidad pública de calidad confrontando con el mantra más duro de las derechas sobre la bajada de impuestos. Los servicios públicos y el Estado de bienestar gozan de una legitimidad social ampliamente mayoritaria.

Fuente: Eurostat y para 2022T3 CaixaBank. Elaboración propia, incluido transferencias públicas y sin alquiler computado. 0 es la máxima igualdad y 100 la máxima desigualdad.

Por último, en el gráfico adjunto expongo los datos sobre desigualdad social, desde el comienzo de la crisis socioeconómica en 2008 y hasta el tercer trimestre de 2022 en España, comparado con la media de los 18 países europeos del euro que son los más similares en nivel de desarrollo, advirtiendo que Europa es la región con el menor nivel de desigualdad del mundo. Como se ve, la distancia con la media europea es significativa, en torno a un 10% superior, particularmente entre los años 2014 y 2017, siendo España uno de los más desiguales, con los efectos de todo tipo que tiene la permanencia en ese alto nivel. La tendencia se modifica en el año 2022 en que se produce un diferencial favorable en España, que se acerca a la media europea, por el crecimiento comparativo del empleo y el mayor peso del escudo social promovido por el Gobierno progresista de coalición.

Frente a la devaluación salarial

A pesar de mejoras sociales relativas, incluida la actual subida de las pensiones públicas respecto del IPC de este año, todavía persisten amplios y graves problemas en el mercado de trabajo. Hay todavía 2,8 millones de personas desempleadas y la tasa de desempleo juvenil es la más alta de la Unión Europea (32,3%), cuya precariedad se agudiza por las dificultades de acceso a una vivienda digna. En otra parte trato el deterioro de los servicios públicos, particularmente, la sanidad y los niveles de desigualdad social. Cojamos el aspecto más relevante, la pérdida de capacidad adquisitiva de la mayoría social, derivada del incremento de precios del mercado y la devaluación salarial. La situación de retroceso generalizado, aunque desigual, es evidente y su percepción segmentada por la sociedad refleja un crudo realismo.

No vale el conformismo y la autocomplacencia de las fuerzas progresistas que llevan a la resignación o las inclinaciones centristas y contemporizadoras respecto de las amplias trayectorias sociolaborales precarias y las dinámicas autoritarias. Es preciso una senda de

firmeza. Veamos algunos condicionamientos socioeconómicos de la gente, una parte todavía distanciada del compromiso con el Gobierno de coalición progresista, y aparte de las dudas suscitadas por decisiones políticas controvertidas, amplificadas en los medios.

El Gabinete Económico de CC. OO. acaba de publicar un amplio estudio titulado “Los beneficios empresariales impulsan y enquistan la inflación”. La conclusión es clara. Se está produciendo una nueva devaluación salarial en España derivada de la prepotencia empresarial, con una fortísima pérdida en el poder de compra de los salarios en el año en curso, parcialmente contrarrestada en el caso del incremento gubernamental del SMI que afecta a un millón y medio de personas. Caben citar dos párrafos literales:

El salario real de 2022 por realizar el mismo trabajo que en 2008 caerá un 12,6%. Mientras los márgenes y beneficios empresariales, como se ha visto, están creciendo hasta niveles no vistos desde 2014 impulsando la espiral de precios. La pérdida de poder de compra de los salarios en 2022 será del 5,2% resultado de una subida media de los salarios pactados del 2,78% hasta diciembre y del 8,4% de los precios de consumo en media anual.

A esto hay que sumar la pérdida de poder de compra adicional por el alza de los tipos de interés para los más de cuatro millones de hipotecados a tipo variable y que en media sufrirán una pérdida del 10% de su renta anual. De persistir esta dinámica desequilibrada, la gestión diferente y mucho más equitativa de la crisis de la pandemia con los ERTE podría terminar convirtiéndose en un espejismo y se volvería al esquema tradicional de ajuste vía salarios y empleo.

Frente a las explicaciones que solo naturalizan o externalizan sus causas (el mercado, la globalización, la pandemia, la guerra...) se produce un paso valorativo dirigido al Estado y los agentes sociales y políticos: la insuficiencia de la protección y la acción reguladora públicas, todo ello achacable a la incapacidad y/o insuficiente determinación institucional, partidaria y sindical para afrontarlo de forma más contundente y generalizada. Y el CIS y los estudios demoscópicos así reflejan esa preocupación y malestar social que ante su impotencia o inacción exige respuestas, siempre condicionados por la pugna partidista y mediática.

Dicho de otro modo, la patronal está imponiendo sus propios intereses de acumulación de beneficios empresariales a costa de la disminución de costes salariales. Por tanto, no solo se ralentiza el consumo, la actividad económica y el empleo sino que se precariza la vida de la mayoría trabajadora y sus familias. La negociación colectiva, supuestamente reforzada por la reforma laboral, se muestra incapaz de remontar esa prepotencia empresarial. La estrategia de diálogo social está inoperativa, sin perspectivas de un pacto de rentas equilibrado, a pesar de la reclamación sindical y las llamadas diversas del Ejecutivo, incluso de medios significativos como el diario *El País* (16/01/2023).

La patronal está fuerte y cómoda en su oposición a un pacto de rentas que le pudiera condicionar ligeramente hacia un incremento remunerativo de los salarios. Ahora, a diferencia del periodo anterior (negociación de la financiación pública de los ertes y de fondos europeos, emplazamiento del nuevo Ejecutivo progresista, con aceptación de límites a la temporalidad y estabilización del marco de relaciones laborales...) no tiene suficientes presiones e incentivos para unos acuerdos razonables y sí un fuerte apoyo de las derechas. La dinámica generada, con esta inercia, es la consolidación del recorte de la capacidad adquisitiva de los salarios y el aumento de la desigualdad salarial. Y en el plano subjetivo el resquemor pasivo en gente trabajadora.

Mientras tanto, el Gobierno de coalición progresista, como referencia, ha negociado y aprobado un incremento plurianual moderado de las retribuciones del empleo público, para este año 2023, de 2,5% (más un punto complementario), cuando la tasa de variación anual del IPC en España en diciembre de 2022 ha sido del 5,7% (y el 8,4% en media anual), es decir, con una consolidación de la pérdida de más de dos puntos de capacidad adquisitiva, acumulada al retroceso de 12 puntos desde 2010. Significa que, aunque el Ejecutivo progresista junto con los dirigentes sindicales confederales hayan calificado el acuerdo de razonable, tampoco está garantizando el poder adquisitivo de los tres millones y medios de empleos públicos ni ha supuesto suficiente estímulo de mejora para el resto de la negociación colectiva aunque sea fundamentalmente una cuestión autónoma de los agentes sociales y económicos y los sindicatos se quejen de cierta inacción gubernamental.

La estrategia sindical de 'salario o conflicto' de este otoño y comienzos de invierno está resultando incapaz de modificar sustancialmente la tendencia de devaluación salarial impuesta por los empresarios. Igualmente, el escaso impulso del centenar de los convenios colectivos más favorables no es capaz de arrastrar la negociación colectiva de los sectores más débiles y la acción movilizadora es muy limitada, con solo un ligero crecimiento de la actividad huelguística: en el año 2022, un 4,5% más de huelguistas que el año anterior, con un total del 17% más de jornadas no trabajadas por huelga. Entre las causas, aparte de la precariedad y las dificultades económicas de las familias, está la débil determinación del activo sindical y/o su capacidad contractual. El reto es la oposición social, política y sindical a la devaluación salarial, la defensa persistente de los derechos sociolaborales y democráticos.

Más democracia y justicia social

Tal como he señalado, son relevantes los dos aspectos, puestos de relevancia desde hace más de una década. Por un lado, la percepción mayoritaria de la gravedad de los problemas socioeconómicos y político-institucionales, con un agudo sentido de la justicia social. Por otro lado, la gran legitimidad de los derechos sociolaborales y una gestión institucional protectora e igualitaria basadas en un fuerte sentido democrático. Ello supone una reafirmación democrática, con la imprescindible activación y ensanchamiento de la base social progresista con mayor legitimación a sus representantes políticos. El descontento social se combina con cierta desconfianza en la capacidad y la voluntad transformadoras de progreso en ese doble ámbito.

En ello influyen diversas causas, pero la pugna política y el sentido del cambio social e institucional no afecta solo a los otros aspectos político-culturales controvertidos. Está clara la movilización autoritaria y nacionalista española de las derechas reaccionarias frente a los derechos democráticos y civiles, los avances feministas y de la articulación plurinacional. Pero

una pugna de fondo sigue situada en torno a la cuestión social y laboral y los derechos sociales, en un contexto de incertidumbre sobre el equilibrio de fuerzas sociales y fácticas, así como de la capacidad de la gestión de las fuerzas progresistas y su garantía del avance social y democrático. La democratización y la gestión institucional se vinculan al bienestar y la cohesión social y territorial.

Hay un riesgo de incoherencia, la falta de conexión de los dos campos que, a veces, aparecen como opuestos: el de la 'utilidad' o política útil de mejoras socioeconómicas y laborales inmediatas, y el de reformas institucionales y estructurales, a veces lentas e incompletas. Ambas están vinculadas a las dinámicas de participación cívica en el proceso reformador y frente a la involución social y democrática. Pero la crisis de credibilidad institucional y política, en ambos campos, viene de la insuficiencia reformadora, por los límites de las mejoras reales y sin impacto sustantivo, con el exceso de meros discursos genéricos o, en el peor de los casos, de simple ruido desinformativo y politiquero sectario y corporativo.

Así, la realidad y la percepción social de la acción reformadora difiere en dos contextos distintos, según la dinámica de los dos actores principales, el mercado (empresarios y gestores económicos) y las instituciones públicas. En un marco de fuerte y generalizado impacto regresivo de los poderes económicos neoliberales, el impacto resultante genera un deterioro o situación peor o más desigual. Esa dinámica está amparada, a veces, por la gobernanza europea y estatal, y afecta especialmente a los derechos sociolaborales y la calidad de servicios públicos.

Esa realidad de retroceso es la fuente de malestar popular, a pesar de la implementación de mejoras parciales apoyadas por la población. En ese marco, el Gobierno, las instituciones públicas, paliar parcialmente situaciones graves, pero no son capaces de revertir su empeoramiento. La justificación posibilista de que no se puede hacer más lleva a la resignación, pero también a la desconfianza en la política y las instituciones públicas; se genera desafección hacia la gestión (insuficiente) de progreso.

Es el factor de fondo de cierto escepticismo popular en los partidos políticos y las instituciones que, según señalan las encuestas, desconfían de su resolución satisfactoria y tienden a la pasividad y el abstencionismo. Es el motivo de todo el ruido mediático y la pugna de relatos para transferir o adjudicar la responsabilidad de la insuficiente o errónea respuesta al otro actor político o agente social. Pero la quiebra de credibilidad representativa afecta a todo el conjunto institucional, a la capacidad articuladora de la propia democracia, cuestión aprovechada por los poderes y tendencias reaccionarias y ultraderechistas que pugnan por una involución autoritaria y regresiva. Así, se enlazan los dos procesos reformadores concretos, el socioeconómico y el político-institucional, acompañados y justificados por los correspondientes discursos y dinámicas legitimadoras. La solución es más democracia y más justicia social.

Estrategia, proyecto y fuerza social

Nos adentramos este año en una encrucijada estratégica. En las ciencias políticas convencionales, desde la antigua Grecia, había un concepto que relacionaba los objetivos, los medios y los sujetos: la estrategia. Esa palabra —y todavía más su subordinada, la táctica— ahora suena a engaño y manipulación. Los fines aparecen en bellos discursos, como propaganda o publicidad, pero sin enlazar con las medidas concretas. La acción política y participativa —la democracia— tiene dificultades para su regulación y gestión, se desvincula de ambas y se

convierte en el ejercicio y la legitimación del poder institucional. Es cada vez menos relevante respecto de los poderes fácticos económicos, burocráticos y de seguridad, arropados por la gran concentración mediática y los aparatos culturales.

La disociación se establece en los dos planos. Por una parte, hacia el idealismo como prevalencia de discursos, programas y proyectos, más o menos abstractos o ambiguos, pero sin incardinarse en un proceso articulador de su implementación y ejecución. Esos significantes y su contenido también pierden credibilidad operativa y, por tanto, confianza popular. Por otra parte, está la cotidiana gestión política, absorbida por la legitimación político-cultural y material de su utilidad específica con intereses y medios comunicativos encontrados, opacada en su sentido global o trayectoria a medio plazo.

El problema no se resuelve solo con metáforas más o menos convenientes del tipo de establecer horizontes compartidos y un nuevo contrato social, al igual que estimular solo actitudes emocionales positivas como esperanzas e ilusiones de cambio. Tras una década larga de la ejecución de políticas regresivas por el poder establecido (europeo y mundial) con la anterior crisis socioeconómica, con el incumplimiento del contrato social democrático de la socialdemocracia española (y europea) que le ha costado más de una década remontar parcialmente, se ha configurado un espacio político electoral a su izquierda, es decir, con la exigencia de mayor justicia social y más democracia. Los poderes democráticos europeos han tomado nota sin atreverse (todavía) a una involución económica y política abierta como empujan las dinámicas reaccionarias de derecha extrema.

Así, más allá de conceptos ambiguos como transversalidad o centralidad lo sustantivo para afrontar la grave situación popular es la importancia de la credibilidad de una dinámica transformadora, social y democrática, que responda a las necesidades e intereses de la mayoría social, hoy todavía incrédula respecto del avance social y democrático que amenaza las derechas y su involución reaccionaria. Es, por tanto, necesaria la certeza del camino a recorrer, aunque se vean dificultades, así como la confianza del compromiso y la certidumbre de la apuesta transformadora. Es la forma de ganar credibilidad y volver a interrelacionar fines, medios y sujetos, o si se quiere, proyecto, políticas concretas y campos y actores sociopolíticos y electorales.

Y ello pasa, necesariamente, por una articulación unitaria del espacio del cambio o frente amplio, con una cooperación de sus principales actores, desde En Comú Podem e Izquierda Unida, hasta los principales protagonistas, Yolanda Díaz y su grupo Sumar con Podemos. Y ello, junto con la reafirmación de izquierdas de la dirección socialista y la convergencia de los socios necesarios, particularmente los nacionalistas catalanes y vascos, para una nueva investidura de un gobierno de coalición progresista. Es la tarea pendiente para generar confianza popular en un cambio real y sustantivo de carácter progresista y vencer la reacción derechista generando una dinámica reformadora efectiva.

La incógnita es si nuestras élites representativas principales, al menos en esos tres grandes ámbitos, la socialdemocracia, el espacio del cambio de progreso y los sectores nacionalistas de izquierda van a dar la suficiente talla para no defraudar a sus bases sociales y el progreso del país. Su éxito depende de la interrelación y la colaboración de las tres partes. No obstante, aun con una base social curtida desde hace más de una década, la parte más frágil y fragmentada es

la representación política de ese campo de la izquierda transformadora o fuerzas del cambio. Superar el desafío de su colaboración para aportar al conjunto del devenir de esta apuesta es fundamental; se van a evidenciar sus potencialidades (e insuficiencias) políticas y orgánicas, con su capacidad unitaria y de respeto a la pluralidad, junto con su valía democrática, teórica y ética. Todo ello con el activismo social y la intelectualidad progresista.

Esas condiciones pueden condicionar el éxito del conjunto del bloque progresista, que también beneficiaría a la corriente socialista y su dirección actual, también como referencia europea y mundial. Pero, igualmente, su fracaso podría acarrear la consecuencia de su inviabilidad política como fuerza condicionante y complementaria de la socialdemocracia, sin poder coparticipar en la estructuración del país y la expectativa de consolidar un cambio de progreso en la próxima década, así como con pocos recursos e influencia social.

Conllevaría amplios efectos destructivos para el activismo sociopolítico, y cuestionaría la legitimidad de esa representación político-institucional cuyo prestigio decaería más. Sería un resultado contrario y frustrante en relación con el deseo vigente desde hace más de una década de conformar un espacio y una dinámica reformadora de progreso y superadora del bipartidismo continuista y estéril. Es una gran responsabilidad, cuyo acierto determinará la consolidación o no de una nueva elite dirigente y su recomposición interna, con autoridad y confianza popular suficiente para constituir un agente relevante de cambio en este país (de países).

En definitiva, desde hace más de una década se ha generado una dinámica transformadora de progreso con una significativa corriente social diferenciada de la trayectoria continuista y ambivalente de socialdemocracia, que fluctúa entre cuatro y siete millones de personas. Ha permanecido con diversos altibajos y parciales desplazamientos político-electorales, respecto del Partido Socialista y las izquierdas nacionalistas, pero ha demostrado su persistencia con unas señas de identidad distintas como campo sociopolítico y cultural específico de fuerte contenido democrático, social-laborista, feminista y ecologista y con sensibilidad confederal. Ello, sin ser agoreros, permite mantener la confianza de conformar una élite representativa capaz de representarla, orientarla, consolidarla, renovarla y ampliarla.

Este año se comprobará la prueba de la realidad de la capacidad, el liderazgo y la altura de miras demostradas, aunque la experiencia no será indiferente en los dos planos: la conformación de una fuerza sociopolítica transformadora, democrática, plural y madura, y la consolidación del cambio político-institucional y económico-laboral de progreso para una década. Hay riesgo evidente de incapacidad articuladora y retroceso social y político. La alternativa, con bases realistas, es de avance democrático. Las fuerzas progresistas y la sociedad española (europea y mundial) se lo merecen y su éxito abriría nuevos horizontes para el cambio igualitario y de progreso. En resumen, el reto es la articulación y coherencia de acción inmediata reformadora, proyecto, fuerza sociopolítica y estrategia, junto con valores democráticos e igualitario-emancipadores-solidarios.

El extremista discreto

El Lobo Feroz

A pedradas

El etólogo I. Eibl Eibesfeldt describe en uno de sus libros cómo se hacían la guerra dos tribus africanas cuyos respectivos territorios estaban separados por un río. Cada una designaba a su combatiente, al que toda la tribu seguía a distancia hasta que llegaba casi a la orilla del río. Allí, el guerrero, y con él toda la tribu, prorrumplía en insultos, denuestos, imprecaciones y maldiciones por causa de los agravios de la otra tribu, cuyo combatiente designado, entonces, entablaba una lucha a cantazos contra el otro, hasta que algún pedrusco alcanzaba a uno de los dos. Entonces el herido o lastimado —las cosas raramente pasaban de ahí— y su tribu se retiraban con gritos de dolor y pronunciando amenazas de continuar la guerra... y así hasta el encuentro siguiente.

Este modelo primitivo de guerra lo encontramos también en la Biblia, en el enfrentamiento entre el hebreo David y el filisteo Goliat, igualmente a pedradas al menos por parte de David; en la representación clásica de Miguelángel, el joven David iba armado con una honda, esto es, con un arma primitiva, propia más bien de pastores.

Desde entonces las cosas han cambiado mucho. El *progreso* en las llamadas artes de la guerra ha dado de sí que el enfrentamiento no sea ya solo entre valientes, ni solo entre soldados, sino que abarque también a su tribu, cuyas ciudades y bienes públicos, gracias a los *progresos armamentísticos*, pueden ser destruidas generalizadamente, en el extremo *hasta no dejar piedra sobre piedra*. Ocurre con esto como en nuestro comportamiento antiecológico: no se trata de *ir más allá*, sino de *decrecer* para limitar el daño a nuestro entorno.

De modo que a este Lobo se le ocurre que antes de que las ciudades ucranianas queden completamente destruidas, y antes de que se *escale* el conflicto, o sea, antes de que se produzca en Europa una guerra librada con armas nucleares, a lo que conduce el entusiasmo bélico de muchos gobiernos y de personajes públicos como Margarita Robles y Josep Borrell, empeñados en llevar más y más armas al escenario del conflicto en vez de buscar la vía de la negociación, o el entusiasmo del propio Putin, su sostenella y no enmendalla cuando ha cometido una atrocidad al iniciar la guerra, convendría también *decrecer bélicamente*.

Este Lobo estaría encantado de ver, en algún estadio suizo, un combate entre Putin y Zelenski (o su mandante Biden), sin armas de fuego, para ir dirimiendo no ya la guerra —no aspiro a tanto—, guerra que debería estar al menos en provisional alto el fuego, sino uno a uno los puntos que se ventilan en el conflicto. Eso podría ser televisado a todo el mundo, y los derechos televisivos destinados a la reconstrucción de Ucrania o de lo que quede de ella. El espectáculo —con descansos para la publicidad— podría ser completado con actuaciones de collas sardanísticas en la plaza del Maidán y amenizado con vales de Strauss por la Filarmónica de Viena o, ya puestos, la de Berlín, para mostrar que los países de la Otan están realmente interesados en hacer la paz.

El Rombo

Kakademia, V

XVII

Aquel chico
que hablaba sin cesar
de la navaja
de Beckham;
o aquella para quien
el Cid
peleaba contra
los filisteos;
o el que afirmaba
estar leyendo
Guerra y paz
de Trotski.

O

al que pregunté
qué sabía de
Sócrates
y contestó
sincero
que era maricón.
Y aquel muchacho
de Derecho

el más lírico de todos,
que mencionaba

El libro del consolado del mar.

A veces
me pregunto
qué habrá sido
de ellos.
Resultaban
simpáticos,
inocentes,
ignorantes
de su oceánica falta
de amueblamiento.

XVIII

El nombramiento
para mi primer
trabajo
en la uni como
Ayudante de Clases Prácticas
sin sueldo
ni gratificación,
ni seguridad social,
gratis et amore
total
incluía la prohibición explícita

de usar el título
de profesor;
además,
si tenía que dar alguna clase
debía hacerlo
con un libro en la mano,
señal que por lo visto
me diferenciaría
de un profe de verdad.

La prohibición
en aquellos nombramientos
que el rector expedía como churros
buscaba sin duda poner coto
al autobombo
en negocietes
particulares.

Y eso me hace ver hoy
que entonces aún tenía algún prestigio
ser profesor,
incluso último mono,
de aquel chamizo.

XIX

En el Patio de Letras
del pasado
los bedeles

llamaban a palmadas
si iba a empezar la clase,
pero lo insólito
es que al final de ésta,
entraban en el aula,
con una reverencia,
para anunciar: *Doctor, la hora*
cual relojes vivientes.

Hoy
afortunadamente
hay relojes hasta en la sopa,
y los bedeles
en sus garitas
si no tienen otra cosa que hacer
atienden a los profes
con tal vez merecida
displicencia.

¿Nostalgia?

En aquel tiempo
bibliotecarias y otros
eran cosas
pagadas
como material de oficina.

XX

De vez en cuando,

no a menudo porque
intervienen también factores

digamos

premodernos,

el personal se sulfura

y se declara

harto.

Las razones, lector,

te resultarán obvias,

pero nunca se sabe

ni el día ni la hora

en que la gota

desbordará

el consabido vaso.

Está claro

el protocolo que sigue entonces

la superioridad:

discrimina

y

a los que menos lo necesitan

les otorga

(esa es la palabra)

un modesto

tapabocas

—la bufanda, lo llaman—

que durará
hasta el siglo
siguiente
si entretanto
no se ha venido abajo
el tenderete.

Especial sobre la guerra

Rafael Poch de Feliu

La gran ceguera

Pronto hará un año del inicio de la invasión rusa de Ucrania y aún no tenemos claro quién está ganando esta guerra. Obviamente, en el plano humano, la población ucraniana es la que más está perdiendo, no solo en Járkov y Kiev sino también en Donetsk, por la barbarie y el sufrimiento que acumula. Pero, más allá de ese hecho, en el plano militar, los vaivenes de la situación en el frente, distorsionados por las respectivas propagandas, no ofrecen un cuadro claro.

En otoño las fuerzas armadas ucranianas apadrinadas por la OTAN tomaron la iniciativa, pero tras una retirada rusa, presentada como “táctica” y aparentemente ordenada —pues no dejó prisioneros— parece ser que los rusos están marcando la pauta en invierno. Los estrategas de Putin, que en otoño estaban inquietos, se muestran ahora seguros y confiados en sus fuerzas y capacidad industrial, mientras en Ucrania la movilización forzosa, con decenas de miles de insumisos y escapados, chirría tanto o más que en Rusia. Pero la situación sigue abierta a los vaivenes que ya hemos conocido.

El mero impacto de un misil ucraniano/noratlántico en Moscú, donde estos días se están instalando nuevas baterías interceptoras, bastaría para cambiar la percepción de la situación...

Pero más allá de la relativamente confusa crónica militar, hay un hecho meridianamente claro: el balance que nos ofrece el resultado de esta guerra, a casi un año de su inicio, retrata colosales errores de cálculo de todas las partes implicadas en ella.

Rusia

En esta general gran ceguera estratégica, destaca el estrepitoso fracaso de la “corta guerra victoriosa” que el Kremlin esperaba alcanzar con el doble objetivo de que Occidente respetase sus [“intereses de seguridad”](#), así como disciplinar a sus vecinos exsoviéticos de Eurasia de puertas afuera, y consolidar su régimen político de puertas adentro.

El Kremlin ha enterrado la integración de Rusia con la comunidad occidental. El proyecto de la “gran Europa” de Lisboa a Vladivostok, que fue su razonable reivindicación histórica desde el fin de la Guerra Fría, se ha hundido definitivamente. Como dice Dmitri Trenin, “por primera vez en su historia, Rusia no solo no tiene aliados en Occidente, sino ni siquiera interlocutores capaces de desempeñar el papel de mediadores y traductores”. Finlandia, Austria, Irlanda, Suiza... desaparecen los restos de neutralidad en el continente.

Paralelamente, se ha destruido la relación económica de Rusia con Occidente. Las sanciones económicas impuestas en 2014 se han convertido en una guerra total económica, financiera y comercial.

En el ámbito de la seguridad, el propósito de alejar a la OTAN de sus fronteras ha resultado en lo contrario, en el deseo de Finlandia y Suecia de ingresar en la Alianza, lo que supone 1.200 kilómetros más de frontera directa con la OTAN, así como un rearme occidental inusitado. La voluntad de desmilitarizar y neutralizar a Ucrania se ha quedado en la transformación de ese país

en una temible potencia militar firmemente orientada contra Rusia.

La disuasión nuclear, en la que Rusia ponía tanto esfuerzo, se demuestra como un factor insuficiente, porque el adversario —y esto es sumamente peligroso— no se lo toma en serio. Nunca desde que existen armas nucleares se banalizó tanto ese factor. Nunca se jugó a la ruleta rusa con él, como se hace ahora.

Fracaso también, por tanto, del “arma energética” que Moscú pensaba que frenaría a la Unión Europea y en especial a Alemania.

La especial relación con Alemania, iniciada con la reconciliación posbélica, dinamizada durante la Guerra Fría por la *Ostpolitik* socialdemócrata, y culminada con la luz verde de Moscú a la reunificación de 1990, ha fallecido. Alemania vuelve a ser enemigo de Rusia y envía [de nuevo sus tanques](#) al escenario de su gran derrota en la Segunda Guerra Mundial. Podría ser solo el principio. Como ha dicho en su mensaje de Twitter el ultra Andri Melnyk, exembajador ucraniano en Berlín: “¡Aleluya!, ahora queridos aliados formemos una fuerte coalición en materia de aviación de guerra, para enviar F-16, F-35, Eurofighter y Tornados, Rafale y Gripen, y todo lo que pueda enviarse a Ucrania”.

Las “organizaciones internacionales” controladas por Occidente, como la OSCE, o el organismo Internacional de la energía atómica (IAEA), por mencionar solo dos, culminan su orientación de instrumentos contra Moscú.

Ninguno de los aliados rusos en la Organización del Tratado de Seguridad Colectiva, excepto Bielorrusia (y hay que entender las [condiciones](#) bajo las que Lukashenko coopera con Putin), se ha mojado con la intervención en Ucrania y han preferido declararse neutrales.

El único capital ruso es la actitud de los BRICS y los no occidentales en general, que comprenden que la invasión de Ucrania es el resultado de responsabilidades compartidas y sacan sus propias conclusiones prácticas, condenando la agresión pero sin sumarse a las sanciones.

Hay todo un polo en formación interesado en el propósito general ruso de corregir y cambiar el marco institucional internacional elaborado durante la posguerra mundial, que ya no se corresponde con las realidades del mundo de hoy. Pero, al lado de los citados fracasos concretos e inmediatos, esta es una ventaja relativa y difusa, que solo se podría concretar a medio y largo plazo.

Unión Europea

Entre el 24 de febrero y el 15 de diciembre, la Unión Europea ha impuesto 10.300 sanciones a Rusia. Ya va por el décimo paquete de sanciones. Las sanciones debían servir para que Rusia perdiera la guerra o, por lo menos, la guerra energética. La ministra de Exteriores alemana, Annalena Baerbock, dijo que su propósito era “arruinar” a Rusia, y la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, dijo que el objetivo era “desmantelar, paso a paso, la capacidad industrial de Rusia”. Pero la economía rusa no se ha hundido. Sus ingresos por exportación de hidrocarburos han aumentado un 28%. Europa compra diesel ruso a India. La caja que sostiene la guerra de Moscú no se ha vaciado. La recesión rusa está siendo suave. La economía rusa, y quizás también la sociedad, se transforma con gran dinamismo y una eficacia considerable. La

oposición no ha hecho acto de presencia y la política informativa parece bien engrasada. La guerra puede actuar como locomotora keynesiana. Las fábricas de armas trabajan a todo gas, los elevados sueldos de los soldados bajo contrato atraen a decenas de miles de pobres de las últimas regiones del país, y los vacíos dejados por el boicot prooccidental se cubren a gran velocidad.

Al mismo tiempo, los costes de la energía en Europa amenazan con desplazar empresas e industrias europeas a otros lugares, en primer lugar a Estados Unidos, en beneficio de la reindustrialización de ese competidor.

La Unión Europea se ha convertido en subalterna de la OTAN, donde manda Estados Unidos. El antiguo eje político europeo fundamental franco-alemán ha sido sustituido por el eje político-militar Washington / Londres / Varsovia / Kiev, que marca la línea a seguir. La Unión Europea de Maastricht ha muerto. Ha perdido, literalmente, su orientación y está extraviada en el mundo.

Europa inventó la geopolítica en el siglo XIX, pero, como dice el politólogo de Singapur Kishore Mahbubani, “en el XXI ha olvidado que la geopolítica se compone de política y de geografía, y parece creer que su geografía y sus intereses en general coinciden con los de Estados Unidos”.

En la Unión Europea de Von der Leyen cada vez hay menos políticos y más actores. No se hace política, sino gestos, declaraciones y anuncios sin apenas consecuencias. La UE vive en el reino de la imagen. Tan importante es el discurso de la presidenta como la combinación azul y amarilla de su traje ante el Parlamento Europeo. Los “valores europeos” (¿la ilustración, la división de poderes y Beethoven, o las guerras de religión, el colonialismo y Auschwitz?) y los “derechos humanos” (¿o más bien su selectiva utilización vía la política de derechos humanos?) ya no impresionan al mundo no occidental, harto de la hipocresía y los dobles estándares.

Como ha explicado [Emmanuel Todd](#), el mundo es mayoritariamente patriarcal y, para la inmensa mayoría de su población, el neoconservadurismo ruso-ortodoxo en materia de moral y costumbres (patria, familia, religión) es mucho más comprensible que la revolución LGTBI occidental. Eso no tiene nada que ver con el progreso de civilización que el paulatino pero inexorable avance universal del rol femenino representa en todas partes, y desde luego también en el sur global, algo que la modernidad y la instrucción llevan consigo. Con lo que tiene que ver, dice Todd, es con la pérdida general de conexión con el mundo real que el neoliberalismo ha generado en occidente, donde el establishment reduce la igualdad a igualdad de género y el género a una cuestión de libre opción.

Estados Unidos

Llegamos así al principal y más inquietante enigma. Hay un consenso general de que el gran marco de las relaciones internacionales en el momento en el que nos ha tocado vivir consta de dos aspectos fundamentales: el relativo declive de la potencia occidental que ha dominado el mundo los últimos doscientos años, y el traslado de la potencia desde Occidente hacia Asia.

Las tensiones a las que asistimos hoy, en forma de sanciones, acción informativa (propaganda) y abierto conflicto militar, son consecuencia directa de las ansiedades que estos dos aspectos crean en Estados Unidos, que ha trabajado para tener bien amarrada a Europa, vía la OTAN, creando las tensiones con Rusia que justificaban esa organización desde el mismo fin de la

Guerra Fría, hace un cuarto de siglo. La guerra de Ucrania está claramente relacionada con ese contexto general y ofrece señales importantes en tiempo real sobre la correlación de fuerzas global que todo el mundo observa con la máxima atención. Pero lo que aquí importa es cómo la primera potencia mundial reacciona a la situación.

Como observábamos [hace un par de años](#), Estados Unidos pasa por ser una “sociedad abierta” —incluso la sociedad abierta por excelencia—; sin embargo, es obvio que las preguntas esenciales sobre su comportamiento internacional ni se plantean, ni pueden siquiera ser planteadas. Por ejemplo, la mera hipótesis de que el país deje de ser la “potencia número uno” en el futuro próximo —una posibilidad en absoluto excéntrica— no solo es implantable, sino que tiene categoría de simple herejía: nadie en Estados Unidos está dispuesto a discutir la posibilidad de que el país llegue a ser un “número dos” mundial. El mero enunciado de tal posibilidad, como dice Mahbubani, “sería suicida para cualquier político que lo planteara”. Estados Unidos no tiene una estrategia para el nuevo mundo del siglo XXI. No se prepara para los cambios que están en marcha, sino que únicamente se resiste a ellos militarmente.

Con la expansión de la OTAN hasta las fronteras de Rusia y las tensiones que ello ha ocasionado con ese país, Estados Unidos ha logrado retomar el control político militar de Europa. Está atando corto a Alemania, para lo que ha tenido que reventar mediante atentados los gasoductos por los que fluía la sólida relación energética del gigante europeo con Rusia. Pero, ¿no era la guerra “la continuación de la política por otros medios”? Si es así, entonces, ¿cuál es la política que hay tras las guerras de Estados Unidos?

En Afganistán entraron en octubre de 2001 y, tres meses después, hacia finales de diciembre, ya se había conseguido el objetivo esencial: el hundimiento del régimen talibán y la destrucción de Al Qaeda allá, aunque sin apresar a Bin Laden. En lugar de proclamar “misión cumplida” e irse en diciembre de 2001, se quedaron veinte años. Y al final tuvieron que salir apresuradamente ante el regreso de los talibán. En Irak, incubaron el Estado Islámico y han dado paso a una influencia inusitada de su principal adversario regional, Irán, en el país. Objetivos y actitudes manifiestamente errados, que provocan [inmensa destrucción y mortandad](#).

¿Cuál es ahora el propósito en Ucrania? ¿Cuál es el objetivo? ¿Se trata del cambio de régimen en Moscú?, ¿disolver Rusia en varios estados?, ¿agotarla? Tratándose de una superpotencia nuclear, todos esos objetivos son demenciales. La ceguera estratégica demostrada en Afganistán e Irak es ahora mucho más temeraria y catastrófica porque abre una caja de Pandora tan imprevisible como inquietante, particularmente para Europa. Y eso es lo que pone de candente actualidad la necesidad de que Estados Unidos se vaya, de una vez por todas y definitivamente, de Europa, como debería haber hecho al concluir la Guerra Fría. Que nadie reclame hoy esto en el viejo continente forma parte de esa ceguera colectiva.

A un año del inicio de la invasión, asistimos a una debacle estratégica general de todas las partes implicadas y a una incertidumbre completa, pero la de Estados Unidos es, sin duda, la principal y la que mayores consecuencias tendrá porque nos está arrastrando a la tercera guerra mundial.

P.S. Casi la mitad de los europeos están a favor de un pronto fin del conflicto ucraniano, incluso a costa de pérdidas territoriales para Ucrania. Según Euroactiv, citando una encuesta realizada por Euroskopia, el 48% de los residentes de los países de la UE apoyaron esta opción. Contra tal sacrificio, incluso a costa de la paz, se pronuncia el 32% de los europeos.

La encuesta se realizó en nueve países de la UE. El mayor número de partidarios de un rápido final del conflicto vive en Austria: el 64% de los encuestados estaba a favor. El 60% de los alemanes también quieren que la lucha termine lo más rápido posible. Al 54% de los habitantes de Grecia, al 50% de los ciudadanos de Italia, al 50% de la población de España y al 41% de los portugueses les gustaría lo mismo. El menor número de partidarios de tal idea se encuentra en los Países Bajos y Polonia: 27% y 28%.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Rafael Poch de Feliu

Una demencia europea

Hace treinta años Alemania se reunificó gracias al buen sentido y a la generosidad de Moscú. Treinta años después, los hijos políticos de Helmut Kohl y nietos de quienes invadieron la URSS en 1941 están debatiendo el envío de tanques alemanes a luchar contra Rusia. Y el combate será en Ucrania, uno de los principales escenarios de la gran matanza desencadenada entonces por Alemania.

Leopard se llaman ahora esos tanques que marcharán sobre las roderas dejadas años atrás por aquellos Tiger y Panther, sobre los huesos de más de veinte millones de “subhumanos” (*Untermenschen*) soviéticos. Si aquel octubre de 1990, en medio de los fastos de la reunificación, alguien hubiera dicho que, en una generación, tanques alemanes volverían a pisar esa tierra, le habrían tomado por demente. Pero eso es, precisamente, lo que va a decidirse el 20 de enero en la base de Ramstein (Alemania), donde se reunirá el llamado Grupo de contacto de Ucrania, bajo la batuta de Estados Unidos.

Como los *Leopard* son alemanes, el Gobierno alemán es quien decide si los tanques que en su día vendió a sus socios europeos pueden transferirse o no a Ucrania. “Denegarlos sería un acto inamistoso tanto hacia Polonia como hacia Ucrania”, se lee en el diario *Handelsblatt*.

Verdes y liberales de la coalición de gobierno exigen la luz verde al envío de tanques. La presión política, mediática e internacional es intensa e irresistible para el timorato canciller socialdemócrata, Olaf Scholz.

“La conducta rusa en la guerra se parece en muchos lugares a la guerra de aniquilación de las SS y la Wehrmacht contra la Unión Soviética”, dice el político verde Jürgen Trittin. “Es una guerra de aniquilación como la practicada por la Alemania hitleriana sobre suelo soviético y especialmente ucraniano entre 1941 y 1944”, coincide su colega democristiano Roderich Kiesewetter. Los lobistas de las empresas de armas están desatados. El exembajador y expresidente de la Conferencia de Seguridad de Múnich, Wolfgang Ischinger, uno de los más notorios, pide organizar una “economía de guerra” en Alemania.

“Ucrania dispara tanta munición en un día como la que producimos aquí en medio año, hay que tomar la iniciativa y pedir a las empresas europeas de armamento que produzcan más armas y municiones, no se trata solo de suministrar tanques, se trata de munición para artillería, misiles, drones, sistemas de defensa antiaérea y mucho más, pero necesitamos prioridades políticas para que la industria tenga directrices”, dice.

Lo exige también el Parlamento Europeo que, a iniciativa de los verdes, pide a Scholz la creación de un consorcio de países que disponen de Leopard en sus ejércitos para enviarlos a Ucrania. “Lo piden Finlandia y Polonia”, explica el eurodiputado verde Reinhardt Bütikofer, y no se trata de mandar unos pocos tanques, sino de “un apoyo a Ucrania que determine un cambio cualitativo de la situación en el campo de batalla”.

El Parlamento Europeo, que el 6 de octubre ya pidió el envío de tanques pesados a Ucrania,

exige, simple y llanamente, una victoriosa batalla de tanques contra Rusia en Ucrania. ¿Los hijos de Kohl y nietos de quienes fueron derrotados en Stalingrado, que conforman el gobierno de coalición alemán, mandando de nuevo tanques a disparar contra los rusos? Esta gente ha perdido toda memoria y medida. Punto final y definitivo a la responsabilidad histórica de Alemania. Pero hay algo aún más grave.

Lo que se está abriendo paso en Europa es una pura demencia. ¿Se han vuelto locos? Para comprender la pregunta es necesario explicar el “plan de batalla” histórico de la OTAN en Europa durante la Guerra Fría.

Como la URSS tenía superioridad numérica convencional, el plan soviético en caso de guerra era “llegar al paso de Calais en 48 horas” con una masiva oleada de tanques de las tropas del Pacto de Varsovia estacionadas en primera línea. Para frenar eso y dar tiempo a que los americanos desembarcaran sus refuerzos en el continente, el plan occidental era utilizar las armas nucleares tácticas contra la masa blindada del adversario. Dichas armas fueron inventadas por Estados Unidos a finales de los años cincuenta, primero como bombas nucleares y más tarde como munición nuclear de artillería y misiles, y desplegadas en Europa. Moscú siguió aquella estela, siempre con retraso, de la misma forma en que haría con otros inventos americanos (el misil intercontinental, los submarinos y la aviación estratégica, los misiles con cabezas múltiples, la militarización del espacio, etc.) y hoy tiene unas 1.900 armas nucleares tácticas. ¿Qué haría Rusia si se ve desbordada por la gran ola victoriosa de modernos tanques occidentales que exige lanzar contra ella el Parlamento europeo? Con su habitual cinismo, los comentaristas y expertos que desfilan por la tele rusa no se esconden: si se limitan a enviar unas decenas de tanques, la medida será anecdótica, pero si el suministro fuera masivo, Rusia hará lo mismo que los occidentales planeaban para evitar ser arrollados por los tanques del Pacto de Varsovia durante la Guerra Fría, dicen. Con tanques alemanes disparando de nuevo contra rusos, se confirmaría, además, la dudosa analogía histórica manejada por el Kremlin, una nueva “gran guerra patriótica” con la que la élite rusa galvaniza a su población. ¿Se entiende en Occidente lo que todo esto significa?

El presidente Biden descartaba en marzo, por ese motivo, cualquier suministro a Ucrania de armas ofensivas. “La idea de que vayamos a enviar equipo ofensivo a Ucrania, con aviones y tanques, pilotos y tripulaciones americanas se llama tercera guerra mundial”, [dijo entonces](#). En mayo, el mismo Biden escribía en The New York Times que “no estamos animando o posibilitando a Ucrania para que ataque más allá de sus fronteras”. Y todavía en junio el presidente francés, Emmanuel Macron, confirmaba: “No vamos a entrar en guerra, así que hemos decidido no suministrar ciertas armas, entre ellas aviones de caza o tanques”. Siete meses después la situación ha cambiado radicalmente: “No estamos diciendo a Kiev: ‘No ataques a los rusos’ (fuera de tu territorio)”, ponía el Times de Londres en boca de un portavoz del Gobierno americano. De momento van a enviar tanques, luego, ¿por qué no?, aviones y misiles, y al final soldados, dice la diputada alemana de Die Linke, Sevim Dagdelen, según la cual “el envío de armas es el tíquet de entrada en la guerra, el billete para la tercera guerra mundial”.

Para que Ucrania “gane” esta guerra y recupere Crimea, hace falta que la OTAN entre en guerra. Eso es precisamente lo que quiere el gobierno de Kiev, y los polacos, y los bálticos.

“Los ucranianos no quieren ningún alto el fuego, eso solo fortalece a los rusos, el envío de

modernos sistemas de misiles y tanques es la precondition para un armisticio”, escribe la diputada ucraniana Inna Sovsun, en una columna de *Die Welt*. Los lobistas del negocio de las armas le quitan hierro al asunto: “Al suministrar tanques a una nación atacada, nadie se convierte en partcipe de la guerra; según el derecho internacional [...] el miedo a los riesgos de escalada no debe convertirse en una especie de temerosa autodisuasión”, dice Ischinger. El exembajador alemán y lobista de la industria militar no cree que sea necesario integrar a Ucrania en la OTAN. Con la ayuda militar occidental que ha venido recibiendo, “especialmente de Estados Unidos y del Reino Unido desde 2014, Ucrania será, con mucho, la potencia militar mejor entrenada, mejor equipada y más fuerte de Europa”, pronostica. “Ucrania está bien encaminada en ese sentido”, constata. Pero, ¿va a consentir Rusia eso? ¿Se va a conformar, no ya Putin sino cualquier dirigente ruso, con la perspectiva de tener una Ucrania convertida por Occidente en “la potencia militar más fuerte de Europa” y enfocada contra ella junto a su frontera? ¿No justificó su invasión de Ucrania el año pasado alegando precisamente eso?

Mientras, nadie habla de negociación, el mensaje de que no hay que tenerle miedo a la escalada, e incluso de que esta es la ruta hacia la paz, se abre paso con demencial vigor. “La mejor manera de evitar la confrontación con Rusia en el futuro es ayudar a Ucrania a rechazar ahora al invasor”, coinciden el exsecretario de Defensa Robert Gates y la exsecretaria de Estado Condoleezza Rice, en su tribuna en *The Washington Post* del 8 de enero.

Erich Vad es un exgeneral de brigada que, entre 2006 y 2013, fue asesor de política militar de la canciller alemana Angela Merkel. En una entrevista publicada por la revista alemana [Emma](#) el 16 de enero, este militar acérrimo atlantista decía lo siguiente:

“En el este de Ucrania, en la zona de Bajmut [Artiómovsk era su nombre soviético, que el gobierno de Kiev canceló, por [“Artiom” Sergeyeu](#), líder bolchevique y fundador de la República Soviética de Donetsk durante la guerra civil contra los blancos y los atamanes ucranianos apoyados por los extranjeros], los rusos avanzan claramente. Probablemente habrán conquistado completamente el Dombás en poco tiempo. Sólo hay que tener en cuenta la superioridad numérica de los rusos sobre Ucrania. Rusia puede movilizar hasta dos millones de reservistas. Occidente puede enviar cien blindados Marder y cien Leopard. No cambiarán la situación militar general. Y la cuestión más importante es cómo superar un conflicto de este tipo contra una potencia nuclear —por cierto, ¡la potencia nuclear más fuerte del mundo!— sin entrar en una tercera guerra mundial. Y eso es exactamente lo que los políticos y periodistas de Alemania no están pensando”.

[Fuente: [Ctxf](#)]

Tica Font

¿Tanques para la paz?

El debate de estos días parece centrarse en los tanques Leopard de patente alemana. Se nos vende la idea que estos tanques son imprescindibles para que Ucrania pueda ganar la guerra a Rusia: parece ser que hay consenso político entre los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y de la Unión Europea que sin esos tanques no habrá victoria.

¿De verdad alguien cree que esta guerra acabará en victoria o derrota? Hace décadas que las guerras se acaban con acuerdos de alto el fuego y acuerdos de paz; las guerras ya no acaban en victorias militares. Esta guerra acabará en acuerdos, primero con un alto el fuego y luego con unos acuerdos de paz. Unos pactos que irán más allá de Rusia y Ucrania, estos acuerdos tendrán que estar refrendados por Estados Unidos, Reino Unido, la Unión Europea, la OTAN y también China. El trabajo importante y urgente que llevar a cabo es iniciar negociaciones, plantear salidas airoas a todos los ciudadanos de Rusia y Ucrania, que todos ganen alguna cosa y que todos cedan alguna otra. Eso es lo más urgente para acabar con el desastre de la guerra.

¿Alguien cree que gracias a estos tanques se derrotará a Rusia? Los medios de comunicación nos dicen eso: «sin tanques Leopard no habrá victoria». Nos dicen que el gobierno de Zelenski necesita tanques para vencer militarmente al ejército ruso, nos dicen que gracias a los tanques Leopard la guerra puede ganarla Zelenski. Afirmación muy especulativa. Los tanques fueron un arma innovadora durante la Segunda Guerra Mundial: podían cruzar las trincheras y avanzar sin ser vulnerables a las armas existentes en aquel momento. Los tanques actuales son muy distintos. Cada modelo presenta blindajes mayores, pero estos tanques también tienen vulnerabilidades: pueden ser atacados por drones en la parte superior, la parte más débil; deben ir acompañados de despliegues de avanzadilla y otros vehículos laterales aún más vulnerables. Por otra parte, los militares ucranianos necesitan formación y adiestramiento en su uso, en las tecnologías con las que están dotados y en su mantenimiento. Si estos tanques tendrán o no un papel relevante en el devenir de la guerra lo sabremos pasados unos años: veremos qué armas han sido más eficientes, si los tanques o los drones o misiles con inteligencia artificial.

El gobierno Zelenski pide que se le manden un mínimo de 300 tanques, pues el frente de batalla es muy extenso. De momento Alemania mandará unos 14, Reino Unido mandará otros 14 del modelo Challenger 2 y Estados Unidos un número similar del modelo Abrams. España ha anunciado que mandará no sabemos cuántos y se supone que Polonia y los países bálticos mandaran más Leopard. De momento no parece que vayan a llegar tantos como pide Zelenski. En segundo lugar, llegarán modelos distintos y los militares ucranianos no están familiarizados en su manejo. De los que España mandará parece ser que son modelos Leopard antiguos, comprados de segunda mano a Alemania, que ya están en desuso (dígase que están para desguace); por eso la ministra Robles dice que hay que hacer una puesta a punto para que puedan funcionar. Con ello el Ministerio de Defensa hace limpieza de material militar obsoleto y de paso pasa la factura a la Unión Europea para que lo pague de los Fondos Europeos para la Paz. Finalmente, parece que llegarán entre primavera y otoño de 2023. Ergo, parece ser que todos creen que la guerra se alarga todo este año.

De momento es dudosa la utilidad de estos tanques, por número y por dificultad tecnológica de uso. Pero hay que añadir otro riesgo: que estas armas, que son de carácter ofensivo, pueden ser interpretadas como una injerencia de la OTAN en la guerra, como que la OTAN se involucra en el combate y por tanto que Putin decidiera ampliar los ataques a territorios de fuera de Ucrania. En otro orden de consideración, cabe reparar en que Rusia es nuestro vecino y acabada la guerra será conveniente restablecer relaciones de vecindad.

La última consideración es de carácter simbólico. La población rusa fue la que más víctimas tuvo durante la Segunda Guerra Mundial: entre 27 y 37 millones de personas. En el recuerdo de la población rusa está muy presente el ataque alemán. Estos tanques Leopard, en el imaginario social, representan que Alemania ataca nuevamente a Rusia. ¿Alguien cree que Putin no utilizará esos resortes en forma de publicidad a su favor?

¿Por qué apostamos tan fuertemente por las armas y no por el diálogo y la diplomacia? Los tanques no construyen paz, solamente comportan destrucción y muerte.

[Fuente: [Público](#). Tica Font es miembro del [Centre Delàs](#) y [WILPF España](#)]

Jayro Sánchez López

«La Unión Europea ha errado el cálculo tanto o más que Putin»

Entrevista a Rafael Poch de Feliu

Hace casi un año que Rusia invadió Ucrania, pero los expertos en relaciones internacionales afirmáis que el conflicto entre estos dos países se originó mucho antes. ¿Dónde situarías tú su inicio?

En el cierre en falso de la Guerra Fría (1947-1991). A principios de los años 1990, se pactó que la retirada soviética del espacio centroeuropeo, la disolución del Pacto de Varsovia y la reunificación alemana acabarían con la lógica de bloques militares en Europa. También se acordó que estos movimientos no serían aprovechados por el bloque liderado por EE. UU. para ampliarse, pero eso mismo fue lo que ocurrió a lo largo de los 25 años siguientes.

En lugar de la 'seguridad continental integrada' concebida en la Carta de París para una Nueva Europa (1990), se creó un modelo de seguridad europea que primero no contó con la nueva República rusa y que luego llegó a volverse contra ella. La Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) no se disolvió, y hoy se encuentra junto a las fronteras de este país, creando las tensiones que justifican su propia existencia.

Es obvio que las responsabilidades de este disparate se deben repartir entre todos los protagonistas, pero la principal es de Estados Unidos, que en ningún momento ha querido perder su dominio político-militar en Europa porque ese hecho perjudicaría su imagen de potencia global. El segundo actor de relevancia sería la Unión Europea (UE) 'germanocéntrica', que se ha mostrado analfabeta e impotente a nivel geopolítico en relación con esta cuestión.

Y, en tercer lugar, se debería señalar a los tres últimos dirigentes rusos: Gorbachov confió demasiado en la buena voluntad de sus interlocutores; Yeltsin se centró en la privatización del patrimonio nacional por encima de cualquier otro asunto; y Putin ha chocado con Occidente, que preveía para Rusia un papel subordinado y subalterno en el nuevo orden, al empezar a velar por los intereses de la nación que gobierna.

Por lo que dices, estas son las causas de fondo de la actual guerra de Ucrania. ¿En qué momento se trasladó al interior de Ucrania?

Durante el invierno de 2014, en el que Kiev vivió un cambio de régimen al que los rusos respondieron con la anexión de Crimea. Desde esa fecha, aquel cierre en falso del que hablaba antes se dirime por la vía militar.

El Ejército ucraniano, que en ese momento era una birria, ha sido armado y financiado con intensidad por la OTAN desde entonces. Los miembros de la Alianza le marcaron los objetivos de: derrotar a los soldados de Putin, recuperar Crimea e imponer por la fuerza una narrativa nacional antirrusa a la mayoría de la población ucraniana rusoparlante. Y esta última, como es evidente, no lo aceptó, por lo cual se inició una guerra civil en el este del país ese mismo verano.

La historia es larga y compleja, y está repleta de sombras en ambos bandos. Sin embargo, lo que nos explican es un guion de Hollywood escrito para un público infantil. Esta es su versión resumida: en Rusia hay un zar malo que quiere recrear la URSS a costa de la 'Europa de los valores', la que combate por la causa de la democracia en contra de la autocracia rusa.

Los relatos sobre la guerra de Ucrania tienen tres claros protagonistas: Vladímir Putin, Joe Biden y Volodímir Zelenski. El retrato de cada uno de ellos cambia en función de su autor. Según tu opinión, ¿cuáles son los papeles que juegan en esta historia?

En general, las personalidades cuentan poco. Esa es otra característica de la narración con la que nos alimentan. Putin y su régimen autocrático estaban de capa caída en 2021. Su reforma neoliberal de las pensiones había provocado grandes protestas, y su entorno geográfico, desde Bielorrusia hasta Kazajistán, estaba viviendo revueltas sociales significativas. A estos problemas se sumaba el de que en el sistema político de Rusia se desconocen la rotación electoral y el principio de división de poderes, lo que ha generado descontento durante años entre su población.

Una corta guerra victoriosa les habría dado un respiro a los dirigentes del Kremlin, sobre todo si la hubieran podido terminar antes de la ejecución del golpe militar que la OTAN planeaba desde hacía tiempo en Crimea. No obstante, la situación se les ha complicado. No esperaban una reacción tan fuerte de la población ucraniana en defensa de su soberanía, ni tampoco que Washington y la UE apoyaran a esta con decisión.

¿Qué consecuencias han tenido estos dos factores?

El Ejército ruso entró en Ucrania con pocos efectivos y no golpeó con dureza. Su comandante en jefe pensaba que el régimen de Kiev se desmoronaría, pero eso no ha ocurrido. A pesar de ello, la miopía ha sido general, ya que Occidente creía que sus sanciones arruinarían a Rusia, y eso tampoco ha pasado.

La Unión Europea ha errado sus cálculos tanto o más que Putin... La guerra la ha convertido en un vasallo de EE. UU., que hasta ha reventado los gasoductos alemanes del Báltico sin que nadie proteste. Es evidente que Alemania se está cubriendo de gloria con la generación política más incompetente desde la posguerra.

Sigamos con Biden. Con toda su errática senilidad, me parece más coherente: quiere debilitar a Rusia y paliar el lento aunque inexorable declive de su posición geopolítica, que se ve amenazada por el ascenso de un nuevo grupo de actores liderado por China. Doblegar al gigante euroasiático sería importante para los estadounidenses en ese contexto general, pero su situación interna también es confusa e incierta. En realidad, todos los implicados en esta guerra están expuestos a grandes convulsiones.

¿Y qué pasa con Zelenski?

Ucrania es la que tiene los peores números. Su actual presidente ganó un 70% de los votos en las últimas elecciones. Esto se debe a que prometió integrar un país muy dividido por sus identidades regionales y alcanzar un entendimiento con sus poderosos vecinos orientales. Sin embargo, los nacionalistas ucranianos antirrusos y las potencias occidentales le han forzado a endurecer su estrategia política.

El primero de los grupos que acabo de mencionar solo representa a un 30% de la población ucraniana, pero domina las estructuras del Estado desde 2014. Sus sectores más radicales han amenazado al líder del Gobierno con 'colgarle de un árbol' si negocia con los separatistas del este, que están respaldados por Moscú.

Hoy es una estrella mediática, aunque puede llegar el momento en el que Washington decida desplazarle del poder en favor de una junta militar para negociar el fin del conflicto.

Putin ha acusado a los dirigentes de Kiev de amparar a grupos neonazis y de ayudarles a perseguir a ciudadanos ucranianos 'prorrusos' en numerosas ocasiones. ¿Son ciertas estas aseveraciones?

Es evidente que hay una fuerte política de represión en la que se contemplan medidas como la eliminación física de los 'traidores'; es decir, los que no comulgan con la línea gubernamental. La prensa de EE. UU. ha desvelado que episodios de este tipo se han producido en los territorios recuperados por el Ejército ucraniano durante este otoño.

El Ejecutivo ha hecho callar a los kievitas que no compartían sus puntos de vista. Ha ilegalizado sus partidos, ha cerrado sus medios de comunicación y ha hecho desaparecer de la escena a muchos analistas de renombre. Varios opositores del régimen han sido encarcelados o asesinados...

No creo que la situación sea muy diferente de la que se cuenta aquí sobre Rusia. En Ucrania también hay miles de desertores. Más de 12.000 personas han sido detenidas intentando cruzar las fronteras del país de manera ilegal, y eso que comprar una exención militar allí es aún más fácil que en Rusia.

En marzo, más de 400.000 hombres en edad militar que podrían haberse alistado permanecían refugiados en Polonia. Hay muchos individuos a los que no les gusta la idea de morir por su patria. No quieren ser carne de cañón. He de decir que esa gente tiene toda mi simpatía y que debería ser apoyada.

Respecto a los neonazis, es cierto que los ultranacionalistas de Ucrania occidental reivindican abiertamente a los representantes de los antiguos sectores políticos que colaboraron con las fuerzas de Hitler en la Segunda Guerra Mundial (1939-1945) y con la CIA durante la Guerra Fría. Hay centenares de monumentos, calles y recordatorios que los ensalzan en todo el país, aunque muy pocos de ellos se encuentran en los territorios sudorientales.

Se sabe que tienen apoyos entre las unidades militares y los servicios de seguridad, pero hay una gran diferencia entre afirmar esto y calificar al régimen ucraniano de nazi. Lo que pasa es

que los propagandistas rusos están intentando vender ese relato para justificar la invasión. Lo único que podemos asegurar es que el Gobierno ucraniano es neoliberal y prooccidental, y que depende de sus protectores americanos y europeos.

Putin y Zelenski se acusan entre sí de cometer crímenes contra el derecho internacional. Se dice que la masacre perpetrada por las fuerzas invasoras en Bucha o el asesinato de prisioneros rusos por parte de las milicias ucranianas no son hechos aislados. ¿Se están tomando medidas para combatir estos actos?

Desconozco la realidad sobre el terreno y desconfío, por experiencia, de la crónica periodística, que ya nos la jugó en los Balcanes enfatizando los crímenes de un bando y silenciando los de otros grupos. Pero estoy seguro de que ha habido crímenes en Ucrania. La propia invasión rusa lo fue, y todas las circunstancias que la propiciaron y provocaron desde Occidente también lo son.

Lo que ocurre es que este tipo de acciones son consustanciales a toda guerra. En cuanto a las medidas que puedan tomarse, la pregunta clave es: ¿quién las va a juzgar? Porque no hay una 'justicia internacional' creíble.

Desde Afganistán hasta Libia, y pasando por Irak, Yemen, Somalia o Siria, las potencias occidentales han provocado más de 3 millones de muertes y el desplazamiento de unos 40 millones de personas con sus 'intervenciones'. Sociedades enteras han quedado destruidas y varios países han sido arrasados por completo. Esto lo afirman los estudiosos de la Universidad Brown de EE. UU., no yo...

Por lo tanto, deberíamos cuestionarnos si nuestros líderes tienen la autoridad moral para denunciar las barbaridades que los rusos están cometiendo en Ucrania. De momento, la 'justicia' occidental mantiene recluido desde hace diez años al periodista Julian Assange por denunciar los crímenes de los que ellos mismos son responsables, y está haciendo todo lo posible para extraditarlo a EE. UU., donde se le podrá juzgar sin garantías para que le condenen a 150 años de cárcel.

En tu artículo Resignados a una larga guerra, aseguras que el presidente de Brasil, Lula da Silva, es el hombre que podría actuar como intermediario para acordar un alto el fuego y una paz duradera. ¿Por qué?

Lula se diferencia de la línea mantenida por mandatarios como la excanciller de Alemania, Angela Merkel, o el expresidente francés François Hollande, que fueron los principales encargados de negociar el Protocolo de Minsk (2015). Este acuerdo fue supuestamente promovido para poner fin a la lucha entre los ucranianos y los separatistas prorrusos, pero los 'mediadores' reconocieron que no era más que una pantalla para ganar tiempo e ir armando al Ejército de Kiev.

El presidente brasileño sí tiene credibilidad en la verdadera 'comunidad internacional', que no es ese pequeño club de países occidentales que suele arrogarse tal nombre. Él fue el artífice del acuerdo nuclear con Irán, del que EE. UU. se retiró. Como la mayoría de los miembros de la comunidad, Brasil votó en la [Organización de las Naciones Unidas](#) (ONU) contra la invasión rusa de Ucrania y contra las sanciones impuestas a Rusia por Occidente.

Lula sabe que tras el conflicto hay un pulso para eliminar a los rusos y debilitar a China, que son

contrapesos esenciales a Occidente en el escenario mundial. Además, tiene una situación interna muy complicada, y puede catalizarla a través del gran reto exterior que supondría la tarea de mediación y pacificación en Europa.

Por cómo describen los medios de comunicación occidentales la situación, parece que la iniciativa militar está ahora en manos de las fuerzas controladas por Kiev. A pesar de ello, hay ciertos entendidos en la materia que ponen en duda la relevancia de sus últimos ataques. ¿Quién crees que lleva la razón?

No creo que los ucranianos estén ganando la guerra, como afirma nuestra propaganda. Desde el inicio del conflicto, han sufrido 100.000 bajas, una cifra horrible que se le escapó esta semana a la incompetente presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen.

La superioridad artillera e industrial de los rusos es aplastante, y tampoco creo que la contraofensiva ucraniana de otoño fuera tan importante como se vendió en nuestra prensa. Me parece que hubo un repliegue ruso bastante ordenado y que, desde entonces, los generales de Putin se han replanteado toda su estrategia.

La realidad es que estos han conquistado 100.000 de los 600.000 kilómetros cuadrados que tiene Ucrania. ¿Quiere decir eso que esté ganando? Tampoco. Habrá que ver si hay una ofensiva de invierno rusa y qué resultados tiene, pero mi impresión es que esta es una guerra sin vencedores y que la población ucraniana está pagando una terrible factura por la agresión rusa, la irresponsabilidad de sus propios dirigentes y el aprovechamiento de la situación por parte de Occidente.

Otra cuestión es la de los [refugiados](#). Según el Ministerio del Interior, España ha concedido más de 160.000 protecciones temporales para los que huyen de la guerra. Con 22.963 estatutos tramitados, la Comunidad de Madrid es una de las más implicadas en la acogida. ¿Cuál es la situación en la que se encuentran estas personas?

Lo desconozco.

El periodista Enrique Figueredo explicaba en *La Vanguardia* el pasado 21 de octubre que el dinero y el material bélico que Europa y EE. UU. están enviando a Zelenski no son infinitos. ¿Se forzaría la paz si la industria armamentística cierra sus grifos?

La industria armamentística nunca cerraría un grifo que le da dinero. Los complejos militares-industriales, y en especial el de EE. UU., tienen mucha influencia política y financian los principales laboratorios de ideas del mundo, que, por cierto, son las fuentes primordiales de los periodistas cuando hablan de esta clase de asuntos.

Además, la paz es difícil porque nadie puede perder su imagen de vencedor. Para Rusia, todo lo que no sea mantener Crimea, el Dombás, Zaporíyia y Jersón, que son las regiones que ha conquistado en Ucrania, será visto como un fracaso. Y este significaría para el Kremlin el riesgo de que su régimen quebrara, como ya ocurrió en 1905, con la derrota en la guerra ruso-japonesa, o en 1917, con la debacle militar de la Primera Guerra Mundial (1914-1918). El grupo dirigente ruso luchará hasta el final para evitar ese escenario.

Por otro lado, todo lo que se parezca a una victoria rusa es inaceptable para EE. UU., pues evidenciaría su debilidad. La Unión Europea cuenta muy poco, aunque algunos de sus miembros, como Polonia o los países bálticos, serían capaces de actuar en cualquier loca empresa militar si Washington decidiera darles luz verde.

La situación es muy peligrosa. En el mejor de los casos, podría transformarse en un conflicto congelado. En el peor, hay un riesgo nuclear evidente.

Rusia y China han colaborado de una forma cada vez más estrecha durante los últimos años para batir al enemigo común. Sin embargo, también han tenido problemas entre ellas en el pasado reciente. ¿Hasta qué grado están dispuestas a cooperar entre sí?

El acercamiento entre Moscú y Pekín ha sido forjado por la común política de hostilidad ejercida contra ellos desde Washington. A principios de siglo, al inicio del mandato de Putin, y con Jiang Zemin controlando el Gobierno chino, ambos países preferían un entendimiento por separado con EE. UU. a la actual alianza.

Pero las dos han sido rodeadas desde hace tiempo por cinturones de infraestructuras militares hostiles, y también se las ha presionado en el terreno económico con dureza. El maltrato común es lo que las ha unido. Una política más hábil de Washington habría intentado ganarse a Rusia contra China, pero para eso tendrían que haberse reconocido los intereses rusos en Eurasia y debería haberse explotado la desconfianza mutua entre ambos países.

Hoy en día, los rusos ya son demasiado importantes para los chinos. Y la guerra de Ucrania les ha acercado aún más. Occidente no solo no ha conseguido que Beijing se sume a las sanciones contra Rusia, sino que ha logrado el incremento de las relaciones comerciales y políticas entre Moscú y Pekín. El presidente Xi entiende que, si Rusia cae, China será objeto de presiones económicas y militares reconcentradas.

La política de EE. UU. hacia Taiwán, que es cada vez más beligerante, sugiere una analogía china con la guerra ucraniana. Así que tanto Putin como el líder del Partido Comunista chino mantienen el propósito común de desvincularse de forma paulatina del dólar y de la tecnología occidental. A su vez, estos elementos se les niegan desde Occidente a través de embargos y sanciones.

EE. UU. y la UE están respaldando a Ucrania contra Rusia en Europa, pero tampoco pierden de vista el Lejano Oriente. Como decías antes, contemplan a China como una seria amenaza...

China es la única potencia que tiene un plan alternativo de futuro para el mundo. Este se basa en la integración euroasiática, desde Shanghái hasta Lisboa. EE. UU. está ausente en esa gran masa continental en términos geográficos. Por eso, romper ese propósito es un eje fundamental de la política de Washington. La guerra de Ucrania también debe ser contemplada desde ese punto de vista. La división de Europa a través del río Dniéper rompe los canales de transporte comercial y energético que Pekín está trazando en su propósito integrador.

El atentado contra los gasoductos germano-rusos del Báltico, de obvia autoría norteamericana,

es el suceso que mejor retrata la situación. Europa está siendo implicada, a través de la OTAN, en un conflicto con quienes eran sus principales socios energéticos (Rusia) y comercial (China). La estupidez estratégica de la Unión Europea germanocéntrica es inaudita.

Respecto a la 'amenaza china', me parece un mito. No creo que este país se proponga 'dominar el mundo'. El problema es que su dinámico fortalecimiento amenaza a quienes lo han hecho los últimos doscientos años. Los occidentales solo conciben un mundo de conflicto, de ganadores y perdedores, dominantes y dominados...

Pero si queremos que nuestro mundo tenga futuro, es imperativo cambiar esa mentalidad y cooperar para afrontar los retos del siglo: el calentamiento global, la desigualdad social y regional, la superpoblación y la proliferación de recursos de destrucción masiva. Puede que un ocaso occidental y un mayor peso de China en el mundo mejoren algo las cosas para ese necesario cambio de mentalidad, aunque nada es seguro.

El 'gigante' asiático lleva décadas reclamando a la comunidad internacional su derecho de soberanía sobre la isla de Taiwán. ¿Crees que la entrada de Putin en Ucrania puede tentar a Xi Jinping para recuperar la llave que cierra sus costas continentales al mar de la China Meridional y al mar de la China Oriental?

No es que Pekín reclame, sino que la ONU, y hasta EE. UU. y la UE, reconocen que Taiwán forma parte del país mediante el famoso 'principio de una sola China'. Por eso Taiwán no es miembro de la ONU ni está considerado como una nación. Washington y Beijing restablecieron sus relaciones sobre ese principio, pero, en los últimos años, el primero está dando pasos que ponen en cuestión aquel consenso establecido en la década de 1970. Eso da lugar a tensiones militares en la zona.

Cada mes o mes y medio, hay contacto directo entre unidades navales y aéreas chinas y estadounidenses en el mar de la China Meridional. Es una provocación constante contra China. Y es peligrosa porque, aunque nadie lo desee, es fácil que un incidente degenera en conflicto. Dicho esto, no creo que China vaya a iniciar una invasión similar a la de Ucrania. Su política tiene mucha mayor calidad que la de Rusia.

Parece que ha habido movimientos muy importantes en el orden internacional durante la última década. A España le afecta en especial la polémica cuestión que rodea al Sáhara Occidental, Marruecos y Argelia. ¿A qué responde la aceptación del plan de autonomía marroquí por el presidente Sánchez?

Para mí es inexplicable, a menos que EE. UU. haya presionado a Sánchez de una forma inapelable. Sin eso, resulta incomprensible la torpeza que significa deteriorar las relaciones con Argelia, ya que dependemos de ella en materia energética. Y eso sin mencionar la parte moral del asunto, pues hemos abandonado a los saharauis.

[Fuente: [El Resurgir de Madrid](#)]

De otras fuentes

Vicente López

No habrá transición ecológica sin transición social y laboral

Hay que cambiar el modelo energético. Pero es más urgente si cabe una transformación que aborde la limitación de la riqueza, el consumo y el necesario reparto del trabajo.

* * *

En estos momentos prácticamente nadie duda de la necesidad de una transición ecológica. A modo de ejemplo, el CIS de abril de 2022 nos señalaba que al 81,1% de la población española le preocupaba mucho el cambio climático. El negacionismo en materia medioambiental, aunque existente, parece estar en franca retirada frente a la apabullante evidencia de los efectos negativos que tiene nuestra forma de vivir sobre la naturaleza.

Existen, eso sí, discrepancias políticas sobre cómo y con qué intensidad hay que abordar las actuaciones en materia medioambiental, en especial en materia energética. La razón es bien sencilla: se es muy consciente de las consecuencias que pueden tener estas medidas sobre el crecimiento económico y por lo tanto sobre el nivel de empleo, y también sobre la distribución del ingreso. La escalada de precios que estamos viviendo, cuyo origen viene determinado, entre otros, por los precios de la energía, de materias primas y los problemas en las cadenas de suministros, están acarreado un proceso de pauperización de la mayor parte de la población, especialmente de los y las trabajadoras, mientras aumentan sin control los márgenes empresariales. La respuesta de las autoridades monetarias, en cambio, ha sido un aumento de los tipos de interés que generará más desempleo y mayor desigualdad social. Puede ser un buen ejemplo de lo que puede ocurrir en estos procesos de transición ecológica si se continúa bajo las recetas de la ortodoxia económica.

Grosso modo, para las opciones políticas que se sitúan en el entorno de la derecha más o menos extrema, la transición debe atemperarse al ritmo que marque el mercado. Todo indicaría que se está pasando del “negacionismo” inconsistente, a un cierto “retardismo” posibilista. Desde esta perspectiva ideológica el objetivo de sus políticas sigue siendo el mismo: crear las bases macroeconómicas que establece el pensamiento económico neoclásico para mantener el crecimiento del PIB y la acumulación de capital. Se deja al “libre” mercado la tarea de atemperar tanto los ritmos posibles de la transición ecológica (la sostenibilidad no puede poner en peligro la eficiencia) como la tarea redistributiva (la equidad que no puede poner en peligro la eficiencia). Más mercado y menos regulación e intervención pública, excepto para asegurar, sea al precio que sea, la propiedad privada, la dinámica que marquen los mercados y con ello el *statu quo* existente en materia distributiva.

Esto significa políticas de aumento de tipos de interés para frenar la inflación, el control del gasto público en un marco de reducción de impuestos y la desregulación del mercado laboral: peores condiciones de trabajo, más desigualdad y pobreza y, por supuesto, dinamizar la concentración de riqueza. Un camino que algunos han advertido de que puede ser la antesala del llamado “ecofascismo”. Y todo ello, eso sí, aderezado con una fe ciega en la acumulación de

conocimiento científico-técnico, la “ciencia proveerá”, que se convierte en el garante de que pase lo que pase, algo inventaremos.

Para aquellas opciones que se encuentran en el entorno del social-liberalismo (donde se situaría la socialdemocracia actual, la democracia cristiana, e incluso otras opciones más progresistas), la transición hacia una economía sostenible debe ser dinamizada, empujada, por los poderes públicos. Es una tarea urgente y el mercado, aunque esencial, no basta para tal empresa. Los efectos negativos más que previsibles de la transición ecológica en el ámbito sociolaboral quedan circunscritos a las políticas que se enmarcan en la llamada “transición justa”: nadie debe quedarse atrás. Eso sí, no se define de forma muy concreta en términos de acción política qué abarca el término “justa” y lo que conlleva quedarse o no atrás. Más bien al contrario, esta indefinición da paso en la práctica a la asunción por parte de los poderes públicos de cierto crecimiento asumible en los niveles de desempleo, de desigualdad social y de pobreza. Esta opción, al contrario de la anterior, no ve contradicciones insalvables entre sostenibilidad, eficiencia y equidad. Y si las ve, las relativiza.

Recordemos que esta perspectiva no solo no ve incoherencias en el binomio clásico eficiencia-equidad, sino que incluso considera que la equidad es la base para un crecimiento económico inclusivo. Esto solo se ha dado a nivel de Estados-nación en momentos históricos muy concretos. Los datos generales, globales, hablan, sin embargo, del aumento de la pobreza relativa, las desigualdades sociales y la extensión de los llamados “trabajadores y trabajadoras pobres” o de la “esclavitud moderna”. La perspectiva nacional, como señala Amartya Sen, no es un buen indicador de justicia social en un mundo globalizado. Eso sí, al igual que las opciones conservadoras, también esta opción tiene plena confianza en que el binomio ciencia-tecnología dinamizará este cambio y el soñado equilibrio entre eficiencia-equidad-sostenibilidad. Se mantiene por lo tanto la sentencia “la ciencia proveerá”.

Pero si algo parece evidente es que el éxito o fracaso sociopolítico de esta transición, más o menos intensa, liberal o planificada, hacia el oxímoron “crecimiento justo y sostenible”, dependerá de que esta mantenga el crecimiento del PIB y con él, el dinámico “goteo hacia abajo” que legitima socialmente a la economía de mercado. Aquello de que la tarta siga creciendo para después repartirla, sin anticipar, eso sí, el cómo se reparte.

El aumento en la producción de bienes y servicios, matizado por la evolución de la productividad, continúa por lo tanto siendo el objeto prioritario; y el volumen de empleo y la (re)distribución de la renta, un objetivo secundario. De final de tubería. La participación de las rentas salariales en el reparto de la renta seguirá dependiendo de cuestiones (p)redistributivas: el mayor o menor poder de negociación de los y las trabajadoras (salario directo) y el desarrollo o no del papel del Estado en la economía, tanto desde la óptica del ingreso como del gasto público (salario indirecto y diferido).

Pero la evolución de las variables que visibilizan el estado de la equidad a nivel global no dan, como hemos señalado, síntomas de buena salud: los sindicatos pierden poder de negociación —el alto nivel de desempleo, el aumento de la precariedad laboral, los procesos de subcontratación, la mercantilización e individualización del trabajo... son las principales armas que se utilizan para debilitar el movimiento sindical por parte del poder económico—, lo que conlleva un aumento de la capacidad de extracción de plusvalía por parte de las y los

empresarios —la pérdida de participación de las rentas salariales en la renta nacional a lo largo del último medio siglo en los países occidentales así lo atestiguan—; se continúa la disminución de impuestos a las rentas más altas —menor equidad fiscal tanto en términos verticales, progresividad, como horizontales, fuentes de renta—, y se deteriora por diversas vías (privatización, limitación) el gasto social. El Estado del bienestar, en aquellos países donde tal cosa existía, se está convirtiendo en un Estado de caridad para las personas pobres, en un pobre Estado del bienestar. Parece que no va muy mal desencaminado Warren Buffet cuando señala que su clase social está ganando la guerra de clases.

Siempre podemos encontrar alguna excepción que confirme la regla, sobre todo desde el pragmatismo político. Pero esta siempre es accidental y frágil. O al menos da esa sensación. Creo que no sería una necedad resaltar, con los datos que conocemos, que la equidad pierde por goleada contra la eficiencia. En las últimas décadas el “goteo hacia abajo” no solo se ha interrumpido en las reiteradas crisis de acumulación del capital (donde el objetivo político es recuperar la tasa de beneficios a cambio de mayor explotación laboral), sino que también lo está haciendo, y cada vez de forma más intensa, en las etapas de expansión. Estamos viviendo cada vez con mayor claridad un permanente “goteo hacia arriba” tanto en términos nacionales como, sobre todo, a escala global.

Del mismo modo, los datos respecto al estado de salud del medio ambiente son, si cabe, menos esperanzadores. La emisión de gases de efecto invernadero (cambio climático), la extinción de especies (sexta extinción), el deterioro de suelos fértiles o de los océanos y mares, la contaminación de acuíferos, la creciente deforestación a nivel planetario, o la propia “escasez” de materias primas (tanto energéticas como minerales), nos señala no solo el fracaso clamoroso de las Cumbres del Clima o de las políticas de “desarrollo sostenible” que la mayor parte de países occidentales han puesto en marcha en las últimas décadas, sino, sobre todo, los evidentes límites físicos, biológicos y energéticos que tiene el crecimiento económico. La relación entre sostenibilidad y eficiencia no funciona, nunca ha funcionado.

El problema principal es, por lo tanto, que el aumento de la eficiencia económica (mayor volumen de producción y servicios en relación al consumo de recursos) que necesita el sistema capitalista para sobrevivir conlleva un continuo deterioro medioambiental (la naturaleza como fuente de recursos y sumidero de residuos) y un aumento de la precariedad laboral, de la vulnerabilidad e inseguridad laboral en la que vive la clase trabajadora y que es fuente de desigualdades y pobreza. La insostenibilidad y la inequidad parecen estar íntimamente relacionadas.

La fuerza de trabajo que necesita el sistema socioeconómico (tanto el visibilizado trabajo productivo como el invisibilizado trabajo reproductivo) no deja de ser una energía más, junto con otras fuentes de energía y materiales. Su demanda, como la del resto de recursos, es una demanda derivada que depende, por lo tanto, del volumen de producción de bienes y servicios. Hasta aquí no hay mucha diferencia entre extraer un barril de Brent o el trabajo efectivo de una persona. Eso sí, a diferencia de otros recursos productivos, el proceso de extracción de trabajo efectivo tiene una peculiaridad: los y las trabajadoras tienen voluntad. Su extracción por lo tanto conlleva conflicto, tensión social. De ahí que uno de los objetivos básicos del sistema socioeconómico haya sido, y es, entrenar cuerpos sanos y, sobre todo, disciplinar la mente humana para obtener el mayor rendimiento posible. Hoy, como señala Byung-Chul Han, una parte nada desdeñable de trabajadores y trabajadoras ya no necesitan medidas disciplinarias

externas: se autoexplotan “felizmente” en un entorno de falsa creencia de libertad y autenticidad. Pero este éxito en la domesticación no solo implica a las personas como mano de obra, como *ganado laboral*, sino también como *ganado consumidor*: personas que, como señalaba Bauman, están deseosas de consumir. Y en esto consiste el *American way of life* que se ha impuesto como forma de vida en el planeta: trabajar para obtener el ingreso suficiente para consumir bienes y servicios, para consumir energía, materia y fuerza de trabajo. Para consumir, desechar y volver a consumir.

El sistema, y este es su gran éxito, produce un ejército de *homo oeconomicus* que rezuma por todos sus poros individualismo, egoísmo y una idea de progreso y felicidad íntimamente ligada al consumismo y la acumulación ilimitada de riqueza material. Este ejército de mentes y cuerpos domados por la escuela, los medios de comunicación de masas o la industria del entretenimiento, mantiene en estado de buena salud el binomio producción-consumo. Un ejército de productores-consumidores que dan vida, a través del voto en aquellas sociedades con democracias liberales, a aquellas opciones políticas que aseguran el crecimiento económico y con él, el deterioro medioambiental y una distribución de la riqueza que asegura la desigualdad económica y social en base a la falacia de la igualdad de oportunidades y el mecanismo meritocrático. No olvidemos, para aquellos que ven una contradicción entre lo que necesitan y votan los y las trabajadoras, que si no se asegura una extracción de materias primas y energía suficiente, y mayores facilidades para la apropiación de plusvalía, el empleo productivo se resiente. Y con menor nivel de empleo se endurece el acceso a ese goteo hacia abajo al que hacíamos referencia, que nos permite acceder al venerado mercado de consumo global, fuente de “libertad y felicidad” en este sistema socioeconómico. Sin este *ganado laboral* y *consumidor* y sin la posibilidad de extracción de recursos naturales, el sistema capitalista colapsa.

La transición ecológica, y esta es la grave deficiencia del planteamiento por parte de algunas personas, se presenta únicamente desde la perspectiva de mantener la provisión de materiales y energía para continuar el proceso de acumulación de capital. Si conseguimos energía renovable y la circularidad del proceso económico, el problema se acabó. El objetivo último no cambia: crecimiento de la producción y el consumo, y con él, el nivel de empleo (de la calidad del mismo se habla menos). Pero las energías renovables no aseguran los niveles de energía necesarios para satisfacer los deseos productivos y de consumo tanto presentes como futuros. Entre otras razones, por el déficit de materiales y la necesidad de energías fósiles para su desarrollo. Y por desgracia los procesos productivos no se cierran completamente por culpa de las malditas leyes de la termodinámica. Es imposible.

Y todo ello conduce al más que previsible fracaso de estas políticas más o menos posibilistas. Han fracasado en el pasado y fracasarán en el futuro a pesar de su “buena voluntad”. El capitalismo nunca será garante de mayores niveles de equidad social ni de sostenibilidad. Va contra su esencia *extractivista*. El capitalismo no puede vivir sin explotar a las personas (extracción de plusvalía), ni a la Naturaleza. Y esta obviedad se intenta esconder tras posibilismos políticos imposibles, y tecno-optimismos irreales. En resumen, cuando la eficiencia económica entra por la puerta, en la economía de mercado globalizada, la equidad y la sostenibilidad saltan por la ventana. Hay que elegir políticamente con qué te quedas. No queda otra.

Bajo mi punto de vista, la única opción política viable en términos progresistas es la que pone

como objetivo político prioritario el binomio “equidad” y “sostenibilidad” y desecha al crecimiento económico como fin en sí mismo. En todo caso este sería posible y deseable para algunos consumos vitales que aseguren ciertos niveles de vida de la población mundial. Creo que es evidente que se necesita una expansión de un sistema sanitario universal o el acceso a agua potable a escala global por ejemplo. Pero debe reconocerse como axioma de partida, inapelable, la existencia de límites físicos, energéticos y biológicos al crecimiento económico y, a pesar de la enorme epidemia de “autoexplotados”, límites también urgentes a la explotación de las personas. Porque, además, si limitamos esta extracción de plusvalía estamos poniendo coto a la propia insostenibilidad. Van de la mano.

A partir de aquí, las posibilidades de acción política son menos “sexy” para el pragmatismo y posibilismo político (en minúsculas), pero mucho más claras, restringidas y eficaces si se quiere hacer POLÍTICA (en mayúsculas).

A modo de ejemplo resaltamos algunos puntos que debería incluir un programa centrado en la equidad y la sostenibilidad: en primer lugar, la redistribución de la capacidad de consumo existente bajo criterios de necesidades (capacidades) y sostenibilidad. Nadie puede consumir por encima de lo que la Naturaleza puede soportar, “nadie puede contaminar aunque pague”. En segundo lugar, la puesta en marcha de políticas radicales de reparto del trabajo (y no solo del empleo). En este aspecto es esencial la reducción de la jornada de trabajo y paralelamente la provisión individual o colectiva de bienes básicos por parte de un reforzado sector público, en especial: alimentación, vivienda, sanidad, energía, comunicación y educación. Siempre bajo el paraguas de la sostenibilidad. Esta reducción de la jornada debería realizarse desde la perspectiva redistributiva: recortar los abanicos salariales (incluyendo el de los directivos, claro está). En tercer lugar, y siguiendo esta idea distributiva, es necesario empezar a hablar del establecimiento de límites a la riqueza. Esto supone, por ejemplo, la recuperación de la progresividad y equidad fiscal y caminar hacia tipos impositivos confiscatorios a partir de cierto nivel de ingresos y riqueza. Y, en cuarto lugar, limitaciones a la movilidad del capital, de mercancías y de las personas. Hay que reventar el casino mundial, saltar la banca, y hay que poner freno al poder económico de las transnacionales. Esto supone recuperar el papel del Estado en la economía como garante de la equidad y sostenibilidad.

Estas medidas afectarían muy probablemente al crecimiento económico de forma negativa y con ello a la extracción de trabajo efectivo, energía y materiales. Habría menos riqueza material pero mejor repartida y más sostenible. ¿Sería imposible políticamente? Realmente lo que es imposible, populista y extremista es continuar en esa dependencia de la senda que nos lleva a mayor deterioro medioambiental y sociolaboral. Como señalaba Foucault, es tiempo de *parresía*, de un compromiso con la verdad, aunque tenga a corto plazo un coste político elevado. Es el momento de tener un “discurso valiente” que nos sitúe en la línea de aquellas reformas necesarias que, como señalaba André Gorz, no sean solo “reformistas” sino, sobre todo, revolucionarias.

[Fuente: [Ctxt](#). Vicente López es director de la [Fundación 1.º de Mayo](#)]

Michael Löwy

Eco-decálogo

NB: El autor de estas notas no se cree un nuevo Moisés y no afirma haber recibido este Eco-decálogo de Jehova. Se trata simplemente de un intento de responder, con un punto de ironía, en dos pequeñas páginas, a la pregunta que muchos se hacen hoy en día: ¿Qué hacer? ¿Qué hacer frente a la crisis ecológica y la catástrofe climática?

1. Te tomarás en serio la crisis ecológica. No es un problema entre muchos otros, es *la* cuestión política, económica, social y moral más importante del siglo XXI. Una cuestión de vida o muerte. Nuestra casa común está en llamas. No hay más tiempo que perder. ¿Tienes otras preocupaciones? ¿Te preocupa, con razón, el precio de la gasolina y el gas, y te preocupa erróneamente el gran número de árabes, negros, gitanos, judíos, mexicanos o gays en tu país? Tienes que cambiar de preocupación. La crisis climática es más grave. ¿Mucho más grave? Infinitamente más grave. Se trata de tu supervivencia y/o la de tus hijos y nietos.

2. No adorarás a los ídolos de la religión capitalista: “Economía de Mercado”, “Energías fósiles”, “Crecimiento del PIB”, “Organización Mundial del Comercio”, “Fondo Monetario Internacional”, “Competitividad”, “Pago de la Deuda”, etc. Son falsos dioses, ávidos de sacrificios humanos y responsables del calentamiento global.

3. Actuarás todos los días de acuerdo con los principios ecológicos. Te negarás a viajar en avión en distancias cubiertas por el ferrocarril. Vas a reducir drásticamente tu consumo de carne. Evitarás las trampas del consumismo. Consciente de la interdependencia de todos los seres vivos, actuarás con prudencia y respeto hacia la naturaleza. Pero rechazarás las ilusiones del “colibrismo”: la creencia de que el cambio ecológico resultará de la suma de pequeñas acciones individuales.

4. Apoyarás las acciones colectivas, por ejemplo, cualquier lucha ecológica concreta, en tu país y en el mundo. Dependiendo del caso, elegirás las manifestaciones callejeras, los actos de desobediencia civil, los [ZAD](#), el sabotaje de oleoductos. Participarás o apoyarás a los movimientos, ONG, etc. que luchan por causas ecológicas, favoreciendo a los más radicales.

5. Nunca enfrentarás lo social y lo ecológico. Intentarás, por todos los medios, favorecer la convergencia entre luchas sociales y ecológicas. Actuarás para garantizar puestos de trabajo alternativos a los trabajadores de las empresas contaminantes que tengan que cerrar. Intentarás acercarse a los sindicatos y a los movimientos ecológicos.

6. Aportarás tu solidaridad, militante y/o financiera, a los refugiados climáticos y a las víctimas de desastres ecológicos. Exigirás que se les abran las fronteras de tu país y que los países ricos del norte indemnicen a los países pobres del sur por los daños causados por el cambio climático.

7. Lucharás sin tregua contra los políticos ecocidas y/o climato-negativistas, los Trump, Bolsonaro, Scott Morrison y Cia. Todos los medios son buenos para desalojarlos, derrocarlos, neutralizarlos.

8. Te negarás a apoyar a quienes invocan el nombre de la ecología en vano. Es decir, a los políticos que hacen buenos discursos pero no actúan contra las emisiones y los combustibles fósiles. O que proponen soluciones falsas como los “derechos de emisión”, los “mecanismos de compensación” y otras mistificaciones del capitalismo verde y el *greenwashing*.

9. Llevarás la lucha, por todos los medios, contra las empresas de la oligarquía fósil, es decir, el enorme complejo económico-financiero-político-militar vinculado a las energías fósiles: petróleo, carbón, gas. Lucharás por su expropiación y por la creación de un servicio energético público, decididamente orientado a las energías renovables (solar, eólica, hídrica, etc.) y que pueda ofrecer servicios gratuitos a las capas populares.

10. Sabiendo que el problema es sistémico y que, por lo tanto, no será posible una solución real en los marcos del capitalismo, participarás, de una forma u otra, en los partidos o movimientos que ofrecen alternativas anticapitalistas: ecosocialismo, ecología social, decrecimiento, etc.

[Fuente: [Sin Permiso](#)]

Elena Gerebizza

Las políticas de gas fósil en tiempos de guerra en Europa

La Unión Europea atraviesa uno de los momentos más complejos de la historia reciente del continente. La crisis económica y social poscovid-19, el aumento de los precios del gas y la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa llevan meses sacando a la luz las divisiones internas entre los gobiernos, y los costes de la crisis recaen principalmente en los sectores más débiles de la sociedad. No es tanto la recesión lo que asusta, sino el hecho de que los gobiernos y las instituciones europeas estén lejos de definir políticas a medio y largo plazo centradas en el bienestar de las personas, el medio ambiente y el clima. Por el contrario, la emergencia es el caballo de Troya utilizado para imponer medidas e intervenciones de infraestructura que benefician a la industria fósil, única ganadora —junto con el sector financiero— de otra crisis en la que se regenera el sistema capitalista.

La oportunidad perdida del Plan Europeo de Recuperación y Resiliencia

El plan Next Generation de la UE representa la mayor inyección de dinero público europeo directamente en los presupuestos de los gobiernos en la historia de la UE. Tras la crisis financiera de 2008, los recursos se destinaron a rescatar a los grandes bancos y al sistema financiero internacional, pero en este caso los recursos se distribuyen entre los gobiernos de los Estados miembros, que pueden destinarlos precisamente a la ecologización de la economía. En total, unos buenos 750.000 millones de euros, de los cuales 390.000 millones en subvenciones y 360.000 millones en préstamos que los gobiernos tendrán que devolver. Un proceso iniciado en 2020, que muchos esperaban que fuera la gran oportunidad para empezar a transformar el modelo energético de los países europeos, pero que, en cambio, se ha definido y moldeado a la medida de los intereses del sector fósil, uno de los mayores culpables de la crisis ecológica y climática que estamos viviendo.

En este sentido, es emblemático el caso de Italia, el país europeo que más ha sufrido la pandemia y el beneficiario de la mayor parte de la ayuda europea para la recuperación. Como muestra nuestra encuesta “Recuperación y Connivencia”, entre el anuncio del Plan Nacional de Recuperación y Resiliencia (PNRR) en julio de 2020 y julio de 2021, la industria fósil consiguió al menos 102 reuniones con los ministerios encargados de elaborar el plan: una media de más de dos reuniones por semana. Eni, la mayor multinacional italiana del sector fósil, dominó la acción de los grupos de presión con al menos veinte reuniones oficiales, que le permitieron promover sus falsas soluciones ante los responsables políticos, como el hidrógeno (que actualmente se produce en un 99% a partir de gas fósil), el biometano y la captura y almacenamiento de carbono (CAC).

El mismo número de reuniones mantuvo Snam, la empresa que controla más de 40.000 km de gasoductos en Italia y el resto del continente europeo. Si para Eni el hidrógeno es el expediente para estimular la producción de gas, en el caso de Snam es una estrategia destinada a prolongar la vida de sus infraestructuras fósiles y a desarrollar otras nuevas, como las decenas de estaciones de repostaje de hidrógeno para trenes y camiones incluidas en el Plan Nacional de

Recuperación y Resiliencia (PNRR), útiles solamente para frenar un cambio real del modelo energético y de transporte.

El cabildeo alcanzó su punto álgido en los meses siguientes a la instauración del gobierno de Draghi. Entre febrero y abril de 2021, la industria energética asaltó literalmente los centros de poder institucional, organizando 49 reuniones con el Ministerio de Transición Ecológica y el Ministerio de Desarrollo Económico. Así, en pocos meses se han destinado 4.200 millones de euros al hidrógeno. Un aumento considerable respecto a los escasos 1.000 millones previstos en la primera versión del plan y que, de hecho, fue rechazado contundentemente por la Comisión Europea, que finalmente obligó al ejecutivo italiano a modificar sustancialmente el componente de transición energética del PNRR, cerrando las lagunas que se habían dejado abiertas al gas.

RePowerEU y la reactivación del gas a escala mundial

La influencia que ejerce la industria fósil sobre los responsables de la toma de decisiones en Europa y en los Estados miembros es una muestra del acceso privilegiado del que gozan las empresas del sector en estos espacios. Un privilegio del que parecen haberse aprovechado especialmente tras la invasión de Ucrania por parte de la Federación Rusa. Así lo confirma el plan RePowerEU. Un proyecto presentado en mayo de 2022 que se refiere a un paquete de estrategias destinadas a revisar el gran plan europeo para relanzar la economía en clave verde de la UE (Next Generation), incluyendo un nuevo y ambicioso objetivo: liberar a la Unión Europea de la dependencia de Rusia para el suministro de gas, petróleo y carbón, pero también de otras materias primas, de aquí a 2030.

Como señala la propia Comisión, la UE importa el 90% del gas, el 97% del petróleo y el 70% del carbón que utiliza. De ellos, más del 40% del gas, el 27% del petróleo y el 46% del carbón proceden de Rusia. Pero RePowerEU va más allá: prepara el camino para una verdadera reconfiguración del papel de la UE en el mundo, en un contexto internacional que cambia rápidamente, empezando por el sector de la energía y las materias primas.

Junto con el relanzamiento de las energías renovables, a las que se dedica una de las estrategias, y la eficiencia energética, el plan para superar la dependencia del gas ruso tiene un gran escollo: el brutal relanzamiento del gas a escala mundial. Desde las extracciones en alta mar hasta las nuevas infraestructuras de importación de gas e hidrógeno, la estrategia se desarrolla en torno a una lectura que ve en el gas el verdadero protagonista de una reconfiguración de las relaciones, pero también de las estrategias comerciales de la UE, orientadas a salir de la dependencia energética de Rusia y, al mismo tiempo, a redefinir las relaciones tanto con los países que aún no se han incorporado a la Comunidad de la Energía (Ucrania, Georgia, Moldavia, los Balcanes Occidentales) como con países de otros continentes.

“Ningún Estado miembro puede hacer frente a este reto en solitario”, dijo la Comisión Europea en mayo de 2022, con el objetivo de acabar con las importaciones de petróleo, carbón y gas de Rusia a más tardar en 2030. La Comisión entra en los detalles del cómo en una de las estrategias del paquete, la denominada estrategia energética exterior. Aquí se lee, en primer lugar, la voluntad de la Comisión de aumentar las importaciones de gas licuado (GNL) procedentes de Estados Unidos, país con el que la UE ha firmado un acuerdo bilateral ad hoc, contribuyendo de hecho a reactivar el viejo plan estadounidense de convertirse en el primer exportador de gas transportado por barco a escala mundial. Un plan, este, que se originó hace varios años,

paralelamente a la campaña interna de financiación pública de la extracción de gas, mediante la controvertida técnica del *fracking*. Todo ello a pesar de la resistencia que se ha ido creando a lo largo de los años en Estados Unidos, tanto a la fracturación hidráulica —por sus dramáticas consecuencias para el medio ambiente, en particular la contaminación de las aguas subterráneas, y el clima— como a las nuevas infraestructuras de transporte y exportación de gas por barco a Luisiana, Texas y otros estados del golfo de México.

El objetivo declarado de la UE es aumentar las importaciones de gas licuado en al menos 15.000 millones de metros cúbicos en 2022 y 50.000 millones de metros cúbicos al año hasta al menos 2030, principalmente desde Estados Unidos y en cooperación con otros socios internacionales. Según la declaración del Grupo de Trabajo Conjunto UE-EE. UU. sobre Seguridad Energética de principios de noviembre, el ritmo de aplicación del acuerdo fue incluso más rápido de lo esperado: entre enero y octubre de 2022, EE. UU. exportó 48 bcm de gas a la UE, es decir, 26 bcm más que en 2021.^[1] Mucho más que los 15 bcm acordados en primavera.

Parte de los compromisos de RePowerEU era también la celebración de un acuerdo trilateral con Egipto e Israel para la importación de gas licuado del Mediterráneo Oriental. Este acuerdo se alcanzó ya a mediados de junio y sella la centralidad de Egipto como proveedor de gas licuado al mercado europeo, fortaleciendo de un plumazo no solo al régimen de al-Sisi, sino también al régimen israelí con su política de apartheid hacia el pueblo palestino.

RePowerEU también menciona a Nigeria, Senegal y Angola entre los países de los que podría llegar más gas licuado para Europa, mientras que Noruega, Azerbaiyán y Argelia podrían aumentar el suministro por gasoducto.

Se trata de países en los que la UE se apoya, sellando con RePowerEU lazos tóxicos que deberían sustituir al que ahora está fuera de control con Rusia. Pero sin resolver el problema de la dependencia del gas ni el del cambio climático, por no hablar de las violaciones de los derechos humanos perpetradas a diario por gobiernos autocráticos que alimentan la maquinaria represiva y la estructura de poder construida en los últimos años gracias a los ingresos garantizados por la venta de gas, al igual que Rusia.

Nuevos gasoductos y terminales de GNL

En su mapa actualizado de nuevas infraestructuras de gas, RePowerEU añade nuevas terminales y gasoductos de GNL a los Proyectos Europeos Prioritarios (PCI), y anima a los Estados miembros a contribuir al objetivo de diversificación (lejos de Rusia) con infraestructuras adicionales, abriendo la posibilidad de utilizar varios capítulos del presupuesto europeo para financiarlas: desde los fondos de cohesión hasta los de la Política Agrícola Común y el Mecanismo de Recuperación y Reactivación.

Entre las principales infraestructuras nuevas figuran la ampliación del gasoducto Trans Adriático-TAP (con el gasoducto greco-búlgaro IGB) hasta Bulgaria y su expansión, es decir, la duplicación de la capacidad del gasoducto hasta 20.000 millones de metros cúbicos al año; la construcción de un gasoducto entre España e Italia, que debería conectar la terminal de GNL de Barcelona con la de Livorno (Snam y Enagas han firmado un memorándum de entendimiento y encargado un estudio de viabilidad), y la construcción de un corredor para la importación de hidrógeno desde el norte de África hasta Italia y la UE. Eso sin contar las decenas de terminales de GNL previstas

en toda Europa. En Italia, solo el gobierno ha encargado a Snam la instalación de dos FSRU —Unidades de Regasificación Flotantes y de Almacenamiento de 5 bcm—, una en Piombino, Toscana, y otra en Rávena, Emilia-Romaña, sin ninguna evaluación de impacto ambiental precisamente en nombre de la emergencia decretada con RePowerEU. Además de estas, Snam está procediendo a la construcción de otras dos FSRU en Cerdeña, mientras que se ha planteado la posibilidad de construir una quinta en Gioia Tauro, Calabria, con una capacidad de 17 bcm.

La estrategia prevé inversiones totales de 210.000 millones hasta 2027 en forma de préstamos, y otros 225.000 millones en subvenciones que se distribuirán a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia. La Comisión ha dado una indicación para crear un nuevo capítulo de gastos para los PNR de los países miembros, dedicado precisamente a la respuesta a la crisis con Rusia, en el que la construcción de infraestructuras energéticas gozará de una excepción especial: los nuevos proyectos no tendrán que cumplir con el principio de Do Not Significant Harm (“No causar daño significativo”), uno de los pilares del Programa Europeo de Recuperación y Resiliencia, destinado precisamente a garantizar la defensa del medio ambiente y la biodiversidad.

Otro aspecto a señalar, que muchos ya estamos leyendo con alarma, es la reactivación del hidrógeno producido “a partir de fuentes no fósiles”, con referencia explícita a la posibilidad de proponer proyectos de producción de hidrógeno “también a partir de la energía nuclear”. Al parecer, el país que la UE está estudiando es Ucrania.

Además del gas, la agenda comercial de la UE mira a los países de otros continentes principalmente como “proveedores de energía y materias primas” que la industria verde de Europa necesita, para lo cual la estrategia energética exterior prevé diversas formas de apoyo público para garantizar su papel de líder mundial. Parte del paquete es un nuevo impulso a la importación de 10.000 millones de toneladas de hidrógeno, para lo cual la UE planea concluir asociaciones de hidrógeno con “países fiables” para garantizar “unas relaciones comerciales y de inversión abiertas y sin distorsiones para los combustibles renovables y bajos en carbono”. La estrategia hace referencia a tres corredores de importación de hidrógeno: desde el mar del Norte (Noruega y Reino Unido), el sur del Mediterráneo y Ucrania, que la UE quiere abrir “tan pronto como las condiciones lo permitan”.

Al mismo tiempo, la Comisión ya se está moviendo para asegurar mediante acuerdos ad hoc (por ejemplo, con Namibia, pero también con Australia, varios países de Sudamérica y los Balcanes Occidentales) las materias primas, tierras raras, litio, magnesio, niobio, germanio, boratos y escandio que necesita la industria verde y cuyo coste se prevé que aumente hasta 2050.

Se trata de un panorama preocupante, centrado en una visión y un modelo neocolonial de la Unión Europea que vuelve a proponer una agenda comercial y consolida las relaciones con gobiernos autoritarios para garantizar una larga vida al gas y una nueva vida a la creciente industria verde, que corre el riesgo de seguir el mismo modelo extractivista diseñado por la industria fósil.

También conviene recordar que la crisis del gas de 2006 entre Rusia y Ucrania fue utilizada por la UE para construir una narrativa de diversificación que justificara la construcción de nuevos gasoductos y terminales de GNL en Europa, financiados y garantizados con miles de millones de euros del erario público.

Diversificación no del gas, para reducir la dependencia de todos los combustibles fósiles, sino de los proveedores, para reducir la dependencia de Rusia. Esta ha sido la letanía que ha justificado la construcción de grandes infraestructuras como el controvertido Corredor Meridional de Gas —un gasoducto de 3.500 km que cuesta nada menos que 45.000 millones de dólares, financiado y garantizado en gran parte por los bancos públicos europeos— que han contribuido a afianzar la dependencia del gas del continente y, en particular, la de algunos países, forjando relaciones cada vez más estrechas con gobiernos autoritarios como Azerbaiyán y Turquía, mientras que la dependencia del gas ruso ha aumentado. El gas ruso que también se transporta a través del propio Corredor del Sur, mientras que la empresa rusa Lukoil ha seguido reforzando su presencia en la extracción de gas en alta mar en Azerbaiyán.

El gasoducto Eastmed, devastador para el clima y los derechos humanos

El mayor gasoducto que podría relanzar RePowerEU es el que conectaría los yacimientos marinos de Israel y Chipre con el mercado europeo del gas, pasando por Chipre, Creta y el sur de Grecia para llegar cerca de Otranto (Italia). Se trata del gasoducto Eastmed, propuesto hace más de diez años por el consorcio IGI Poseidon y hasta ahora nunca realizado.

El pasado mes de diciembre, el Consejo y el Parlamento Europeo confirmaron la presencia de Eastmed en el reglamento de las RTE-E (reglamento relativo a las redes transeuropeas de energía), que indica los proyectos estratégicos europeos a financiar para el sector energético. Con una salvedad, a saber, que Eastmed estaría inmediatamente “preparado para el hidrógeno”, es decir, que también sería apto para transportarlo. En los pasillos de Bruselas, nadie creía realmente que este oleoducto se construiría en algún momento, pero durante años las instituciones optaron por dejar la puerta abierta. Cuando Estados Unidos y luego Grecia se apartaron del megaproyecto a principios de año, surgió la noticia de una evaluación de costes y beneficios que la propia Comisión estaba realizando y que hasta ahora no se había hecho pública. Todo cambió a principios del verano, con el relanzamiento del movimiento del gasoducto en el marco de RePowerEU dentro del Foro del Gas del Mediterráneo Oriental y la visita de Ursula von der Leyen a Israel. Para la UE, lo urgente es asegurarse de que el gas de los yacimientos de Leviatán y Tamar —que empezaron a venderse a principios de 2020 desde Israel a Egipto, conectados por el gasoducto Ashkelon-Al Arish que evita la Franja de Gaza— se venda en el mercado europeo. De ahí el impulso de la UE para facilitar la firma de un memorándum de entendimiento con los dos gobiernos, pero también su apertura a apoyar (también financieramente) la construcción del nuevo gasoducto de 1.900 kilómetros que permitiría a Israel vender su gas directamente.

Una obra técnicamente difícil de realizar, según muchos expertos, debido al desnivel de las superficies marinas en el Mediterráneo oriental. Además, tanto el gasoducto como las extracciones en aguas profundas atarán al mundo al gas fósil durante más de veinte años, ignorando la necesidad de reducir el cambio climático. También vale la pena reflexionar sobre esto: justo cuando estamos asistiendo a una terrible guerra y un desastre humanitario como el de Ucrania, nuestros gobernantes están planeando un escenario potencialmente muy sombrío: el gas que se supone que pasa por Eastmed ya ha exacerbado las tensiones siempre latentes entre Grecia, Chipre y Turquía.^[2] Y contribuirá a reforzar el régimen de apartheid en Israel, que ya está totalmente normalizado.

El chantaje es fuerte, hay que tener todo el gas posible “o si no, no tendremos calefacción ni aire acondicionado”, dijo Mario Draghi, que también visitó Israel a principios de junio para asegurar el suministro de gas a Italia. Poco importa que el gasoducto Eastmed no tenga proyecto ejecutivo y no esté listo antes de 2030, con un coste inicial estimado en 6.000 millones de euros. El proyecto aún no ha alcanzado la decisión de inversión, prevista para finales de año, y la Comisión Europea solo ha financiado hasta ahora un estudio de viabilidad con 36,5 millones de euros.

Un futuro sombrío

El estado de emergencia se ha utilizado durante meses para promover la construcción de decenas de nuevas infraestructuras de importación de gas en la UE. Todo ello se paga o se asegura con recursos públicos, que se desvían así de la construcción de una transición no solo ecológica sino también justa. Estas infraestructuras se deciden y aprueban con procedimientos rápidos, pero tendrán consecuencias medioambientales e impactos climáticos y sociales a largo plazo que los gobiernos e instituciones no quieren evaluar. Así, mientras las seis mayores empresas petroleras y gasísticas de Europa obtienen unos beneficios extra de 75.000 millones de euros, los hogares y las empresas están pagando todos los costes de una dependencia del gas que se está convirtiendo en sistémica gracias a la emergencia. Desbloquear este modelo, detener la construcción de nuevas infraestructuras y exigir que las empresas paguen por la crisis y que los recursos públicos se destinen a reducir la dependencia del gas son los primeros pasos esenciales hacia una transformación social, medioambiental y de justicia climática de la sociedad.

[Fuente: [Viento Sur](#). Elena Gerebizza es investigadora y activista de ReCommon (Italia), dedicada a realizar campañas contra la expansión de los combustibles fósiles y la infraestructura a gran escala (www.recommon.org/)]

[1] <https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2022/11/07/joint-readout-of-u-s-eu-task-force-meeting-on-energy-security/>

[2] <https://www.recommon.org/eastmed-il-gasdotto-che-minaccia-la-pace-nel-mediterraneo/>

Carmen Heredero

Coeducación para transformar

El sistema educativo cumple bien con su función reproductora de la sociedad y, especialmente, reproduce una característica de esta, la desigualdad entre los sexos. Ahora bien, en la medida en que esta sociedad nuestra presenta avances en el terreno de la igualdad, es razonable pensar que el sistema educativo también está actuando contra [la discriminación de género](#), es decir, que, además, ejerce una cierta función transformadora, con respecto al género, de las identidades personales y colectivas y de las relaciones entre las personas.

Ahora bien, el análisis de los diferentes aspectos del propio sistema nos ha llevado a considerar que los elementos de transformación son débiles, predominando los aspectos que refuerzan el sexismo y, por tanto, hoy, la función reproductora tiene la supremacía: la institución educativa, a pesar de haber incorporado características democráticas, es una institución jerarquizada, donde determinados actores sociales gozan de una autoridad *legitimada* por la propia *institución*. Es, fundamentalmente, una institución mantenedora de estereotipos de género, de androcentrismo y de desigualdad, siendo minoritarios los elementos favorecedores de la igualdad entre los sexos.

No estamos en los tiempos en que la Sección Femenina dirigía la formación de las españolas, recomendándoles la sumisión al varón. El feminismo en nuestro país ha conseguido ser un movimiento potente, que ha conseguido importantes leyes igualitarias favorables a las mujeres y el aumento de la sensibilización social. El feminismo ha aportado valores fundamentales a las sociedades modernas, valores que no solo enmarcan el objetivo de la defensa de las mujeres, sino que proporcionan un marco para la lucha por los derechos humanos y de la mayoría social. Quiero destacar especialmente la trascendencia de la teoría feminista para los colectivos LGTBI. Su cuestionamiento del carácter patriarcal del sistema explica también la discriminación que sufren las personas que rechazan la norma heterosexual o que no se sienten del género que se les ha asignado.

Es previsible que el futuro siga deparándonos cambios favorables, que la carrera por la igualdad sea algo imparable y que sigamos avanzando en la extensión de [una enseñanza coeducadora](#), pero todo está por ver y no están descartados los retrocesos, como en otras etapas históricas. Lo que sí parece evidente es la lentitud de la marcha, tanto más lenta cuantas menos acciones de los poderes públicos se preocupen de promover que los actores sociales que intervienen en la educación estén sensibilizados y dispongan de los recursos necesarios para el fomento de la igualdad efectiva entre hombres y mujeres y contra toda discriminación de género, uno de los principios de la educación, según nuestra máxima ley educativa.

El feminismo ante la educación

Hoy no tenemos ninguna duda de la importancia de lo que el feminismo ha aportado a la educación, de la importancia de los valores feministas, hasta el punto de que no se nos ocurre cómo podría existir una educación democrática que no tuviera en cuenta la necesaria inclusión de la mitad de la población, de sus aportaciones a la historia de la humanidad, que no fuera consciente de la discriminación social femenina, para luchar contra ella, que no combatiera el sexismo y el machismo aún presentes en la sociedad y en muchos comportamientos del

alumnado...

Desde planteamientos feministas se ha teorizado sobre la necesidad de la coeducación y este modelo educativo se ha recogido en nuestra máxima ley educativa recientemente. La coeducación se ha llevado a la práctica en determinadas ocasiones, cuando el profesorado está sensibilizado a favor de la igualdad entre los sexos, cuando determinadas instituciones y administraciones educativas han propiciado la formación del profesorado y los recursos para fomentarla en los centros...

Desde el feminismo hemos defendido una escuela mixta que supusiera una misma educación para chicos y chicas, entendiendo que unos y otras están capacitados para hacer lo que deseen, sin limitaciones sociales debidas a su sexo, que tanto los espacios públicos como los privados deben ser ocupados sin restricciones sexistas que discriminan especialmente a las mujeres, al recluirlas en el ámbito privado, que las tareas domésticas y de cuidados deben ser compartidas por unas y otros y que la escuela tiene que darles valor porque realmente son importantes para la vida de las personas.

Hemos propugnado una educación antipatriarcal, que cuestione los mandatos de la masculinidad hegemónica y todo lo que ello conlleva: el androcentrismo, los valores asociados a la competitividad y la agresividad, a la ocultación de los sentimientos... Frente a ello, la pedagogía feminista trabaja sobre las emociones, los placeres, las sexualidades y los vínculos afectivos, sobre los buenos tratos. Y reclamamos una educación en masculinidades no hegemónicas desde la creencia en que el machismo también victimiza, silencia y oprime las masculinidades.

Hemos denunciado la invisibilización de las mujeres en los libros de texto. Hemos demostrado que la literatura que se difunde es la masculina, que la historia que se enseña es la de los varones, que la física que aprendemos en la escuela es la de las máquinas vinculadas a las actividades masculinas (recuerdo el motor de cuatro tiempos de mi libro de física de 4.º de bachiller), pero no se estudia la olla exprés o la batidora, que, en definitiva, tenemos unos currículos androcéntricos, que nos muestran la vida desde la unilateral y parcial mirada del mundo de los hombres, pretendiendo que esta sea totalizadora. Y hemos reclamado la presencia de las mujeres y la de sus aportaciones en los currículos académicos, para visibilizarlas, para rescatarlas como referentes en todo tipo de actividades y saberes para chicas y chicos.

Hemos sido muy conscientes de la gran fuerza que tiene para la educación, desde la infancia, lo que hemos denominado currículum oculto, es decir, las actitudes, comportamientos, costumbres... diferentes según el sexo, que el profesorado y el conjunto de los profesionales de la educación transmiten de forma inconsciente, como si de la propia naturaleza se tratara y no fueran producto de la cultura, aprendidos, e impuestos por las fuerzas sociales hegemónicas.

Y todo ello transmitido por medio de un lenguaje al servicio de la discriminación femenina, no solo porque se obvia la referencia al femenino, quizás lo más difícil de corregir si no queremos hacer un discurso pesado y fatigoso, sino por la multitud de expresiones que esconden o menosprecian a las mujeres: son múltiples los ejemplos de este tipo de lenguaje que encontramos en los libros de texto que manejan nuestros estudiantes, en los fragmentos literarios, en los problemas de matemáticas... como, por supuesto, en la prensa de cada día.

Por eso también reclamamos una formación del profesorado que le haga reflexionar y modificar

su propio estar, evitando el sexismo en su vida cotidiana. Porque la coeducación feminista tiene mucho de sensibilización, de cuestionamiento propio de las personas y de sus relaciones con los y las demás.

Nuevos retos

Pues bien, hoy la coeducación tiene que seguir desarrollando todos esos contenidos, pero se nos presentan algunos nuevos retos, no del todo novedosos en las propuestas feministas, pero retos, sí, porque las situaciones sociales son cambiantes y hay que darles la respuesta adecuada. Me refiero a la educación sexual, a la cuestión de la interseccionalidad y, específicamente, al tratamiento de la orientación sexual y de la identidad de género.

Como sabemos, la mayoría de nuestros estudiantes no reciben ninguna clase de educación sexual y muchos y muchas se acercan al hecho sexual a través de una pornografía en la mayor parte de los casos machista, violenta y denigratoria, sin que tengan ningún mecanismo para cuestionarla.

Tenemos dos recientes leyes que recogen la educación afectiva y sexual como componente del currículum educativo: tenemos un marco legal para la educación sexual. Ahora tiene que generalizarse esta educación. Las dos leyes a que me refiero son la LOMLOE, de modificación de la LOE y la Ley de garantía integral de la libertad sexual. Ambas leyes tienen sus insuficiencias, desde mi punto de vista. La LOMLOE lo recoge de una forma casi vergonzante, evitándolo en educación infantil, ligándolo siempre a la afectividad..., la Ley de libertad sexual da más importancia a la “prevención de las violencias sexuales”, por ejemplo, incidiendo en una visión problemática de la sexualidad, antes que en su principal faceta de fuente de placer y bienestar. Así, el Art. 7 se llama *Prevención y sensibilización en el ámbito educativo*, y lo mismo todos los demás artículos referidos a los distintos ámbitos sociales —sanitario, comunicación, laboral...—.

Y estamos ante un gran problema que las administraciones educativas y las facultades de educación deben resolver: formar al profesorado para llevar a cabo esta tarea.

Desde el feminismo hemos reclamado que la educación sexual implica el conocimiento del propio cuerpo, respetando la diversidad de cuerpos, la comprensión de la sexualidad como algo positivo, como valor, como placer, el conocimiento de las diferentes experiencias humanas, la aceptación de la propia sexualidad, el conocimiento de habilidades para una sexualidad satisfactoria, la importancia del respeto al otro, a la otra... en las interacciones sexuales, el cuestionamiento de la heterosexualidad obligatoria.

También debe educarse en los peligros asociados al hecho sexual y debemos educar contra el acoso y la violencia sexual. Nuestros jóvenes y nuestras jóvenes deben ser conscientes de la existencia de esa violencia machista y de que este es uno de los grandes problemas que sufren muchas mujeres. Tenemos que educarles en el rechazo a cualquier conducta abusiva, que no cuente con la aceptación de quienes participan de una relación sexual. Y hay que darles mecanismos que les ayuden a distinguir entre un comportamiento abusivo y rechazable, de uno que pretenda la relación libre y placentera, a distinguir una manifestación de seducción o flirteo, de una de abuso o violencia. A veces la línea que separa ambas conductas puede ser muy fina, es cierto, pero no sería bueno trasladar una visión puritana, unilateral de la sexualidad, solo como

peligro y no como placer, por el contrario, se debe trasladar la importancia del placer sexual como un elemento fundamental de la salud y el bienestar de las personas.

Y, por supuesto, frente a la consideración de la pasividad femenina en una relación sexual, transmitir la capacidad de agencia femenina.

En nuestras aulas se plasma una diversidad de personas con sus propias características individuales, sus propios ritmos evolutivos, sus propias capacidades, intereses, necesidades, nivel de maduración..., toda la amplia gama de aspectos de la identidad personal y de las relaciones humanas y sociales que nos hacen diferentes a las personas. Y también con sus características colectivas, derivadas de su pertenencia a diferentes realidades sociales, culturales, étnicas, lingüísticas, de clase social, de género, de orientación sexual... que conforman experiencias interseccionales, teniendo en cuenta que todos los ejes que generan estas divisiones sociales se construyen unos sobre otros y actúan juntos. Por eso nuestro modelo coeducativo enlaza, como no podría ser de otra manera, con la defensa de una educación inclusiva.

Como sabemos, educación inclusiva no significa la imposición de un único modelo —el hegemónico—. Porque no es el alumnado quien tiene que adaptarse a una enseñanza planificada desde las administraciones educativas, sino que es la enseñanza la que tiene que adecuarse al modo en que cada alumno y alumna, de modo particular, progresa, ayudando a que se desarrollen desde el respeto a su identidad, o sus identidades interseccionales. En este sentido, una pedagogía inclusiva está estrechamente vinculada, recordando a Freire, con una pedagogía crítica, dialógica y participativa, que promueve el desarrollo de una conciencia crítica de la desigualdad social y que pretende el empoderamiento personal y colectivo.

El cuestionamiento del carácter patriarcal del sistema, seña de identidad del feminismo, explica también la discriminación que sufren las personas que rechazan la norma heterosexual o su adscripción de género. Desde ambas perspectivas —inclusiva y feminista—, la coeducación debe tener también respuestas para el alumnado lgtbi.

Los estudios muestran que los centros educativos no son lugares seguros para los adolescentes que no responden a los patrones hegemónicos de orientación sexual y de identidad de género. La lgtbifobia está presente a través de insultos y agresiones físicas, lo que hace que la mayor parte de las y los y las adolescentes lgtbi hayan conocido situaciones de agresión, marginación o directamente exclusión, por estas causas.

El feminismo ha apostado por un modelo coeducativo con unos criterios muy claros a este respecto. La sociedad ha creado unos patrones de “normalidad” a la que debemos aspirar, creando modelos y estereotipos, que se sustentan en la ficción de personas que no se encuentran en la realidad. Esta hegemonía establece un mecanismo disciplinario sobre las personas, sometiéndolas a la obligatoriedad de ser y comportarse según lo que el modelo establecido define como “normal”, de forma que, si no eres así, si no cumples el patrón cultural establecido, no vales, la sociedad te margina. Por el contrario, una pedagogía coeducadora debe reconocer la diversidad sexual, las diversas formas de vivir, de sentir y de orientar el deseo, el amor y el afecto hacia las otras personas, la diversidad familiar y las nuevas estructuras familiares. Debe considerar la diversidad de expresiones de la feminidad o la masculinidad y de las expresiones de ruptura de esa impuesta dicotomía social, de ese binarismo de género, y

entender que todas ellas son muestras de una rica variedad que nos hace personas únicas e iguales.

Frente a la violencia de género, la solución es la educación

Y creo que hay que plantearse con responsabilidad la cuestión trans. En los últimos años han aumentado exponencialmente las transiciones de género que se inician en la adolescencia. Estudios recientes apuntan diversas causas de este hecho, causas que tienen que ver con factores propios relacionados con el género o el cuerpo, pero también con factores sociales como el rechazo a las rígidas categorías de hombre y mujer, lo que genera enormes malestares a quienes no se identifican con los estereotipos de la masculinidad o de la feminidad, o con otros factores relacionados con las crisis sociales, económicas y climáticas, con el cuestionamiento de las instituciones, incluso con el impacto de la pandemia y el confinamiento, y que se canalizan por la vía de la transición de género.

En cualquier caso, los centros educativos son un escenario clave donde se desarrollan estos procesos, por lo que es urgente ocuparse de la cuestión del acompañamiento a las personas adolescentes —a veces, niños y niñas— que desean iniciar transiciones de género, y también es indispensable hacerlo con calma, serenidad, reconociendo la complejidad que esas situaciones representan.

En definitiva, creo que el modelo coeducativo tiene mecanismos para seguir analizando las nuevas situaciones sociales y para dar la mejor respuesta a las nuevas necesidades de nuestro alumnado. Lo que hace falta es la generalización de nuestra pedagogía feminista, de la coeducación, con el objetivo de lograr una escuela realmente transformadora.

[Fuente: [Nueva Tribuna](#). Carmen Heredero es miembro del Consejo Escolar del Estado y de la Federación de Enseñanza de CC.OO.]

Pavan Kulkarni

Se intensifica la lucha por la liberación del Sáhara Occidental

Los combates entre el Ejército de Liberación del Pueblo Saharaui y las fuerzas de ocupación marroquíes se han intensificado en los últimos días.

Las fuerzas marroquíes que ocupan ilegalmente la República Árabe Saharaui Democrática (RASD), han sido objeto de repetidos bombardeos por parte del Ejército de Liberación Popular Saharaui (ELPS). Las fuerzas marroquíes ocupan actualmente más del [80%](#) de la RASD, también conocida como Sáhara Occidental, que sigue clasificada por la ONU entre los últimos países pendientes de descolonización.

El viernes 30 de diciembre, según un [comunicado del Ministerio de Defensa de la RASD](#), el SPLA “atacó las trincheras de los soldados de ocupación en varias zonas del sector de Mahbas”. El SPLA bombardeó el viernes, por tercer día consecutivo, las posiciones de las fuerzas de ocupación en esta región, en el noroeste del territorio ocupado. También se informó de ataques los días [28](#) y [29 de diciembre](#), que infligieron “grandes pérdidas en vidas y equipos a lo largo del muro de la humillación y la vergüenza”.

Este muro, denominado “berma”, se extiende del noroeste al sureste, a lo largo del territorio de la RASD. Separa las zonas ocupadas por Marruecos en la costa del territorio interior que está bajo el control del Frente Polisario (FP), [reconocido por la Asamblea General de la ONU](#) como representante internacional del pueblo saharauí.

Marruecos construyó la berma en la década de 1980, con [la ayuda de las empresas estadounidenses Northrop y Westinghouse](#). Con 2.700 kilómetros de longitud, es una de las mayores infraestructuras militares del mundo, y el segundo muro más largo del planeta. Está reforzado con el campo de minas más largo del mundo, compuesto por siete millones de minas terrestres.

El SPLA se ha enfrentado a las tropas de ocupación a lo largo de la berma desde que la guerra por la liberación de la RASD se reanudó el 13 de noviembre de 2020, tras 29 años de alto el fuego. El alto el fuego se rompió después de que las tropas marroquíes cruzaran la berma para desalojar por la fuerza a manifestantes saharauis desarmados y pacíficos que bloqueaban una carretera ilegal marroquí a Mauritania a través de su territorio. Las tropas marroquíes cruzaron la zona tampón de Guergarat, patrullada por la ONU, a través del extremo sudoriental de la RASD ocupada.

El alto el fuego se había asegurado en agosto de 1991, después de que el Consejo de Seguridad de la ONU estableciera la Misión de la ONU para el Referéndum del Sáhara Occidental (MINURSO) con la promesa de hacer realidad el derecho del pueblo saharauí a la autodeterminación. Sin embargo, con el respaldo de Estados Unidos, Reino Unido y la UE, Marruecos logró [sabotear el referéndum prometido por la ONU](#), y la MINURSO quedó reducida a una fuerza de mantenimiento de la paz.

Para los saharauis bajo ocupación, las casi tres décadas de alto el fuego suelen ser consideradas como años perdidos. Las fuerzas marroquíes continuaron “con su salvajismo y violencia”, mientras que los saharauis “se vieron obligados por la comunidad internacional a no esperar nada”. No había guerra, ni paz, ni esperanza”, declaró Hamza Lakhali, poeta disidente de El Aaiún, la ciudad más grande del territorio ocupado, a *Peoples Dispatch*.

“Cuando empezó la guerra, renovó la esperanza de liberación en el pueblo porque nuestros hermanos del otro lado de la berma habían vuelto a tomar las armas para liberarnos de la ocupación”, afirmó. Con esta esperanza, el pueblo ha podido soportar las crecientes atrocidades a manos de las fuerzas de ocupación desde la reanudación de la guerra, explicó Lakhali.

Sin embargo, los intereses en juego en la guerra van mucho más allá de las fronteras de Marruecos. Desde la reanudación de los combates, la potencia ocupante ha recibido importantes muestras de apoyo de las potencias occidentales, lo que, según muchos, la ha envalentonado aún más.

El 10 de diciembre de 2020, [la administración estadounidense de Donald Trump anunció](#) que “Estados Unidos reconoce la soberanía marroquí sobre todo el territorio del Sáhara Occidental.” Argumentando que “un Estado saharauí independiente no es una opción realista para resolver el conflicto,” los EE. UU. declaró que la autonomía bajo soberanía marroquí es “la única base para una solución justa y duradera a la disputa.”

La aprobación que dio el gobierno estadounidense de la ocupación marroquí del Sáhara Occidental se produjo a cambio de la [normalización de sus relaciones diplomáticas con Israel](#) el mismo día. Desde que Joe Biden asumió el cargo en enero de 2021, [se ha reiterado](#) el respaldo a la ocupación marroquí del Sáhara Occidental.

El antiguo colonizador del territorio, España, que había entregado el territorio del Sáhara Occidental a las fuerzas invasoras marroquíes en 1975, en marzo de 2022 de nuevo desconoció la RASD y aceptó la reivindicación marroquí de soberanía sobre el territorio.

El interés de la UE en la ocupación

La Unión Europea (UE) expresó su satisfacción inmediata por el anuncio de España. Las sólidas relaciones bilaterales entre sus Estados miembros y Marruecos “pueden ser bastante beneficiosas para la aplicación de la asociación euromarroquí”, [explicó](#) el portavoz del jefe de la Política Exterior de la UE, Josep Borrell, tras el anuncio.

Esta [asociación](#), que se instauró con el establecimiento de una zona de libre comercio en 1996, garantiza que la UE siga siendo el principal socio comercial de Marruecos, con el 56% del

comercio de mercancías en 2019 y el 51% de las importaciones de Marruecos. La “asociación de pesca sostenible”, que permite a las empresas europeas pescar en aguas fuera de la UE, es una piedra angular de la asociación. Curiosamente, [más del 90%](#) del pescado capturado por las flotas europeas en el marco de esta “asociación euromarroquí” se extrae de las aguas de la RASD. Esto continúa a pesar de haber sido declarado ilegal en múltiples ocasiones desde [2018 por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea \(TJUE\)](#) que, reiterando la [opinión consultiva de 1975 de la Corte Internacional de Justicia \(CIJ\)](#), concluyó que Marruecos no tenía soberanía sobre el territorio de la RASD.

El [40% de todas las importaciones europeas de fosfato](#) proceden también de Marruecos, y se prevé que esta cifra aumente a medida que Europa busque alternativas a los fertilizantes rusos en el contexto de la guerra en Ucrania. Al menos el 10% de los beneficios generados por [OCP SA](#), minera estatal marroquí de roca fosfórica, fabricante de ácido fosfórico y productor de fertilizantes, proceden del fosfato extraído de la mina de Bau Craa, en territorio saharauí ocupado.

“Nos dicen que este supuesto ‘comercio’ de nuestros recursos entre la UE y Marruecos también beneficia a nuestra economía local. Es una gran mentira”, afirmó Lakhali. “Todas esas decenas de millones que la UE ha estado pagando a cambio cada año van a parar a Marruecos. El dinero se utiliza para reforzar sus fuerzas de ocupación”, afirmó.

“Los policías marroquíes superan en número a todos los civiles saharauíes bajo ocupación. Incluyendo a todos los soldados y a los colonos que el régimen ha traído de Marruecos, nos superan en número uno a tres.”

“Resistiremos a la ocupación hasta la muerte; no tenemos nada que perder, ni siquiera nuestra patria”.

Lakhali afirmó que la mayoría de los empleos de ingeniería o dirección en estas industrias extractivas van a parar a los colonos marroquíes, mientras que en general, los saharauíes sólo consiguen trabajos que implican trabajo físico. “Incluso estos empleos se quitan a los trabajadores saharauíes si alguno de ellos es identificado como activista. No pueden encontrar ningún otro trabajo una vez que se les señala. Se ven obligados a depender de otros para sobrevivir o a pasar hambre”, denunció.

“A los estudiantes se les saca de las escuelas y universidades y se les niega la oportunidad de terminar sus estudios cuando se les identifica como activistas”, añadió Lakhali, que fue víctima de la expulsión de la universidad en 2002 por liderar una campaña que exigía una universidad en los territorios ocupados. “Me prohibieron seguir estudiando o tener un trabajo. Sólo con la ayuda de activistas pro-saharauíes en el extranjero pude sobrevivir”.

Fue más de una década después, en 2015, después de que su caso atrajera la atención internacional tras la publicación de su poesía, cuando por fin se le permitió viajar a Marruecos para completar su graduación. “Todavía no tenemos universidad en [nuestra tierra]. Los estudiantes tienen que ir a Marruecos para terminar su graduación. A cualquiera que se considere activista se le niega esta oportunidad”, afirmó, explicando cómo se utiliza la educación como palanca contra la causa de la liberación saharauí.

Quienes se niegan a ceder ante estos sistemas de control e intimidación y consiguen organizar la

resistencia son objeto de agresiones físicas, agresiones sexuales y tortura. Sin embargo, “no hay arma de represión en el arsenal del régimen que no se haya desplegado contra nosotros. Y aun así, resistimos; resistiremos a la ocupación hasta la muerte porque no tenemos nada que perder, ni siquiera nuestra patria”, insiste Lakhal.

“El régimen no puede hacer nada al respecto. Nada más, miren a Sultana Khayya. ¿Qué más pueden hacerle?”, pregunta. Khayya intenta actualmente [conseguir un salvoconducto para regresar al territorio ocupado](#) y continuar su lucha por la liberación saharauí en zona cero.

“No importa lo que haga la llamada ‘comunidad internacional’. Conocemos nuestros derechos y lucharemos por ellos en cualquier circunstancia, con o sin su apoyo”, afirmó Lakhal, pidiendo al Consejo de Seguridad de la ONU que “deje de fingir sobre derechos humanos y democracia”. También pidió a la “comunidad internacional” que “ponga fin a su hipocresía”.

“Moverán a la OTAN por Ucrania porque odian a Rusia, pero la ocupación de saharauíes en contra de todas las leyes y resoluciones internacionales está bien porque la potencia ocupante aquí es un amigo”, remarcó.

[Fuente: [Peoples Dispatch](#)]

Agustín Moreno

Sumar, Unidas Podemos y una propuesta de tregua

Cuenta Stefan Zweig en su autobiografía *El mundo de ayer* que en la Viena anterior a la Primera Guerra Mundial “la primera mirada de un ciudadano medio vienés en el periódico cada mañana no se dirigía a las discusiones del parlamento o a los acontecimientos mundiales, sino al repertorio del teatro”. Qué tiempos aquellos donde la cultura tenía más importancia en la vida pública que la política o lo internacional.

Y qué tiempos estos donde las redes sociales dominan la información y lo primero que muchas veces se ve son las tendencias para hacernos una idea rápida de lo que está pasando. Tengo que reconocer que yo lo hago en Twitter.

En esto de las redes, me pareció infame la campaña sistemática contra Pablo Iglesias e Irene Montero durante mucho tiempo. Eran tendencia todos los días, por las campañas de la derecha, la ultraderecha y las cloacas mediáticas. Pocas veces ha habido mayor agresividad hacia personajes públicos. Ni siquiera con Julio Anguita, que también las sufrió de manera implacable desde los mismos sectores y el felipismo. Con la suerte para él de que no existía estos estercoleros de odio en el que, a veces, se convierten las redes sociales. Pero el objetivo era el mismo: desacreditar virulentamente para que no se produzcan cambios políticos que afecten a los privilegios de las élites.

En fin, toda mi consideración hacia las personas y dirigentes políticos que sufren estos acosos por procurar mejoras para la mayoría social y defender el bien común. Tengo que reconocer que una de las razones que me llevó a comprometerme como independiente con la candidatura de Unidas Podemos a la Comunidad de Madrid de 2021 fue que me lo pidiera Pablo Iglesias (y también otros compañeros de IU), una persona que estaba sufriendo, junto a su familia, una campaña brutal de acoso.

Dicho esto, en Twitter he visto la siguiente evolución: a Pablo Iglesias se le ataca menos desde que abandonó los cargos políticos. Sigue como tendencia permanente Irene Montero, muy injustamente agredida por la ley de Libertad Sexual y la ley Trans. Y ahora está casi a diario Yolanda Díaz.

Cada vez que veo su nombre como *trending topic* pienso: ojalá sea porque ha bajado el paro y la temporalidad. Porque si no es por eso, es por tremendas críticas al proyecto político de Sumar y a ella personalmente. Suelen ser ataques de lo que técnicamente podría llamarse “fuego amigo” y se utilizan acusaciones explícitas o veladas de traición, comparaciones con Carmena, Errejón y referencias al olor a magdalenas. Se ha abierto la veda contra Yolanda Díaz si no hace lo que se le pide y cómo y cuándo se le pide.

Bien está que cada partido de la izquierda reclame su papel y protagonismo, que esperen clarificación de los proyectos, que pidan negociaciones para pactar la participación en la toma de decisiones y en las primarias. Eso sí, cuidando las formas y siempre desde el respeto. Sinquemar de antemano un proyecto necesario que aglutine a la izquierda para evitar que los bárbaros tomen el poder.

Así las cosas, no se puede olvidar que el 28 de mayo hay elecciones que son de gran trascendencia porque están en juego doce comunidades autónomas y las alcaldías de todo el país. Por hacer un recordatorio, en las tres elecciones autonómicas que ha habido desde 2021, la derecha ganó y la izquierda retrocedió en Madrid, Castilla y León y Andalucía. No hay apenas encuestas regionales, pero en base a los sondeos estatales, la experiencia de 2019 es que la izquierda fue con un margen mayor a las autonómicas y municipales que con el que irá en 2023. Ello puede suponer el riesgo de perder gobiernos autonómicos y municipales que se ganaron por la mínima.

En definitiva, [como vengo diciendo](#), la estrategia de centrarse en defender el último bastión (el Gobierno central) puede ser un error mortal si los resultados del 28-M no son positivos para el bloque progresista. Ello debería obligar a la izquierda a apostar con lo mejor que tenga y con la máxima unidad y cohesión. Pero las cosas están como están.

Si queremos que la izquierda tenga buenos resultados el 28 de mayo, y que esto pueda ser un trampolín para las elecciones generales, habrá que cuidar mucho estas cuestiones:

1) Rebajar la tensión, lo primero. Todo el ruido que hay en redes y en medios de comunicación transmite la imagen de disputa por intereses personales y duelo de protagonismos por su espacio. El resultado suele ser hastío, cansancio y alejamiento de los proyectos. Y esto sabemos que produce desmovilización y abstención porque el electorado de izquierda busca la unidad no encuentra las diferencias en las propuestas políticas de unos y de otros porque no las hay. En la imagen que se dio por la confección de las listas en Andalucía, está una explicación de los malos resultados. Si continúa la bronca pública, el daño puede ser irreversible, aunque finalmente hubiera acuerdo en las listas.

2) Partir de lo esencial. Sumar no tiene recorrido sin Podemos y sin Izquierda Unida, tanto por lo que ambos suman como por lo que restarían de no estar. Podemos debe tener claro que la apuesta de Sumar es el último tren que tiene la izquierda transformadora en estos momentos para aglutinar las máximas fuerzas a la izquierda del PSOE. Para irrumpir en las fronteras de otros electorados (izquierda clásica, abstencionistas, socialista, nacionalistas de izquierda). Y sobre todo para ser decisiva e impedir un Gobierno de la derecha-ultraderecha.

Al final habrá acuerdo, porque todos están condenados a entenderse. La visión estratégica que demostró Podemos entrando a formar parte de un Gobierno con el PSOE, estoy seguro de que se volverá a demostrar formado parte de candidaturas en Sumar. Nadie entendería un escenario de ruptura de la unidad y de travesía en solitario del desierto por la diferencia entre estar “en” o “con” Sumar.

Pero el problema no está el acuerdo, sino en el camino. Si se construyen complicidades o se exacerbaban los sectarismos. Si se fuerzan diferencias cuando son inexistentes en los grandes

temas de servicios públicos, fiscalidad, empleo, pensiones, vivienda, derechos civiles y democráticos, etc. Si el acuerdo es fruto del respeto mutuo y la confianza o de la presión inmoderada. Si el resultado final entusiasma o queda el mal sabor de boca de que la izquierda es una máquina de triturar personas e ilusiones.

3) Cuidar la unidad. Porque si llega un momento en el que dé igual quién tuvo la culpa o quién tuvo más culpa, será la constatación de una derrota conseguida por méritos y sectarismos propios. De ahí que urge adelantar los procesos, aclarar los proyectos, hablar entre todas las fuerzas susceptibles de formar un potente movimiento político-ciudadano que incluya a los partidos de la izquierda. Decretar ya una tregua que acabe con el ruido, que se visualice en algún gesto de encuentro entre los protagonistas y que permita afrontar en las mejores condiciones las decisivas elecciones autonómicas y municipales de mayo. De lo contrario, no tendríamos perdón.

[Fuente: [Público](#)]

Tica Font

Nuevas armas nucleares americanas en territorio europeo: una violación del Tratado de No Proliferación

Desde el pasado diciembre Estados Unidos ha empezado a sustituir su armamento nuclear situado en suelo europeo por otro más moderno. Está reemplazando las bombas termonucleares B61-3, B61-4 y B61-7 por las B61-12, que ha pasado a ser la principal arma nuclear de empleo aéreo de los Estados Unidos y la OTAN. Se trata de una bomba de caída libre dotada de sistemas de navegación de última generación y una cabeza nuclear versátil que se puede configurar en cuatro potencias, 0,3 kilotones (kt), 1,5 kt, 10 kt y 50 kt en función del objetivo, convirtiéndola en un arma de bajo o medio rendimiento. Este tipo de armas se denomina de “primer golpe”. Disponer de un arma nuclear táctica de mayor precisión y menor potencia podría hacer que los políticos tuvieran menos reticencias a emplearlas en operaciones convencionales y nos sitúa en una primera línea de enfrentamiento cada vez más peligrosa entre la OTAN y Rusia.

Estas nuevas armas nucleares sustituirán a las existentes en suelo de Bélgica, Países Bajos, Italia, Alemania y Turquía. Pero Washington ha anunciado que también las desplegará en territorio de Reino Unido; en esta ocasión no se trata de sustituir a otras más anticuadas, ya que en 2008 informó que sus armas nucleares habían sido retiradas de la RAF; parece que ahora vuelven a querer colocar nuevas armas nucleares en los búnkeres vacíos de Lakenheath.

Todo este despliegue de armas nucleares representa una violación del Tratado de No Proliferación (TNP). El TNP prohíbe que los Estados parte nucleares transfieran armas nucleares a ningún otro Estado y prohíbe a los Estados parte no nucleares recibir armas de este tipo, así como fabricarlas o adquirirlas.

Después de 53 años de la entrada en vigor del TNP, vemos que éste no ha servido para conseguir el desarme nuclear, justo hace dos años, en enero de 2021, entró en vigor el Tratado sobre la Prohibición de Armas Nucleares (TPAN). El TPAN ilegaliza las armas nucleares y supone que para los Estados que firmen el TPAN será ilegal poseer, desarrollar, desplegar, probar, usar o amenazar con el uso de armas nucleares.

Sin embargo, para el [Gobierno español](#) el TNP sigue siendo la “piedra angular del régimen internacional de no proliferación y desarme nuclear”, considerando que este tratado es un instrumento adecuado y suficiente para la no proliferación y el desarme nuclear. Consideran por tanto que el TPAN no es necesario, ya que existe el TNP.

Pero los hechos no apoyan la posición de Gobierno español. Además del despliegue de nuevas armas en Europa, el nuevo concepto Estratégico de la OTAN 2022, aprobado en Madrid el pasado verano, plantea que “la postura de disuasión y defensa de la OTAN se basa en una combinación adecuada de medios de defensa nuclear, convencional y antimisiles [...] y que daré todos los pasos necesarios para garantizar la credibilidad, eficacia, integridad y seguridad de la misión de disuasión nuclear”.

En definitiva, parece ser que solamente se defiende el TNP cuando se trata de imponer restricciones sobre el armamento nuclear a países de fuera de la órbita de la OTAN (a «los otros»), que cumplir con el TNP no es aplicable ni a los Estados Unidos ni a la OTAN, mientras ambos vuelven a enfatizar la disuasión y la amenaza nuclear. Por el contrario, la posición más segura, la posición que recogería mejor las aspiraciones ciudadanas de destruir completamente las armas nucleares, es la de que España decida adherirse al TPAN, que el Gobierno español asista a las reuniones de los Estados parte del TPAN, que muestre un verdadero apoyo a la desnuclearización.

* * *

Esta publicación es parte de una campaña de la Alianza por el Desarme Nuclear, que une a entidades de la sociedad civil a nivel estatal, con el objetivo de que España se adhiera al Tratado sobre la Prohibición de las Armas Nucleares (TPAN), que entró en vigor el 22 de enero de 2021.

[Fuente: [Público](#). Tica Font es miembro del [Centre Delàs](#) y [WILPF España](#)]

Nuria Alabao

Abortar es mejor que hacer trabajos forzados de reproducción

Asistimos a la enésima guerra de género protagonizada por Vox, el partido que hace fiestas de disfraces y las llama mítines. Estos días ha generado una disputa con el PP en el gobierno de Castilla y León utilizando el aborto como dinamita para pegar un toque a Núñez Feijóo: “Dices que no nos quieres de socios de gobierno, pues podemos ponerte difícil pisar la Moncloa”. La propuesta de terrorismo psicológico contra las mujeres que van a abortar, como hacer que oigan el latido del feto, o un tipo de ecografía que permite ver los rasgos de la cara —si el embarazo está suficientemente avanzado— parece difícil de implementar, o probablemente imposible bajo la legislación actual. Ni siquiera es una medida que se haya consensuado realmente con el PP, pero en las guerras culturales la verdad no importa.

En los matices se jugaba todo y no quedaba claro si los médicos estaban obligados a ofrecer escuchar el latido o solo era una opción. Sin embargo, sentimos la amenaza de que pudiese llegar a convertirse en un requisito obligatorio para las mujeres, como sucede en Hungría. Pero aquí estamos lejos todavía de que algo así pueda suceder: una mayoría muy consolidada apoya este derecho —más del 80% de los habitantes de España, [según IPSOS](#), aunque hay que señalar que esta aceptación ha caído cinco puntos desde 2014—. La nueva ley de interrupción del embarazo que está tramitando el Ministerio de Igualdad retira trabas hoy existentes como los tres días de reflexión o el sobre cerrado donde se informa de las ayudas a la maternidad a las que se puede optar.

Así, este debate es totalmente instrumental, ya que a Vox le sirve para perimetrar su espacio electoral ultra frente al PP, mientras que desestabiliza la estrategia de los populares que pretende arañar votos al PSOE por el centro. Los socialistas lo han pillado al vuelo y han salido con todo para llevar más lejos si cabe esta guerra, para profundizarla y darle espacio porque saben que les beneficia. Feijóo despertó, aunque tarde, y mientras que sus primeras dudas dejaron varios días de hecatombe mediática, ha acabado afirmando que el protocolo no se modificará. Su única resistencia ha quedado reducida a oponerse a que las jóvenes de 16-17 años puedan abortar sin consentimiento paterno.

Pero más allá de la agenda partidaria y sus líderes, las guerras culturales, o [las guerras de género](#) tienen una dimensión doble. Por un lado, son una táctica comunicativa que sirve para manejar agendas mediáticas y juegos de poder institucional. Así está funcionando en Europa del Este, por ejemplo, donde son funcionales a la conquista de las instituciones. Pero, además, estas cuestiones hacen emerger juegos de significantes, que es el material con que hacemos la cultura o resistimos, y entroncan con cuestiones centrales de nuestro ordenamiento de género. En este caso, los debates de estos días han sacado a la luz una serie de argumentos que remiten a un sustrato culpabilizador hacia las mujeres que abortan que, pese a todos los avances, todavía persiste. Y no solo en la derecha. Hay una defensa pretendidamente progresista del aborto que no se cansa de señalarlo como trauma, o de insistir en que es una catástrofe para las mujeres, que todas lo vivimos mal. Si no, ¿somos malas personas?

Abortar no es un trauma

“Dejad de decir que bastante duro es abortar porque parece que las que viven el aborto de otra forma son peores”, [decía una tuitera](#). En el mismo hilo se comentaba una experiencia que puede ser común a muchas mujeres que han interrumpido su embarazo según la comunidad, el centro médico o los profesionales que les hayan tocado: lo más traumático puede ser el propio proceso administrativo. “Tener que hacer algo que parece criminal o clandestino”, [señala](#). Es ahí donde los ultras trabajan con ahínco cuando no consiguen cambiar las leyes; su objetivo es obstaculizar ese derecho; ya sea con este tipo de obligaciones de terror psicológico —escuchar el latido del feto—, haciendo presión a los médicos para que se hagan objetores o poniendo trabas en el proceso, como mandar a las mujeres a abortar a otra provincia, algo que sucede habitualmente en España. De hecho, [Castilla y León es una de las CC. AA. que menos garantiza este derecho](#), donde muchas veces se tiene que pagar la sedación, viajar lejos de casa o donde muchas mujeres acaban optando —las que pueden— por pagarlo de su bolsillo para simplificar los trámites.

Aunque las mujeres, por diversos motivos, viven de manera diferente esta cuestión, abortar no tiene por qué ser traumático si el sistema de salud funciona. Lo que siempre es mortificante y conlleva consecuencias para toda la vida es obligar a las mujeres al trabajo de parto y de crianza no deseados. Si el feminismo ha insistido mucho en que los cuidados son trabajo no pagado, poner trabas al aborto tiene como objetivo forzar a las mujeres a hacer trabajos de reproducción, [como señala la feminista Sophie Lewis](#). Ser esclavas de nuestra capacidad de gestar y no sus dueñas. “Estar a favor del derecho a decidir es estar en contra de la vida forzada. El aborto es el rechazo del trabajo gestacional”, según Lewis. Millones de mujeres en todo el mundo se ven obligadas a dedicar parte de su vida a embarazarse, a parir —muchas veces con riesgo para su salud—, y a criar, quieran o no, haya o no las condiciones para ello, dejándose sus propias vidas por el camino. (Cada día mueren más de 800 mujeres en el mundo por complicaciones en el embarazo y el parto, [según la OMS](#).) Como también señala Lewis, a los antiabortistas les importa mucho la vida, pero solo las potenciales de los fetos, no las reales de las mujeres en cuyos cuerpos se alojan, cuyas vidas desarrolladas y plenas están en juego. No, las mujeres no tienen que seguir viviendo para otros por más que la misoginia siga proclamando ese principio.

El marco sigue siendo ese místico que envuelve a la reproducción y la propia idea de maternidad del orden tradicional de género. Pero una embarazada no es una madre, ni siquiera una futura. Nadie debería dar a luz involuntariamente. Y esta es una verdad que aflora por encima de todos los discursos que quieren culpabilizarnos por abortar, ya sean reaccionarios o socialdemócratas: da igual cuántas ayudas haya para las madres, o cuántas guarderías gratuitas existan, o si la vivienda es más accesible, todo ello mejorará la vida de las madres existentes, pero nada de ello justifica que una mujer dé a luz en contra de su propia voluntad. Abortar es bueno. Y tenemos que seguir proclamándolo frente a los discursos de culpabilidad y de arrepentimiento para poder enmarcar la cuestión dentro de la justicia reproductiva.

Siempre que pueden, los fundamentalistas llevan el debate a cómo se define o cuándo comienza la vida, pero de lo que se trata es de si una mujer embarazada puede decidir o no tener un hijo sin que esto la convierta en alguien que ha cometido un fallo, en alguien que tiene algo que esconder o incluso en una criminal —en los casos que quedan fuera de la ley—. Frente a las

argumentaciones que defienden el aborto desde un marco que refuerza la idea de error, de “último recurso”, de algo que tiene que ser “poco común”, tenemos que volver a situar la cuestión en un lugar positivo, en el ámbito de liberación de las mujeres —u hombres con capacidad de gestar en el caso de los trans—. La feminista [Laura Klein explica](#) precisamente que hasta los 70 se enfrentaban la defensa de la familia y la revolución sexual, la maternidad obligatoria frente a liberación de la mujer. Sin embargo, desde los 80 se impuso, tanto para condenar el aborto como para legalizarlo, el discurso de los derechos humanos, de manera que el marco liberal era el único pensable, donde los dos términos más prestigiosos de los derechos humanos —vida y libertad— se enfrentaban como opuestos. Los ultras nos llaman por eso asesinas.

Pero el marco de la defensa del aborto no es el marco de la muerte, como dicen los fundamentalistas, es el de la vida, no el de la vida biológica como absoluto, sino el de las vidas que merecen ser vividas. Además de la posibilidad de elegir no ser madres o no dar a luz —que no es lo mismo—, tenemos que poder elegir serlo si lo deseamos, y también criar y cuidar en entornos seguros, saludables y felices, como dicen las mujeres de [Sister Song](#). Todo ello define plenamente la justicia reproductiva, la libertad reproductiva, los marcos en los que debemos mover la defensa del aborto. Pero en la dimensión utópica que subyace a este planteamiento —donde imaginamos una sociedad que sería del todo diferente—, el decidir si dar o no a luz sigue siendo un paso inapelable, por eso abortar es bueno. Culpabilizar a las mujeres solo sirve para apuntalar nuestra función tradicional de personas obligadas a trabajos forzados de reproducción.

[Fuente: [Ctxt](#)]

Ernest Cañada y Nuria Alabao

Los cuerpos rotos de los empleos feminizados II: trabajadoras del hogar y los cuidados

Esta serie comenzó con un artículo sobre las enfermedades producidas por los trabajos feminizados, [en concreto sobre las condiciones de las camareras de piso](#). Una respuesta que se ha repetido en redes para deslegitimar esta perspectiva ha sido la de señalar insistentemente que los hombres también tienen enfermedades laborales e incluso que mueren más por accidentes laborales. Pero pensar el trabajo desde una perspectiva de género no implica negar otras realidades de la explotación, sino iluminar algunos aspectos que a menudo quedan opacados. Por ejemplo, el ámbito de los cuidados, a diferencia de otros, no se percibe como un trabajo duro o capaz de someter el cuerpo a una presión que conduzca a la enfermedad. De eso estamos hablando, y no solo nosotros, [lo acaba de señalar el Tribunal Supremo](#) en una sentencia donde afirma que en el Real Decreto dedicado a “Enfermedades provocadas por posturas forzadas y movimientos repetitivos en el trabajo” se produce discriminación por razón de género. La regulación recoge trabajos ejercidos mayormente por hombres —como pintores, escayolistas o mecánicos—, pero no otras profesiones feminizadas como las ligadas al sector sanitario y sociosanitario o la limpieza. Todas estas profesiones y otras muchas, sean ejercidas por hombres o mujeres pertenecientes a los estratos sociales más bajos, machacan el cuerpo y están relacionadas con la explotación que sufren los y las trabajadoras. El camino para combatirlo es también el mismo: la organización y la lucha colectiva. Las trabajadoras domésticas —[cerca de 600.000](#)— organizadas a través de muchos colectivos en España, ofrecen un buen ejemplo de estas luchas en un sector donde son especialmente difíciles: no hay presencia sindical en el lugar de trabajo, tampoco hay patronal, trabajan aisladas y la excusa de que el trabajo se desarrolla en la intimidad del hogar impide el control de las condiciones laborales.

Trabajo doméstico, trabajo migrante

El trabajo doméstico supone el pago de un salario por una actividad —la de reproducción social, “del hogar”— que la división sexual del trabajo había asignado tradicionalmente a las mujeres y que, por tanto, está muy desvalorizada socialmente. Hoy, una vez incorporadas la mayoría de las mujeres al mercado laboral, la solución europea —y especialmente española— a la falta de servicios socializados de cuidados ha sido la contratación de migrantes. Es decir, mujeres sometidas a un marco legal que las mantiene como mano de obra barata, y que hasta hace poco las había excluido de derechos fundamentales. La reciente reforma —el Decreto Ley 16/2022 para la mejora de las condiciones de trabajo y de Seguridad Social de las personas trabajadoras al servicio del hogar— ha mejorado algunos aspectos importantes: derecho a paro o a no ser despedida sin justificación con una indemnización irrisoria —doce días por año—. Pero aun así, todavía no se ha conseguido una equiparación total en derechos a los de cualquier otro sector. Este marco posibilita unas condiciones de trabajo que acaban enfermando a muchas mujeres. En las trabajadoras internas, la soledad y la tristeza imponen un sufrimiento psíquico que puede tener graves consecuencias. La infelicidad no cuenta como enfermedad profesional, pero también es una consecuencia de los trabajos más precarios y explotados, y enferma.

Una buena parte de ellas se encuentra además en una situación administrativa irregular, por lo

que están sometidas a abusos y una constante vulneración de derechos, especialmente quienes trabajan como internas. ([El reciente caso de una exconcejala del PP denunciada por su empleada mexicana](#), a la que quitó el pasaporte y no pagaba salario, apenas puede ocultar su nombre: trata doméstica. Hay muchos ejemplos en el sector.) A pesar de que para muchas mujeres sin papeles el trabajo doméstico es la única manera que encuentran de tener un empleo —o una vivienda— que les permita iniciar su estancia en España, suele convertirse en una situación asfixiante, de la que la mayoría querrían huir. “Hay veces que me angustia mucho estar encerrada. Me deprimó, me da mucha tristeza”, dice Cristina, procedente de Ecuador. Una cuestión que se repite en las declaraciones de la mayoría de las trabajadoras, como muestran los distintos testimonios recogidos en [el libro Cuidadoras](#). Y los bajos salarios no compensan tanto sacrificio: “Empecé trabajando por 600 euros por estar interna 24 horas. Y luego no es que me fueron subiendo, sino que cuando tuve los papeles empecé a ganar 750”, cuenta Marina de Honduras.

Las condiciones habituales son de enorme carga de trabajo en jornadas muy extensas, y no solo les pasa a las internas, aunque para ellas muchas veces ni siquiera se cumple el día de descanso. “Una persona empieza a trabajar a las siete de la mañana y son las doce de la noche y aún estás fregando platos”, asegura Aurora, de origen brasileño. En el caso de las trabajadoras externas, un problema añadido son los horarios partidos o intermitentes, en función de las necesidades de las personas atendidas, así como el tiempo de transporte entre una y otra casa, lo cual dificulta la conciliación con otras actividades, ya sean amistades o familia. “Muchas veces llego a mi casa a las once de la noche y me tengo que levantar a las seis de la mañana para ir a trabajar. A veces pienso que este trabajo está muy mal pagado, muy mal pagado por el servicio que hacemos. Es que ya no es cuidar a sus hijos, es hacer de cocinera, de costurera, la compra. Es todo, todo, todo. De enfermera para sus hijos, de todo, todo. Hacer el aseo a sus niños, cocinarles para el fin de semana. Limpiar cada día todo. El baño diario, toda la casa a diario”, explica Paz, trabajadora española.

Otro problema añadido son las malas condiciones en las que estas mujeres tienen que vivir y desempeñar su trabajo o el no disponer de un equipamiento en condiciones para desempeñar su trabajo, lo que las somete a mayores riesgos laborales. Isabel, de origen chileno, denuncia que las familias empleadoras no tienen en cuenta las necesidades específicas de sus tareas. “Son contadas las casas donde he tenido guantes para poder hacer una higiene”. Esto supone que trabajar en estas condiciones implique poner en riesgo su salud o que ellas mismas tengan que asumir el coste de los materiales necesarios, algo que en cualquier otro empleo parecería inadmisibile pero que aquí se ha normalizado.

Los problemas de salud físicos más habituales en este contexto tienen que ver con la carga de pesos sin equipos adecuados —por ejemplo, para movilizar a adultos dependientes—, la repetición de movimientos, las posibles caídas o la muy común —y de graves consecuencias— intoxicación por productos químicos de limpieza. La nueva reforma incluye por fin a las trabajadoras del hogar en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, aunque esto por sí solo no supone un gran cambio, ya que la inspección de trabajo no puede entrar en los hogares. La norma establece el derecho a recibir protección eficaz de la seguridad y salud laboral especialmente en el ámbito de la prevención de la violencia contra las mujeres. Pero [como explica Isabel Otxoa](#), de la Asociación de Trabajadoras del Hogar Bizkaia Etxebarrukoak, es difícil entender la jerarquización de los ámbitos de protección que pone por delante la violencia sexual frente a otras vulneraciones. “Pueden ser igualmente lesivas física y mentalmente la falta de

descanso, de privacidad del alojamiento, ausencia de vida social, insuficiente reconocimiento moral y salarial, y carencia de formación y medios para realizar el trabajo”, señala Otxoa.

Pero no son solo las enfermedades laborales, el cuerpo se resiente y la vida fuera del trabajo, también. “Me noto machacada físicamente, llego a casa muchas veces con ganas nada más que de acostarme, muchas veces me llaman: ¡venga sal! ¡Salimos el fin de semana! Pero es que no puedo con mi alma, necesito descansar el fin de semana. Es un trabajo físico muy exigente. Luego para volver a mi casa tengo dos horas más de transporte. Dos horas de ir y dos horas para volver. Yo con este trabajo dispongo de muy poco tiempo para dedicarme a otras actividades que me llenen y que me hagan crecer un poco como persona”, explica Paz.

La tristeza enferma

Las condiciones y el trato que reciben puede variar enormemente según sea la familia con la que están. “A veces recibimos humillaciones, porque hay familias —yo creo que una mayoría— que piensan que tener a una empleada del hogar es tener a una criada como antiguamente, que estamos para todo, para todo”, explica Paz. Esto puede hacer que las quejas se concentren en la falta de contrato, los bajos salarios o la falta de derechos derivados del actual marco legal, o ahonden en una serie de problemas cotidianos que pueden hacer su vida muy complicada.

En algunos domicilios, y en especial cuando las trabajadoras son internas, el acoso sexual, el abuso de poder o las humillaciones pueden convertirse en una realidad cotidiana. Desde las asociaciones de trabajadoras también se reportan numerosas situaciones de acoso sexual, en especial de internas. En ocasiones hay trabajadoras que describen también relaciones de maltrato verbal, con insultos y humillaciones, que puede adquirir un carácter racista.

Algunas trabajadoras cuentan que las obligaban a comer alimentos en mal estado o en cantidad insuficiente. “Entonces tendemos a ganar peso, por el estrés de no salir de la casa, y porque por la poca comida que nos dan se tiende a comprar bollería para aliviar el hambre”, dice Judith, de origen boliviano. Por una vía u otra, la cuestión de la alimentación de las trabajadoras del hogar internas acaba convirtiéndose en un tema crítico.

El cuidado a personas mayores en el hogar supone también enfrentar de forma regular la relación con el sufrimiento y la muerte, que implica una fuerte carga emocional en su quehacer cotidiano. “Yo trabajo por dinero, porque tengo necesidad —explica Mariana—, pero me dedico mucho, pongo todo mi corazón, toda mi alma. Pero nunca se está contento. Lo levantas de la cama y lo ves sufriendo, llorando, con dolor, sin dormir. Compartes todo con él”.

Para las trabajadoras, el fallecimiento de las personas que atienden supone dos tipos de problemas. Por una parte, tienen que asumir la pérdida de personas con las que en ocasiones entablan una relación de afecto, a las que han podido cuidar por años. “Psicológicamente intento separar el trabajo del cariño, que esto es trabajo, pero hay días que me entra por pensar si se muere la yayi, y es difícil. No sé si para todo el mundo, pero es difícil, porque te encariñas”, relata Mirna. Pero a su vez, este fallecimiento supone también la pérdida de su empleo. Al fallecer la persona después de años de dedicación, se encuentran en paro con una indemnización de un solo mes de salario, independientemente de su antigüedad. Además, sus salarios son muy bajos, y como tienen que hacer frente a las necesidades de sus familias en sus países de origen, su capacidad de ahorro es limitada. Esta situación las aboca a que inmediatamente después del

fallecimiento de la persona a la que están cuidando tengan que buscar un nuevo empleo, sin tiempo para pasar el duelo. “Afecta, no se soporta –dice Aurora–, pero tenemos que seguir trabajando, enseguida tenemos que irnos para otra casa. Eso me sucedió con el último que se fue, que fue muy seguido de otro, dos muertes en poco tiempo. Entonces pasé un mes sin buscar trabajo, no podía”.

Cadenas globales de cuidados

Además, muchas tienen a su familia lejos porque vinieron a trabajar para conseguir recursos para mantener o mejorar la vida de sus hijos. A la situación de criar a los hijos de otros —cuya relación siempre estará mediada por la necesidad de los padres de esta ayuda—, se suma la tristeza de tener a los propios fuera. A pesar del enorme esfuerzo y sacrificio, la distancia y el tiempo pueden jugar en su contra y dificultar o tensionar estas relaciones con sus seres queridos; pasan a ser “la mujer que manda dinero”, ni mamá ni nada, mujer-dinero. Y esto es muy duro de sobrellevar. O, por el contrario, a sus hijos les cuesta entender los sacrificios que han hecho y que les reclaman no haber estado presentes a lo largo de su vida. Incluso cuando logran traerlos, sus condiciones de trabajo, con las largas jornadas, a las que se suma el agotamiento físico y las condiciones de vida precarias, provocan que no puedan dedicarles suficiente tiempo. Estas dificultades de relación con los hijos, logren traerlos o no, redundan en una mayor sensación de soledad y sufrimiento.

La emigración y la incorporación a una nueva sociedad sin redes familiares o de amistad suficientes, sumadas a un trabajo que es muy aislado, y más si se realiza como interna, generan un problema añadido para estas trabajadoras: la soledad. Así, Mariana explica: “A mí me gustaría irme con mis hijos, pero mis hijos ahora son grandes. Entonces también estoy sola, es muy dura la soledad, no tienes con quién comer, con quién hablar”. Cuando el trabajo ocupa la mayor parte de la vida, es casi inevitable sufrir consecuencias negativas para la salud y muy difícil conseguir el tiempo —una baja, por ejemplo— o la atención necesaria para cuidarse a una misma. Para las trabajadoras domésticas siempre hay necesidades de otros que se han de cubrir. La falta de tiempo o recursos para llenar de sentido la vida más allá del trabajo, la lejanía de los seres queridos, a veces el maltrato que sufren, la explotación, y unas nuevas relaciones que a veces parecen familiares, pero que en realidad están mediadas por la necesidad de un salario pueden generar mucho sufrimiento psíquico y hacer peligrar la salud mental. “Es triste porque si no estás feliz tampoco puedes tener buena salud”, dice Jamileth, de origen nicaragüense. De ahí la necesidad de construir nuevos lazos de confianza, apoyo, o familias elegidas que se generan en distintos espacios de organización de las mismas trabajadoras. Organizarse también es estar juntas frente a la soledad. El potente movimiento asociativo de las trabajadoras del hogar es también eso, reconstrucción de lazos de solidaridad y cuidado de las que cuidan.

[Fuente: [Ctxf](#)]

La Biblioteca de Babel

Lucha de clases, franquismo y democracia Obreros y empresarios (1939-1979)

Akal Madrid 2022 414

Francesc Bayo

En los análisis históricos sobre la evolución de la dictadura franquista y de la transición a la democracia en España que se han inspirado en las teorías de la modernización, se han generado unas imágenes estereotipadas respecto a la forma en que se fraguaron los cambios y las transformaciones sociales en todo ese proceso, donde se ha destacado la primacía del papel de unas élites a las que se les adjudica el liderazgo y la conducción del mismo. Estas hipótesis se inspiraron en varias construcciones teóricas que en su momento fueron consideradas incontestables, entre ellas las del politólogo Samuel Huntington, donde fundamentalmente se establecía una especie de marco general de validez universal que amalgamaba la modernización económica con la emergencia de una sociedad de consumo de la que participaban tanto las clases medias como los trabajadores, y a partir de ahí la democracia tenía una base para germinar. Por otro lado, también hubo estudios donde se intentó hacer una distinción de marcos institucionales diferenciados entre regímenes totalitarios y autoritarios, entre los que destacaron los trabajos del politólogo Juan Linz sobre la adaptación de estas teorías al caso español, donde se suponía que había una especie de pluralismo competitivo pero controlado entre las diferentes familias políticas del régimen franquista.

Una consecuencia de todo ello es que de ese modo se establecía una explicación de un proceso de transición español que se podía calificar como evolucionista, desde un franquismo en mutación hasta una democracia ordenada, donde los cambios se produjeron bajo la égida de unos sectores sociales más o menos próximos al poder que cambiaron de un régimen a otro, propiciando un tránsito de la dictadura a la democracia que se llegó a calificar de modélico y exportable. Otra consecuencia de este relato es que se minusvaloraba o incluso se eclipsaba el papel de una parte importante de las fuerzas antifranquistas, y en particular de la acción colectiva desarrollada por el movimiento obrero organizado, al que se consideraba liquidado a partir de la derrota en la guerra civil y también por la dura persecución y represión durante la posguerra. En definitiva, mediante la exaltación de una determinada senda reformista se pretendía no sólo tratar de ocultar las capacidades transformadoras de un movimiento obrero que cada vez mostraba una mayor capacidad de organización, sino también despojarlo de alguna manera de cualquier protagonismo activo en todo ese proceso de transición a la democracia.

En este libro de Xavier Domènech, que tiene como base otro libro anterior suyo sobre la misma temática y donde a la vez incorpora las aportaciones de otros historiadores, el fundamento más importante que plantea es la necesidad del análisis del conflicto en el desarrollo de los procesos históricos, y en concreto se propone enfatizar el análisis del conflicto derivado de la lucha de clases, donde confluye la confrontación de intereses de los trabajadores y de los empresarios. En el caso español y durante la época analizada en el libro, la evolución de ese conflicto entre el trabajo y el capital propició un aumento de la organización del movimiento obrero, que a su vez tuvo que hacer frente al régimen franquista, bajo el que se estuvieron amparando los empresarios que se beneficiaron de las políticas del franquismo favorables a sus intereses. Ese empresariado, que ya venía operando con anterioridad en el marco represivo del régimen franquista contra los

trabajadores desde la posguerra, y luego consolidó su hegemonía económica al abrigo de las políticas del desarrollismo español de finales de los años cincuenta hasta los setenta, no consiguió ese predominio mediante grandes cambios tecnológicos ni de aumentos de la productividad, ya que la base de acumulación del capital se asentó en un fordismo primario que se aprovechó de los bajos salarios y de la disciplina laboral que les permitió el franquismo, además del proteccionismo económico que disfrutaron.

Sin embargo, a pesar de la pérdida que supuso la dura represión de la posguerra, el movimiento obrero organizado que emergió con fuerza en los tiempos del desarrollismo de los años sesenta no resurgió de la nada, sino que más bien se produjo una reconstrucción mediante la transmisión de una memoria de la cultura obrera entre los trabajadores, que reconectó con los principios y los valores que se habían fraguado en los tiempos de la República y aún antes. Este hecho es otro de los hallazgos interesantes del análisis de Domènech, donde se percibe que las migraciones interiores contribuyeron a diseminar esa conciencia obrera heredada, ya que esos movimientos de población no sólo constituyeron una migración económica, sino que a su vez implicaron una especie de desbandada de refugiados políticos que huían de unos entornos de miseria económica pero también de persecución política. Todo esto propició que en los lugares de llegada se produjera una conexión ideológica entre gentes que se reconocían en unos valores de clase y en unas prácticas solidarias, y de ese modo se fraguaron los cimientos del potente resurgir del movimiento obrero organizado en aquellos territorios donde la industrialización del desarrollismo franquista había avanzado bastante más: en concreto Catalunya, el País Vasco y también el cinturón industrial de la ciudad de Madrid, predominantemente.

Como consecuencia de todo ello, se produjo una evolución con unos momentos cambiantes en los equilibrios de poder en el conflicto de clases entre el empresariado y el movimiento obrero en el marco del franquismo, que se manifestaron en diferentes oleadas de huelgas entre 1956 y 1962 para tratar de conseguir mejoras salariales, y que asimismo acabaron induciendo a la introducción de algunos cambios en la legislación laboral, como la ley de Convenios de 1958 que se aplicaría con mayor amplitud a partir de 1962. En función de los cambios introducidos por este proceso mediante el cual el movimiento obrero organizado fue consiguiendo algunos avances, Xavier Domènech reivindica la importancia del papel de la acumulación de fuerzas organizativas y de la extensión de las acciones solidarias que coadyuvaban a reforzar la acción colectiva. En definitiva, mediante el análisis de los conflictos que nunca desaparecieron del todo se observa que contrariamente a lo que usualmente se ha querido presentar como concesiones del régimen franquista a medida que las políticas desarrollistas seguían su curso y consolidaban una cierta modernización, al abrigo del interés del franquismo por cambiar la legitimidad de vencedores de la guerra por otra legitimidad que se quería asentar en la llamada "paz social", en realidad lo que se acabó produciendo fueron unos avances logrados mediante la lucha obrera porque ni el régimen ni los empresarios estaban dispuestos a ceder a priori ninguna concesión social. Al contrario, a medida que se hizo más patente el activismo de los movimientos sociales de oposición al franquismo, entre los cuales el movimiento obrero jugó un papel destacado, la postura del régimen se endureció por momentos y la persecución política se mantuvo incólume.

De todos modos, a la hora de definir lo que hoy día llamaríamos una ventana de oportunidades, sí que se puede establecer una confluencia entre el momento de la modernización económica y el incremento del activismo y la capacidad organizativa del movimiento obrero. Además, las políticas desarrollistas del franquismo contaron con el beneplácito del gobierno de Estados

Unidos y del Banco Mundial, junto con una mayor apertura comercial y de inversiones norteamericanas y de algunos países europeos. En ese contexto, el régimen franquista necesitaba presentar una imagen internacional más aperturista y además fiaba su nueva legitimidad al éxito del intento de creación de una “nueva sociedad” basada en la efectividad del corporativismo, donde el conflicto de clases se pudiera soslayar aumentando algo la variedad del consumo y un poco el bienestar de la población. Sin embargo, no se puede establecer una mera conexión mecánica economicista en todo el proceso descrito anteriormente y mucho menos considerar que el activismo obrero surgido a partir de los años sesenta era de nuevo cuño, y decir que se había producido una disrupción entre la cultura obrera que creció durante la República y antes con respecto al movimiento obrero que emergió con fuerza en esos momentos. Al contrario, precisamente lo que se puede constatar es que fracasaron las pretensiones del franquismo de disciplinar a la clase trabajadora en la Organización Sindical Española (OSE), que era un mecanismo puramente fascista de encuadramiento corporativo donde se unificaba a trabajadores y empresarios en un mismo esquema vertical, porque lo que finalmente acabó emergiendo fue un movimiento obrero organizado que ejercía de oposición al régimen y en varios momentos con su activismo le llegó a disputar una parte de su hegemonía en el espacio laboral.

Además, con el desarrollo organizativo y con la acción colectiva que puso en práctica ese movimiento obrero, se fue fraguando una confluencia entre la conflictividad para obtener unas mejoras económicas y a la vez la conflictividad de carácter más político derivada de la confrontación al régimen para forzar un cambio. Una muestra importante fue el éxito de la infiltración de trabajadores miembros de la oposición sindical en las organizaciones del sindicato vertical franquista, donde se llegaron a ganar muchos puestos de enlaces sindicales y jurados de empresa desde principios de los años sesenta, a pesar de que las elecciones estaban muy controladas por el régimen. Asimismo hubo una confluencia de luchas en lo que se ha denominado la tríada de movimientos sociales antifranquistas, donde se produjo una agrupación de fuerzas entre el movimiento obrero junto con el estudiantil y el vecinal. Este fenómeno se reforzó porque se compartían unos intereses similares de clase, que a menudo podían confluir en un mismo sujeto social que a la vez podía ser un activista obrero, estudiantil y vecinal, con el resultado de una especie de confluencia conjunta de la acción colectiva donde las luchas por una mejora en la distribución primaria (salarios y condiciones laborales), se aunaban a las demandas por una redistribución secundaria en favor de unos beneficios sociales (salud, educación, vivienda, transporte público, infraestructuras públicas en los barrios...). Además, junto con los cambios sociales producto de la modernización económica que propiciaban otras demandas de consumo y bienestar, se estaban produciendo unos recambios generacionales con mayores grados de educación y que se alimentaban tanto de la cultura obrera heredada como de los nuevos conceptos ideológicos vinculados a las mejoras sociales que se recogían de los modelos de bienestar europeos más avanzados. En definitiva, estos movimientos sociales asumieron un rol protagónico muy activo en el proceso de confrontación al régimen franquista, principalmente porque a medida que crecía la conflictividad se alimentaba y se reforzaba el activismo, así que a su modo estos movimientos sociales condicionaron la ruta que siguió el cambio político que condujo a la transición democrática en España.

En ese contexto de la conflictividad que refuerza el activismo y la organización, otro de los ámbitos relevantes del análisis de Domènech se centra en la confluencia de principios, intereses y valores de dos tradiciones de pensamiento que a priori podríamos considerar muy alejadas, como son el socialismo que preconizaban el Partido Comunista de España (PCE) y el Partit

Socialista Unificat de Catalunya (PSUC), y el pensamiento social emanado de los católicos reformistas que asumieron los principios del Concilio Vaticano II, y que se organizaron en torno a la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC). Una muestra de esa confluencia fue la participación conjunta en muchas ocasiones en las incipientes Comisiones Obreras a lo largo de los años sesenta, que fueron uno de los gérmenes organizativos más potentes del futuro sindicalismo español en el transcurso de la España democrática surgida de la transición. Otro detalle es que desde estos dos espacios de pensamiento y acción no sólo se acabaron consolidando las bases que alimentaron la militancia de algunas formaciones políticas y sindicatos de izquierda que tuvieron un impacto relevante ya en democracia, sino que de su seno surgieron también luego muchos militantes que engrosaron las filas de las organizaciones de extrema izquierda.

Con el tiempo y tras la muerte de Franco, la fortaleza derivada anteriormente de la conflictividad se canalizó hacia la negociación de la construcción política de la democracia en ciernes, y en esa tarea el protagonismo lo asumieron los partidos políticos que engrosaron las instituciones que se iban creando. La participación electoral pasó entonces a ser la vía preponderante de la canalización de las expectativas y de los conflictos sociales, y los resultados de las elecciones establecieron el baremo de las correlaciones de fuerzas. Aunque este apartado está poco desarrollado en el libro, Domènech apunta que en el paso del “poder de la calle al poder de los despachos” se perdieron sinergias poderosas generadas por el activismo de los movimientos sociales, y a la vez se produjo una especie de reversión en los equilibrios de poder que habían existido entre la amplia amalgama de las fuerzas antifranquistas, realizándose aquellos proyectos de carácter más marcadamente reformista. De ese modo sugiere que a través del proceso de institucionalización se propició un espacio de encuentro para canalizar los conflictos derivados de la variedad y confrontación de intereses, donde se acabó generando una cierta forma de conllevancia con el proyecto de la clase burguesa empresarial.

Una mención aparte la merecen los dos últimos capítulos del libro, donde se repasa el papel de los empresarios durante el franquismo y luego su mutación para desprenderse de ese pasado privilegiado, que les había permitido mantener un modelo de acumulación capitalista fundamentalmente asentado en el proteccionismo, en los bajos salarios y en las políticas laborales represivas del franquismo para disciplinar a los trabajadores. Como continuidad de otros trabajos historiográficos, entre los que cabe destacar los de Carme Molinero y Pere Ysàs, Xavier Domènech sostiene que el franquismo fue un régimen de clase y en él los empresarios no fueron unos “privilegiados impotentes” que tuvieron que someterse a los designios de las políticas del Caudillo, como argumentaban Juan Linz y Amando de Miguel, sino que más bien tuvieron una gran capacidad de veto y de hecho la ejercieron. A diferencia de los trabajadores, que sí tuvieron que sufrir el control del régimen que los encuadraba en el Sindicato Vertical y no les permitió ningún margen de autonomía, los empresarios, aunque tuvieron que estar nominalmente en ese mecanismo corporativo, lograron gozar de numerosos privilegios y una gran autonomía tanto organizativa como en la toma de decisiones. Entre las muchas organizaciones de diferentes sectores industriales, comerciales y financieras que operaban al margen del corporativismo del régimen, se podría destacar como ejemplo notorio el papel del Consejo Superior Bancario, una institución surgida en 1921 de la ley de Bancos de Cambó, que fue recreada bajo el amparo de la ley de Ordenación Bancaria de 1946, y sus informes fueron vinculantes en la regulación del sector durante el franquismo.

En consecuencia, la mayoría de esas organizaciones empresariales transmutaron del franquismo a la democracia prácticamente sin cambiar ni el nombre, ni la razón social y ni siquiera los dirigentes. Otro argumento relevante de Domènech para certificar el aprovechamiento del régimen franquista por parte de los empresarios es que no surgió la necesidad de organizar a los empresarios en una patronal unificada y de gran envergadura hasta la muerte del dictador y en la antesala de la transición, sobre todo por la perspectiva de tener que hacer frente a la fuerza organizada del movimiento obrero opositor, que en las elecciones sindicales del 1975 ya desbordó el corsé del Sindicato Vertical. Todo ello da a entender que hasta ese momento no se había considerado necesario o al menos no hizo falta aumentar el potencial organizativo empresarial para prepararse con vistas a una eventual confrontación con las organizaciones de los trabajadores, porque la hegemonía empresarial en el marco de un régimen de clase favorable a sus intereses no estuvo cuestionada. Pero a partir de entonces la realidad era que, en un contexto con un régimen huérfano de liderazgo tras la muerte de Franco, y en medio de las crisis económicas inflacionistas de mediados de los setenta y con algunos desarmes arancelarios acordados con la CEE, la fuerza del activismo sindical había conseguido por primera vez en años revertir el equilibrio desfavorable al trabajo frente al capital. Así se consiguieron subidas salariales que afectaron directamente a los beneficios empresariales, porque a causa de la inflación no podían repercutir totalmente esos aumentos de los costes laborales en los márgenes de precios, y entonces los empresarios atisbaron que necesitaban fortalecerse para no perder poder negociador con el Estado democrático emergente y con los trabajadores, y así se unieron en torno a una patronal de patronales (lo que acabó siendo la CEOE).

Sin embargo, a pesar de la necesidad de esa unificación empresarial, el proceso se encontró con varios escollos organizativos y algunas pugnas de poder que crearon muchas dificultades. Tampoco era sólo una cuestión de falta de organización, sino que los nuevos tiempos demandaban otro modo de acción empresarial que permitiera modernizar los mecanismos de control social que darían una nueva forma a la reproducción de la hegemonía de las élites burguesas. En estos dos ámbitos de unificación y modernización fue bastante relevante el papel de los empresarios catalanes y de algunas de sus organizaciones de mayor raigambre, como la Cámara de Comercio o el Fomento del Trabajo Nacional, junto con otro tipo de organizaciones de creación más reciente, como el Círculo de Economía, que representaba una cierta vanguardia de ideas de reemplazo para seguir manteniendo la hegemonía y el control de la burguesía sobre el proceso de reproducción social que se siguió originando en la España ya democrática. Este tránsito español en el modelo de reorganización de las clases dominantes también se vio favorecido por los nuevos aires neoliberales que ya se estaban fraguando en el contexto internacional del momento, tanto para hacer frente al poder derivado del activo movimiento sindical organizado en los países occidentales, como a las demandas de algunos países del Tercer Mundo para establecer un Nuevo Orden Económico Internacional, que devino en lo que se acabó llamando “globalización”.

23 1 2023

Foro de webs

El colosal aumento del presupuesto militar del Estado de 2023

El mito del 2% del gasto en Defensa queda superado

Centre Delàs d'Estudis per la Pau

A continuación se reproduce el Resumen Ejecutivo del Informe del Centre Delàs, n.º 58 coordinado por Pere Ortega y elaborado por el propio Ortega, Xavier Bohigas y Xema Moya. Puede consultarse el informe completo [en este enlace](#).

* * *

En la propuesta del gobierno de Presupuestos Generales del Estado Español para 2023, el presupuesto del Ministerio de Defensa se incrementa un 26,31 % con el objetivo de alcanzar el 2 % del PIB en 2029. Este fue un compromiso adquirido por el presidente Pedro Sánchez tras la Cumbre de la OTAN de junio de 2022. Pero la realidad es que estos presupuestos de 2023 ya superarán en 17 décimas el susodicho 2 % del PIB. La diferencia radica en el hecho de que hay partidas militares que no se encuentran enclavadas en el Ministerio de Defensa, y están repartidas por otros ministerios.

Según el criterio del gobierno español, el importe destinado al conjunto del Defensa será de 14.453,8 millones de euros. Esta cantidad incluye las partidas del mismo Ministerio; la de los Organismos Autónomos militares y la del Centro Nacional de Inteligencia. Pero de acuerdo con lo que aconseja la OTAN con el objetivo de homologar el gasto militar los criterios de todos los países miembros, también se deben añadir las clases pasivas militares (4.015 M€); la Guardia Civil, como cuerpo militarizado (3.672 M€); los créditos en I+D asignados al Ministerio de Industria (1.601 M€) destinados a empresas militares para producir nuevos armamentos; la mutua militar ISFAS (700 M€); las pensiones de guerra (81 M€); las aportaciones a organismos militares internacionales desde Asuntos Exteriores como la misma OTAN (236 M€).

Pero, además, desde el Centre Delàs añadimos las diferencias existentes entre las cantidades presupuestadas inicialmente, cuando se aprueban los presupuestos, y las ejecutadas a final de año y que siempre superan los mil millones, en su mayoría destinadas a sufragar las misiones militares en el exterior. Y que este año, haciendo la media de los últimos cinco años, alcanzarán los 1.449 M€. Pero todavía hay otro gasto, el que corresponde a los intereses de la deuda pública, pues si el Estado se endeuda para llevar a cabo inversiones militares, es lógico que la parte proporcional de esa deuda correspondiente a Defensa se compute como gasto militar (1.409 M€). Entonces, el gasto militar que el Estado español destinará en 2023 alcanza la colosal cifra de 27.617,45 millones; cosa que equivale a 75,7 millones diarios o a 582 euros anuales por habitante y entonces alcanza el 2,17 % del PIB.

Si extrapoláramos a 2029, la fecha propuesta por el Gobierno para alcanzar el 2% del PIB en gasto militar solo con las partidas asignadas al Ministerio de Defensa, y sumando los créditos repartidos por otros ministerios y no incluidos, darían un total de gasto militar que sobrepasaría los 40.000 millones anuales en 2029.

Sobre el mito de alcanzar el 2% del PIB en gasto militar, se debe precisar que no existe ningún canon, ni modelo que demuestre que la seguridad de un Estado se pueda conseguir mediante el supuesto de destinar el 1%, el 2%, o el 20% del PIB. Sino que es un tope propuesto por Estados Unidos para que sus socios europeos en la OTAN adquieran más capacidades militares que, en primera instancia les favorece, pues por algo EEUU son la primera potencia en producción de armas y los países de la OTAN sus principales clientes.

El incremento más abultado del gasto militar propuesto para 2023 es el dedicado a inversiones militares con casi un 30 % (29,88 %) sobre el total de inversiones del Estado central (sin contar las inversiones en las comunidades autónomas). En total se destinarán 7.743 millones que incluyen los 1.843 millones en I+D en nuevas armas, que comparados con los 25.913 millones que el Estado central dedicará a inversiones representa que tres de cada diez euros del Estado central se destinarán a inversiones militares. En su mayoría destinados a pagar a las empresas militares los compromisos adquiridos con los grandes Programas Especiales de Armas, a los que se destinarán 4.901,7 millones, más 367,2 millones a la adquisición de repuestos y la modernización de las armas existentes, y 631 millones a la modernización de infraestructuras, instalaciones y comunicaciones militares.

El siguiente y más escandaloso aumento es el aplicado a créditos de I+D del Ministerio de Industria que crece en un 126,09 %; es decir, duplica y más los 708,20 M€ de 2022 hasta los 1.601,15 M€ propuestos para 2023. Todos ellos destinados a pagar a las empresas militares estatales como Navantia o Indra, o internacionales como Airbus, Santa Bárbara / General Dynamics o Boeing.

Para analizar y demostrar el brutal incremento de gasto en defensa que se propone, solo hace falta compararlo con los ministerios del ámbito social. Estos tienen un incremento en 2023 por encima de la inflación subyacente de 2022, con incrementos importantes en Derechos Sociales, 17%; Cultura, 15,9%; Clases pasivas, 13,9%; Seguridad Social, 12,9%; e Inclusión, Seguridad social y Migraciones, 12,9%. Pero ningún ministerio alcanza un aumento tan destacado como el experimentado por el Ministerio de Defensa que aumenta, como ya se ha señalado, el 26,3%, mucho más que los de tipo social, y pone en evidencia el supuesto Presupuesto social del que alardea el Gobierno de coalición PSOE / Unidas Podemos.

Esta no es una afirmación gratuita, como ya hemos analizado en numerosos escritos anteriores del Centre Delàs, y también han indicado prestigiosos analistas de Estados Unidos. Se debe volver a recalcar que el gasto militar es, desde el punto de vista económico y social, destructivo en riqueza, pues los recursos destinados a la producción de armas representan una pérdida de oportunidad. Y en ese sentido destruyen economía productiva, la real, pues las armas no son bienes de consumo que circulen en el mercado (ningún ciudadano se puede comprar un tanque). Pierden su valor social porque solo las adquieren los Estados, y, en cambio, producen endeudamiento público, debido a las grandes inversiones que necesitan. También generan déficit fiscal, pues esas inversiones no reciben contraprestaciones fiscales y acaban produciendo inflación. Inversiones en armamentos que se justifican por parte del Gobierno español porque crean empleo, cuando existen rigurosos estudios que afirman lo contrario, que en el ámbito civil esas inversiones crearían más empleo y de mejor calidad.

Campañas

Llamamiento para la manifestación del 25 de febrero de 2023

Paseo de Gracia de Barcelona,

esquina calle Provenza, 17 horas

Solidaridad con el pueblo ucraniano y con las víctimas de todas las guerras. Pedimos un alto el fuego, el retorno a la mesa de negociaciones y la prohibición de todas las armas nucleares.

* * *

La invasión de Ucrania por Rusia constituyó una clara violación del derecho internacional. Esta devastadora guerra está provocando miles de víctimas, destrucción de infraestructuras civiles, más de ocho millones de refugiados ucranianos repartidos por toda Europa y una crisis ambiental, energética y social con consecuencias planetarias que afectan sobre todo a los países más pobres.

La guerra de Ucrania se añade a la trentenena de guerras y conflictos abiertos que hay actualmente en el mundo. La humanidad y el planeta no pueden aceptar que las disputas se resuelvan mediante el recurso a las armas, las bombas y las matanzas. La guerra es una derrota de la humanidad. Es un camino sin retorno que deja a los países peores de como los encontró. ¡Es una vergüenza!

La sociedad civil de Cataluña ha madurado una larga tradición pacifista y en el pasado ha organizado grandes manifestaciones por la paz. Las entidades reunidas a favor del llamamiento CATALUÑA POR LA PAZ* queremos hacer sentir nuestra voz en solidaridad con el pueblo ucraniano y con todas las víctimas de todas las guerras y, en especial, con los colectivos más desprotegidos, como las mujeres, los niños o la clase trabajadora en general a la que se está precarizando todavía más en nombre de la guerra. Pedimos un alto el fuego y la creación de una mesa de negociaciones para salvar vidas y para detener la devastación de Ucrania. Al mismo tiempo, exigimos la prohibición de todas las armas nucleares.

La guerra de Ucrania debe detenerse inmediatamente. ¡Basta de sufrimiento, basta de muertos, basta de destrucción! La paz es el futuro.

Las instituciones de nuestro país y los estados miembros de la Unión Europea, conjuntamente con Naciones Unidas, deben tener un rol más activo y deben asumir la responsabilidad de impulsar unas negociaciones, detener la escalada militar y conseguir un alto el fuego inmediato. Es urgente trabajar para una solución política al conflicto y, mientras tanto, garantizar la acogida y la ayuda humanitaria a las personas refugiadas.

Se deben poner todos los recursos y medios de la diplomacia para hacer prevalecer el respeto al derecho internacional y reunir los representantes de todos los gobiernos implicados para que sea posible una paz justa. Hay que retornar al modelo de seguridad compartida y conseguir el

compromiso de todos los estados de eliminar las armas nucleares, reducir el gasto militar para librar recursos a favor de las inversiones necesarias para luchar contra la pobreza, para financiar la transición ecológica y el trabajo digno.

Reclamamos que nuestras instituciones asuman esta agenda de paz y trabajen en todos los foros europeos e internacionales para su realización.

¡POR LAS VÍCTIMAS Y EL PUEBLO UCRANIANO: ALTO EL FUEGO INMEDIATO, SOLUCIÓN PACÍFICA AL CONFLICTO Y PROHIBICIÓN DE TODAS LAS ARMAS NUCLEARES!

Barcelona, enero de 2023

* CATALUÑA POR LA PAZ agrupa a Plataforma Aturem la Guerra, Plataforma por la Paz No a las guerras OTAN NO, Comunitat de Sant Egidi, Open Arms, Fundipau, Centre Delàs d'Estudis per la Pau, Marx 21, Sodepau, Ecologistas en Acció, Marea Pensionista, CIEMEN, ATTAC, UGT, CC. OO., ERC, Òmnium Cultural, EaCAT, AIREs y Anticapitalistas.

31 1 2023

...Y la lírica

Nicanor Parra

Manifiesto

Señoras y señores
Ésta es nuestra última palabra.
—Nuestra primera y última palabra—
Los poetas bajaron del Olimpo.

Para nuestros mayores
La poesía fue un objeto de lujo
Pero para nosotros
Es un artículo de primera necesidad:
No podemos vivir sin poesía.

A diferencia de nuestros mayores
—Y esto lo digo con todo respeto—
Nosotros sostenemos
Que el poeta no es un alquimista
El poeta es un hombre como todos
Un albañil que construye su muro:
Un constructor de puertas y ventanas.

Nosotros conversamos
En el lenguaje de todos los días
No creemos en signos cabalísticos.

Además una cosa:
El poeta está ahí
Para que el árbol no crezca torcido.

Este es nuestro mensaje.
Nosotros denunciaremos al poeta demiurgo
Al poeta Barata
Al poeta Ratón de Biblioteca.
Todos estos señores
—Y esto lo digo con mucho respeto—
Deben ser procesados y juzgados
Por construir castillos en el aire
Por malgastar el espacio y el tiempo
Redactando sonetos a la luna
Por agrupar palabras al azar
A la última moda de París.
Para nosotros no:
El pensamiento no nace en la boca
Nace en el corazón del corazón.

Nosotros repudiamos

La poesía de gafas oscuras
La poesía de capa y espada
La poesía de sombrero alón.
Propiciamos en cambio
La poesía a ojo desnudo
La poesía a pecho descubierto
La poesía a cabeza desnuda.

No creemos en ninfas ni tritones.
La poesía tiene que ser esto:
Una muchacha rodeada de espigas
O no ser absolutamente nada.

Ahora bien, en el plano político
Ellos, nuestros abuelos inmediatos,
¡Nuestros buenos abuelos inmediatos!
Se retractaron y se dispersaron
Al pasar por el prisma de cristal.
Unos pocos se hicieron comunistas.
Yo no sé si lo fueron realmente.
Supongamos que fueron comunistas,
Lo que sé es una cosa:
Que no fueron poetas populares,
Fueron unos reverendos poetas burgueses.

Hay que decir las cosas como son:
Sólo uno que otro
Supo llegar al corazón del pueblo.
Cada vez que pudieron
Se declararon de palabra y de hecho
Contra la poesía dirigida
Contra la poesía del presente
Contra la poesía proletaria.

Aceptemos que fueron comunistas
Pero la poesía fue un desastre
Surrealismo de segunda mano
Decadentismo de tercera mano,
Tablas viejas devueltas por el mar.
Poesía adjetiva
Poesía nasal y gutural
Poesía arbitraria
Poesía copiada de los libros
Poesía basada
En la revolución de la palabra
En circunstancias de que debe fundarse
En la revolución de las ideas.

Poesía de círculo vicioso
Para media docena de elegidos:
«Libertad absoluta de expresión».
Hoy nos hacemos cruces preguntando
Para qué escribirían esas cosas
¿Para asustar al pequeño burgués?
¡Tiempo perdido miserablemente!
El pequeño burgués no reacciona
Sino cuando se trata del estómago.

¡Qué lo van a asustar con poesías!

La situación es ésta:
Mientras ellos estaban
Por una poesía del crepúsculo
Por una poesía de la noche
Nosotros propugnamos
La poesía del amanecer.
Este es nuestro mensaje,
Los resplandores de la poesía
Deben llegar a todos por igual
La poesía alcanza para todos.

Nada más, compañeros
Nosotros condenamos
—Y esto sí que lo digo con respeto—
La poesía de pequeño dios
La poesía de vaca sagrada
La poesía de toro furioso.

Contra la poesía de las nubes
Nosotros oponemos
La poesía de la tierra firme
—Cabeza fría, corazón caliente
Somos tierrafirmistas decididos—
Contra la poesía de café
La poesía de la naturaleza
Contra la poesía de salón
La poesía de la plaza pública
La poesía de protesta social.
Los poetas bajaron del Olimpo.

[Este poema recoge el espíritu de la antipoesía practicada por el poeta chileno Nicanor Parra, al que homenajeamos a los cinco años de su muerte, el 23 de enero de 2018.]